

Septiembre 14 y 15 de 1950, Año del Libertador General San Martín

41ª REUNION — 25ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora, del ingeniero Natalio Trebino
y del señor Juan de la Torre

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

ALBRIEU, Oscar E.
ALVAREZ PEREYRA, Manuel
ALLUB, Rosendo
ARGAÑA, José M.
ASTORGANO, José
ATALA, Luis
AYALA LÓPEZ TORRES, Francisco
BAGNASCO, Vicente
BENÍTEZ, Antonio J.
BERETTA, Eduardo
BERNARDEZ, Manuel
BIDEGAIN, Oscar R.
BONINO, Alberto C.
BUSTOS FIERRO, Raúl
BUTTERFIELD, Humberto
CÁMPORA, Héctor J.
CAMUS, E. P.
CANÉ, José
CARRERAS, Ernesto A.
CASAS NOBLEGA, Armando
CLEVE, Ernesto
COLOM, Eduardo
CONTE GRAND, José Amadeo
COOKE, John William
CURSACK, Roberto Enrique
DÁVILA, J. Aníbal
DECKER, Rodolfo A.
DEGREEF, Juan Ramón
DE LA TORRE, Juan
DELLEPIANE, Luis
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ, Carlos A.
DÍAZ, Manuel M.
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
ERRO, Saturnino S.
ESTRADA, Angel C.
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FERRANDO, Manuel P.
FILIPPO, Virgilio M.
FORTEZA, Eduardo Julio
FREGOSSI, Luis J.
FRONDIZI, Arturo
GARAGUSO, Bernardino Hipólito
GARAY, Marcelino S.
GARCÍA, Manuel

GIL FLOOD, Mario
GUARDO, Ricardo C.
HARAMBOURE, Horacio
IBARGUREN, Prudencio M.
ILLIA, Arturo U.
LAGRAÑA, Héctor D.
LAREO, Ricardo
LAVIA, Ludovico
LELOIR, Alejandro H.
LEMA, Manuel E.
LETAMENDI, Balbino (h.)
LÓPEZ SERROT, Oscar
LUCINI, Raúl Felipe
MACHARGO, Alfredo F.
MALDONADO LARA, José María
MARIATEGUI, Angel S.
MARINI, Angel C.
MAROTTA, José
MARTÍNEZ LUQUE, Enrique
MERCADER, Emir E.
MESSINA, Humberto
MIEL ASQUÍA, Angel J.
MONJARDIN, Federico F.
MONTES, Abel
MONTES, Juan Manuel
MONTES DE OCA, Carlos
MONTIEL, Alcides E.
MORENO, José Luis
NOVELLINO, Francisco
OSINALDE, Rafael
PALACIO, Ernesto
PASQUALL, Juan Domingo
PASTOR, Reynaldo A.
PEREYRA, Luis Alberto
PÉREZ MARTÍN, José
PIRANI, Antonio S.
PONCE, Angel L.
PONTIERI, Silverio
RABANAL, Francisco
REPETTO, Agustín
REYNÉS, Leandro R.
RICAGNO, Roberto
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ, Manuel
RODRÍGUEZ, Nerio M.
ROJAS, Absalón
ROSSI, José

ROUGGIER, Valerio S.
RUDI, Ricardo
RUMBO, Eduardo I.
SANCHEZ, Pedro
SANTANDER, Silvano
SAPORITI, Luis
SARAVIA, Teodoro S.
SARMIENTO, Manuel
SEEBER, Carlos Manuel
SILVESTRE, Adolfo J. B.
SOLA, Fernando
STINCO, Luis A.
TEJADA, Ramón Washington
TILLI, Pedro
TOMMASI, Victorio M.
TORO, Ricardo
TREBINO, Natalio
URANGA, Raúl L.
URTIAGA BILBAO, Mateo de
VALDEZ, Celestino
VANASCO, Julio A.
VAREA, Isidoro
VELLOSO COLOMBRES, Manuel F.
VERGARA, Amando
VILLACORTA, Luis René
VILLAFANE, José María
VISCA, José Emilio
VISCHI, Albino
VITOLO, Alfredo R.
YADAROLA, Mauricio L.
ZAMUDIO, Juan Carlos
ZAVALA ORTIZ, Miguel Angel

AUSENTES, CON LICENCIA:

BRUGNEROTTO, Juan N. D.
BRUNO, Domingo
OTTONELLO, Benito J.
PEREA, Pedro J.
PIEROTTI, Mario
SAN MILLÁN, Ricardo Antonio

AUSENTE, CON AVISO:

LASCIAR, Guillermo F.

SUSPENDIDO:

BALBIN, Ricardo

SUMARIO

- 1.—Enarbolamiento de la bandera nacional.
- 2.—Calendario Sanmartiniano.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: derogación de la ley 12.969, de transferencia de terrenos de la Nación a la provincia de Mendoza.
- II.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- III.—Comunicaciones de comisión.
- IV.—Despachos de comisión.
- V.—Petición particular.
- VI.—Proyecto de ley del señor diputado **Visca**: pensión a doña Celia Villegas Oromí.
- VII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado **Santander**: monumento al capitán general **Justo José de Urquiza**, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
- VIII.—Proyecto de ley del señor diputado **Rumbo**: modificación de la ley 13.337, sobre normas para otorgamiento de pensiones en lo referente al monto máximo de acumulación de beneficios por una sola persona.
- IX.—Proyecto de declaración del señor diputado **Martínez Luque**: edificios para las escuelas números 177, 95 y 261 de la ley Láinez, en la provincia de Córdoba.
- X.—Proyecto de declaración del señor diputado **Varea**: creación de un curso nocturno en la Escuela de Comercio de Río Cuarto, Córdoba, Anexa al Colegio Nacional.
- XI.—Proyecto de resolución en la mesa de la Honorable Cámara:

Del señor diputado **Bagnasco** y otros: designación de una comisión para que represente a la Honorable Cámara en el acto inaugural de la **Primera Exposición Regional de Economía** a realizarse en Avellaneda.

- 4.—Concédesese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados **Brugnerotto**, **Pierotti**, **Bruno** y **Perea**.
- 5.—Homenaje a la producción, industria y comercio de Buenos Aires.
- 6.—Continúa la consideración del proyecto de declaración por el que se expresa el anhelo de que se construya en Mendoza el edificio para la **Escuela Normal Mixta Tomás Godoy Cruz**. Se sanciona.
- 7.—Moción del señor diputado **Villafañe** de preferencia para el proyecto de declaración por el que se expresa el anhelo de que, en homenaje

a **Castro Barros**, se instale en Chuquis, La Rioja, una biblioteca.

- 8.—Proyecto de declaración a que se refiere el número 7 de este sumario.
- 9.—Consideración del proyecto de declaración a que se refieren los números 7 y 8 de este sumario. Se sanciona.
- 10.—Moción del señor diputado **Miel Asquía**: fijación de días y horas de sesión, y determinación de formas de trámite de asuntos.
- 11.—Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara.
- 12.—Indicación del señor diputado **Casas Noblega** de pronto despacho del proyecto de ley de jubilación de abogados y procuradores.
- 13.—Consideración del despacho de la comisión especial redactora de los códigos de procedimientos en lo civil, comercial y criminal y de organización de los tribunales en el proyecto de ley de organización de la justicia nacional. Se sanciona.
- 14.—Apéndice:

Sanciones de la Honorable Cámara.

—En Buenos Aires, a los catorce días del mes de septiembre de 1950, Año del Libertador General San Martín, a la hora 16 y 15:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Cámpora).—Queda abierta la sesión con la presencia de 80 señores diputados.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Córdoba don **Enrique Martínez Luque**, por corresponderle en la nómina alfabética, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y los concurrentes a las galerías, el señor diputado don **Enrique Martínez Luque** iza la bandera nacional. (Aplausos.)

2

CALENDARIO SANMARTINIANO

Sr. Presidente (Cámpora).—Invito al señor diputado por Buenos Aires don **Carlos A. Díaz** a dar lectura a la efemérides del Calendario Sanmartiniano correspondiente al día de hoy.

Sr. Díaz (C. A.).—Día 14 de septiembre:

ticipación federal, que han tenido principio de ejecución por vía administrativa.

Asunto número 10, orden del día 33, despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre aprobación de los excesos de inversión de algunos créditos autorizados al Banco de Crédito Industrial Argentino, en el presupuesto de gastos para 1948.

Asunto número 11, orden del día 40, despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre aprobación de los excesos de inversión del Banco de la Nación Argentina en la ejecución del presupuesto de 1948.

Asunto número 12, orden del día 75, despacho de las comisiones de Legislación General y de Defensa Nacional autorizando a la Dirección General de Fabricaciones Militares para ceder al obispado de Jujuy una fracción de terreno.

Asunto número 13, orden del día 67, despacho de la Comisión de Legislación General autorizando al Poder Ejecutivo a donar una partida de maderas de rezago que posee el Ministerio de Aeronáutica, al gobierno de la provincia de Córdoba.

Sr. Miel Asquía. — Pido que se vote esa parte del plan leído por Secretaría.

Sr. Presidente (Trebino). — Se va a votar el plan de labor que acaba de leerse por Secretaría.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Trebino). — Por Secretaría se continuará la lectura del plan de labor propuesto.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Asunto número 14, orden del día 68, despacho de la Comisión de Legislación General sobre modificación del artículo 3º del Código de Minería, incluyendo el tántalo y el cadmio, entre las substancias de primera categoría.

Asunto número 15, orden del día 73, despacho de la Comisión de Legislación General sobre aceptación de la donación de un terreno ofrecido por el gobierno de la provincia de Tucumán para instalar el aeropuerto Tucumán.

Asunto número 16, orden del día 74, despacho de la Comisión de Legislación General sobre transferencia de un inmueble de la Nación a la municipalidad del departamento San Carlos, Mendoza.

Asunto número 17, despachos de la Comisión de Asuntos Extranjeros sobre tratados con naciones extranjeras, cuyas órdenes del día llevan los números 11, 109, 9, 29, 30, 32, 81, 15, 98, 99, 14, 31, 27, 28, 13, 120, 121, 128, 122, 123, 124, 125, 126 y 127.

Asunto número 18, despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales otorgando permiso a varios ciudadanos para aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros, contenidos en las órdenes del día 1, 2, 57, 58 y 115.

Sr. Presidente (Trebino). — Se va a votar la parte del plan de trabajo que acaba de leer la Secretaría.

— Resulta afirmativa de 68 votos con quórum de 80 señores diputados.

12

INDICACION

Sr. Presidente (Trebino). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Casas Noblega. — Señor presidente: soy autor de un proyecto de ley sobre jubilación de abogados y procuradores. Con posterioridad a su presentación han tenido entrada otras iniciativas similares. Por otra parte, diversas provincias están instituyendo cajas forenses; entre ellas, Santa Fe y Buenos Aires ya las tienen.

En mi proyecto reflejo una vieja aspiración de la gente del foro, en el sentido de que se establezca una caja nacional. A fin de que la Cámara pueda abocarse a la concreción de ese anhelo, solicito a la comisión el pronto despacho del asunto.

Sr. Presidente (Trebino). — La comisión tendrá en cuenta las palabras del señor diputado.

Ha venido la media hora destinada a consultas, pedidos de pronto despacho y mociones de preferencia.

Se va a pasar a la orden del día.

13

ORGANIZACION DE LA JUSTICIA NACIONAL

(Orden del día número 134)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial Redactora de los Códigos de Procedimientos en lo Civil, Comercial y Criminal y de Organización de los Tribunales ha considerado el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre organización de la justicia nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Poder Judicial

Artículo 1º — El Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorios.

Magistratura nacional

Art. 29 — Los jueces de la Nación son nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado y durante el receso del Congreso, en comisión hasta la próxima legislatura. Recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanezcan en sus funciones. La compensación será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, cualquiera fuera el lugar donde desempeñen sus funciones. Este principio se aplicará igualmente a la retribución de todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional.

Art. 39 — Los jueces de la Nación son inamovibles y conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Sólo pueden ser juzgados y removidos, los de la Corte Suprema de Justicia, por juicio político ante el Senado de la Nación, y los inferiores, por un tribunal judicial en la forma que establece la ley.

Art. 49 — Para ser juez de la Corte Suprema y procurador general de la Nación, se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con diez años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 59 — Para ser juez de una cámara nacional de apelaciones se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con seis años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 69 — Para ser juez nacional de primera instancia, se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con cuatro años de ejercicio y veinticinco años de edad.

Art. 79 — Antes de asumir el cargo, los jueces prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente y de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación.

Art. 89 — No podrán ser simultáneamente jueces del mismo tribunal colegiado, parientes o afines dentro del cuarto grado civil. En caso de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará el cargo.

Art. 99 — Es incompatible la magistratura judicial, con toda actividad de proselitismo político, con el ejercicio del comercio y la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge y los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados: excepto la comisión de estudios o la docencia. No estará permitido, sin embargo, el desempeño de la docencia primaria o secundaria. A los jueces de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar o concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo.

Art. 10. — Los jueces residirán en la ciudad en que ejerzan sus funciones o en un radio hasta de sesenta kilómetros de la misma. Para residir

a mayor distancia, deberán recabar autorización de la Corte Suprema.

Art. 11. — Los jueces de primera instancia concurrirán a su despacho todos los días hábiles durante las horas que funcione el tribunal. Los jueces de la Corte Suprema y cámaras nacionales de apelaciones, lo harán los días y horas que el respectivo tribunal fije para los acuerdos y audiencias.

Funcionarios y empleados

Art. 12. — Sin perjuicio de los requisitos que por reglamento establezca la Corte Suprema, para ser secretario o prosecretario de los tribunales nacionales, se requiere: ser argentino, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional. No podrá designarse secretario o prosecretario al pariente del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Art. 13. — Para ser designado funcionario o empleado en la justicia nacional cuando la ley no exija además otras condiciones especiales, se requiere ser argentino y se dará preferencia a quienes acrediten haber terminado estudios secundarios, salvo que se trate del personal de mastranza y servicio.

Art. 14. — La Corte Suprema de Justicia nombra, remueve y decide sobre toda cuestión vinculada al personal de la justicia de la Nación cuya designación no dependa del Poder Ejecutivo, conforme a las normas de esta ley y a las que aquélla establezca en sus reglamentos.

Art. 15. — Los funcionarios y empleados de la justicia de la Nación, no podrán ser removidos sino por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo, con audiencia del interesado.

Art. 16. — Los funcionarios y empleados tendrán los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan. La Corte Suprema acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados debidamente calificada y a su antigüedad.

Sanciones disciplinarias

Art. 17. — Las faltas de los funcionarios, empleados y demás auxiliares de la justicia de la Nación, podrán ser sancionados con prevención, apercibimiento, multa hasta quinientos pesos, suspensión no mayor de treinta días, cesantía y exoneración, conforme a lo establecido por esta ley y los reglamentos.

En análogas circunstancias los jueces serán pasibles de las tres primeras sanciones mencionadas precedentemente, sin perjuicio de las que dispone la ley sobre enjuiciamiento y remoción.

Art. 18. — Los tribunales colegiados y jueces podrán imponer arresto personal hasta de quince días u otras sanciones disciplinarias a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas, por faltas que cometieren contra su dignidad o decoro en las audiencias o escritos o contra su autoridad u obstruyendo el curso de la justicia. El arresto será cumplido en una dependencia del propio tribunal o juzgado o en el domicilio del afectado.

Art. 19. — Las sanciones aplicadas por la Corte Suprema de Justicia o las cámaras nacionales de apelaciones, sólo serán susceptibles de un reclamo de reconsideración ante el mismo tribunal. Las sanciones dispuestas por los jueces nacionales de primera instancia podrán ser apeladas, en efecto suspensivo, dentro del tercero día.

Auxilio debido a la justicia nacional

Art. 20. — Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo nacional, prestarán de inmediato todo el auxilio que les sea requerido por los jueces nacionales dentro de su jurisdicción, para el cumplimiento de sus resoluciones. Y siempre que un juez nacional dirija un despacho a un juez provincial, para practicar actos judiciales será cumplido el encargo. Lo mismo cuando un oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez nacional para efectuar un embargo, secuestro o prisión dentro de su jurisdicción, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.

Corte Suprema de Justicia

Art. 21. — La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por cinco jueces y un procurador general, tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y ejercerá superintendencia sobre todos los tribunales de la Nación en la forma que se establezca en sus reglamentos.

Art. 22. — Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal, se hará por sorteo con los jueces que desempeñen la presidencia de las cámaras nacionales de apelaciones, o con sus substitutes legales, debiendo reunir el juez llamando a integrarla las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte.

Art. 23. — Las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que éstos concordaren con la solución del caso. Si hubiere desacuerdo se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones.

Art. 24. — La Corte Suprema de Justicia conocerá:

19 Originaria y exclusivamente en las causas que se susciten entre la Nación o una provincia o sus vecinos con un Estado extranjero; en las causas concernientes a embajadores, ministros plenipotenciarios o cónsules extranjeros, y en las causas entre la Nación y una o más provincias o de éstas entre sí. En estos supuestos, la Corte Suprema no procederá de oficio y sólo ejercerá jurisdicción en los casos contenciosos en que sea requerida a instancia de parte.

No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio.

A los efectos pertinentes de la primera parte de este inciso, se considerarán vecinos:

- a) Las personas físicas domiciliadas en el país desde dos o más años antes de la iniciación de la demanda, cualquiera fuese su nacionalidad;
- b) Las personas jurídicas de derecho público del país;
- c) Las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país;
- d) Las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad de sus miembros se halle en la situación prevista en el apartado a).

Son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros las que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático.

No se dará curso a las acciones contra las personas mencionadas en el punto anterior sin requerirse previamente del respectivo embajador o ministro plenipotenciario la conformidad de su gobierno para someterlas a juicio.

Son causas concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione

su responsabilidad civil o criminal.

- 2º Por recurso extraordinario, en los casos del artículo 14 de la ley 48, y 6º de la ley 4.055.
- 3º Por recurso de casación y de revisión de la jurisprudencia en la forma que la ley determina.
- 4º En los recursos de revisión referidos por los artículos 2º y 4º de la ley 4.055, y en el de aclaratoria de sus propias resoluciones.
- 5º En los recursos directos por apelación denegada.
- 6º En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las cámaras nacionales de apelaciones.
- 7º Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones, en los siguientes casos:

- a) Causas en que la Nación directamente sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a cincuenta mil pesos;
- b) Extradición de criminales reclamados por países extranjeros;
- c) Causas a que dieren lugar los apremios o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles;
- d) Causas criminales por delitos contra la seguridad del Estado, de la Nación, o contra los poderes públicos y el orden constitucional, cuando la pena aplicable exceda de seis años de prisión o reclusión;
- e) De las suscitadas entre una provincia y los vecinos de otra.

- 8º De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlo. Decidirá asimismo sobre el juez competente en los casos en que su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.

Cámaras nacionales de apelaciones

Art. 25. — Las cámaras nacionales de apelaciones podrán dividirse en salas de tres miembros cuando estén integradas por número suficiente de jueces.

Art. 26. — Las cámaras nacionales de apelaciones designarán anualmente un presidente y uno o más vicepresidentes, que se distribuirán sus funciones en la forma que lo determinen las reglamentaciones que se dicten.

Art. 27. — Las decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que las integran, siempre que éstos concuerden en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones.

Si se tratare de sentencias definitivas de unas u otras en procesos ordinarios, se dictarán por deliberación y voto de los jueces que las subscriben, previo sorteo de estudio. En las demás causas, las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal.

Art. 28. — Las cámaras nacionales de apelaciones se reunirán en tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor entre sus salas, si las hubiere, y entre los juzgados de primera instancia que dependan de ella, resolviendo las cuestiones que se susciten al respecto; b) para unificar la jurisprudencia de las salas o evitar sentencias contradictorias, cuando no exista interpretación de la Corte Suprema. La doctrina legal o interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia, respecto de los cuales la cámara que la pronuncie es tribunal de alzada, in perjuicio de que los jueces de primera instancia o de cámara, dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá volverse sobre ella como consecuencia de una nueva sentencia plenaria.

Art. 29. — Las diligencias procesales se cumplirán ante la cámara o en su caso ante la sala que conozca cada juicio.

Art. 30. — Contra las sentencias de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas no habrá otro recurso de alzada que los que autoricen las leyes para ante la Corte Suprema.

Art. 31. — Las cámaras nacionales de apelaciones o sus salas se integrarán por sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego, de mismo modo, con los jueces de las otras cámaras nacionales de apelaciones, en el orden que establezca la reglamentación, y por último, siempre por sorteo, con los jueces de primera instancia que dependan de la cámara o sala que deba integrarse.

Tribunales nacionales de la Capital Federal

Art. 32. — Los tribunales nacionales de la Capital Federal estarán integrados por:

19 Cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal:

- a) En lo civil, comercial y penal especial y en lo contencioso administrativo;
- b) En lo civil;
- c) En lo comercial;
- d) En lo penal;
- e) Del trabajo;
- f) De paz.

20 Jueces nacionales de primera instancia de la Capital Federal:

- a) En lo civil y comercial especial, en lo penal especial y en lo contencioso administrativo;
- b) En lo civil;
- c) En lo comercial;
- d) En lo penal: de sentencia, de instrucción y correccional;
- e) Del trabajo;
- f) De paz.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso-administrativo de la Capital Federal

Art. 33. — La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, existente a la fecha de sanción de esta ley, se designará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso-administrativo» y será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial, en lo penal especial y en lo contencioso-administrativo.

Conocerá asimismo, de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de organismos administrativos, en los casos autorizados por las leyes y contra las resoluciones del jefe de la Policía Federal, en materia de derecho de reunión.

Art. 34. — Actuará dividida en tres salas, por especialidades dentro de su competencia, según las disposiciones que adopte la misma Cámara, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

Art. 35. — Las dos Cámaras de Apelaciones en lo Civil de la Capital, existentes a la fecha de sanción de esta ley, constituirán un solo tribunal que se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de la Capital Federal». Será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal

Art. 36. — La Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital, existente a la fecha de sanción de esta ley, se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de la Capital Federal». Será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal de la Capital Federal

Art. 37. — La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, existente a la fecha de la sanción de esta ley, se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, de la Capital Federal».

Conocerá como tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo penal de la Capital Federal.

Art. 38. — Créase bajo la dependencia de la cámara, la Oficina de Servicio Auxiliar, con los empleados que fija la ley. Dichos empleados deberán ser puestos de modo temporario a disposición de los jueces de instrucción y en lo penal especial, con el solo objeto de lograr una más pronta substanciación de las causas que por su naturaleza o complejidad no puedan atenderse eficazmente con el personal de los juzgados.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal

Art. 39. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia del Trabajo, de la Capital, se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la Capital Federal». Se compondrá de doce miembros y será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia del trabajo, de la Capital Federal.

Cámara Nacional de Apelaciones de Paz, de la Capital Federal

Art. 40. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia de Paz, de la Capital, se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones de Paz, de la Capital Federal». Será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia de paz, de la Capital Federal.

Jueces nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial, de la Capital Federal

Art. 41. — Los juzgados federales números 5 y 6, de la Capital Federal, que existen a la fecha de la sanción de esta ley, se denominarán:

«Juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial», conservando su actual competencia, pero no conocerán:

- a) De las causas cuyo conocimiento les está atribuida por razones de la nacionalidad o el domicilio de las personas;
- b) De las causas que se atribuye por esta ley a los jueces nacionales de primera instancia en lo contenciosoadministrativo, de la Capital Federal;
- c) De las causas a que se refiere el artículo 46 de esta ley.

Art. 42. — Conocerán además de las causas que versen sobre hechos, actos y contratos:

- a) Concernientes a los medios de transportes terrestres, con excepción de las acciones civiles por reparación de los daños y perjuicios causados por delitos y cuasi delitos;
- b) Regidos por el derecho de la navegación y el derecho aeronáutico.

Jueces nacionales de primera instancia en lo penal especial, de la Capital Federal

Art. 43. — Los juzgados federales en lo criminal y correccional, de la Capital, números 1 y 2, que existen a la fecha de la sanción de esta ley, se denominarán: «Juzgados nacionales de primera instancia en lo penal especial, de la Capital Federal», conservando su actual competencia, pero no conocerán de las causas cuyo conocimiento les está atribuido por razón del lugar, o las que se les hayan atribuido por disposición expresa de esta ley a otro tribunal.

Art. 44. — Cuando un delito o un concurso de delitos atribuido a una o más personas como autores, cómplices o encubridores, diera lugar a la instrucción de un solo proceso, y uno o varios de los hechos o personas cayera bajo la competencia de los jueces nacionales de primera instancia en lo penal especial de la Capital Federal, dicho proceso será totalmente substanciado y terminado en el tribunal de esta competencia.

Jueces nacionales de primera instancia en lo contenciosoadministrativo, de la Capital Federal

Art. 45. — Los juzgados federales números 3 y 4, de la Capital Federal, creados por la ley de presupuesto del año 1948, a que se refiere el artículo 6º de la ley 13.278, y los juzgados creados, para la Capital Federal, por la ley 12.833, se denominarán: «Juzgados nacionales de primera instancia en lo contenciosoadministrativo, de la Capital Federal».

Serán competentes para conocer:

- a) De las causas contenciosoadministrativas;

- b) De las causas que versen sobre contribuciones nacionales y sus infracciones;
- c) De las causas cuyo conocimiento está atribuido a los jueces creados, para la Capital Federal, por la ley 12.833;
- d) De los recursos contra las resoluciones administrativas, que las leyes en vigor atribuyen a los jueces federales existentes a la fecha de la sanción de esta ley.

Jueces nacionales de primera instancia en lo civil, en lo comercial y penal de sentencia, de instrucción y correccional

Art. 46. — Los actuales juzgados en lo civil, en lo comercial, de sentencia, de instrucción y correccional de la Capital, se denominarán, respectivamente: «Juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal y juzgados nacionales de primera instancia en lo penal de la Capital Federal: de sentencia, de instrucción y correccional.»

Tendrán la misma competencia actual, con las modificaciones que resultan de la presente ley.

La Corte Suprema podrá disponer la distribución por especialidades de las causas de competencia de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil y en lo comercial de la Capital Federal, según las necesidades de la administración de justicia y sin que esta medida pueda privar a los jueces del conocimiento de los asuntos pendientes.

Jueces nacionales de primera instancia del trabajo de la Capital Federal

Art. 47. — Los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo, de la Capital Federal, tendrán la competencia que les atribuye la ley 12.948, aun en las causas en que sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad.

Créanse diez nuevos juzgados nacionales de primera instancia del trabajo, en la Capital Federal, con el mismo personal asignado a los que funcionan actualmente.

Jueces nacionales de paz de la Capital Federal

Art. 48. — Con excepción de las causas mencionadas en los artículos 41, 42, 45 y 47, los juzgados de paz de primera instancia de la Capital conocerán:

- a) De los asuntos civiles y comerciales en que el valor cuestionado no exceda de diez mil pesos moneda nacional;

- b) De los juicios sucesorios cuyo haber hereditario no exceda prima facie de treinta mil pesos moneda nacional;
- c) De los concursos civiles cuyo pasivo no sobrepase la suma de veinte mil pesos moneda nacional;
- d) De las pequeñas quiebras a las que se refiere el título XXIII de la ley 11.719. Se considera pequeña quiebra, la quiebra cuyo pasivo no exceda de veinte mil pesos moneda nacional.

La competencia de los juzgados mencionados subsistirá en los juicios sucesorios aun cuando hubiese contestación sobre el carácter de herederos de las personas que se presenten como tales y aun cuando el haber hereditario exceda en definitiva hasta en un cincuenta por ciento de la suma fijada en el apartado b);

- e) Quedan exceptuados de la competencia de los juzgados de paz, los interdictos y las venias, así como también los asuntos que se refieran al derecho de familia, con excepción de la hipótesis especificada en el apartado b).
- 29 De las demandas contra los juicios universales enumerados en el inciso anterior, cualquiera sea su importancia;
- 30 De las informaciones sumarias que se refieran a los juicios de competencia del tribunal;
- 40 De las demandas por desalojo, rescisión, cumplimiento, cobro de alquileres y demás cuestiones vinculadas al contrato de locación, cualquiera sea su importancia, haya o no contrato escrito;
- 50 De las demandas reconconvencionales, cualquiera sea su monto.

Oficina de Mandamientos y Notificaciones para la justicia de la Capital Federal

Art. 49. — La actual oficina organizada por decreto del Poder Ejecutivo 25.559 de 1948, tendrá a su cargo la diligencia de los mandamientos y notificaciones que expidan las cámaras nacionales de apelaciones y juzgados nacionales de primera instancia de la Capital Federal.

La Corte Suprema podrá encomendar a la misma oficina iguales diligencias del tribunal.

Art. 50. — Quedan incorporados a dicha oficina los oficiales de justicia de los actuales juzgados federales en lo civil y comercial.

Art. 51. — La Corte Suprema ejerce superintendencia sobre la Oficina de Mandamientos y

Notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento.

Tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorios

Art. 52. — Los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorios estarán integrados por:

- 1º Por las cámaras nacionales de apelaciones con asiento en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia y Comodoro Rivadavia;
- 2º Por jueces nacionales de primera instancia con asiento en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Mercedes, Azul, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto, Bell Ville, Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, Paso de los Libres, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Mendoza, San Rafael, San Juan, Catamarca, La Rioja; y en los territorios de Río Negro, Neuquén, Chaco, Misiones, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y Gobernación Marítima de Tierra del Fuego;
- 3º Por los jueces nacionales de paz de los territorios nacionales.

Cámaras nacionales de apelaciones de provincias y territorios

Art. 53. — Las actuales cámaras federales de La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, se denominarán: cámaras nacionales de apelaciones de La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, respectivamente, y serán competentes para conocer de las causas que les están asignadas hasta el presente, con las siguientes modificaciones:

- a) La Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata se compondrá de siete miembros y será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia de La Plata, San Nicolás, Mercedes, Azul, y territorio de La Pampa;
- b) La Cámara Nacional de Apelaciones de Bahía Blanca será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia de Bahía Blanca, y territorios de Río Negro y Neuquén;
- c) La Cámara Nacional de Apelaciones de Paraná, será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia de Paraná, Corrientes, Paso de

los Libres, Concepción del Uruguay, y territorio de Misiones.

Art. 54. — Las actuales cámaras de apelaciones de los territorios del Norte y del Sur, se denominarán: Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia y de Comodoro Rivadavia, respectivamente, y serán competentes para conocer de las causas que les están asignadas hasta el presente, con las siguientes modificaciones:

- a) La Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia en los territorios del Chaco y Formosa;
- b) La Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Rivadavia será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia en los territorios de Chubut, Santa Cruz, y de las gobernaciones militar de Comodoro Rivadavia y marítima de Tierra del Fuego.

Jueces nacionales de primera instancia de provincias y territorios

Art. 55. — Los actuales jueces federales con asiento en las provincias se denominarán jueces nacionales de primera instancia, conservando su actual competencia; pero conocerán además:

- a) De las causas civiles entre la provincia en que tuvieren su asiento y algún vecino o vecinos de otra o de la Capital Federal. Cuando hubiere más de un juez nacional de primera instancia en la provincia, conocerá de estas causas, el que tenga su asiento en la Capital;
- b) De los hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transporte terrestre, con excepción de las acciones civiles por reparación de daños y perjuicios causados por delitos o cuasi delitos; y a los regidos por el derecho de la navegación y por el derecho aeronáutico;
- c) De las causas que versen sobre negocios particulares de los cónsules extranjeros y de todas las concernientes a los vice-cónsules extranjeros;
- d) De los recursos de hábeas corpus, cuando la amenaza, restricción o privación de la libertad provenga de una autoridad nacional o afecte a una persona integrante o dependiente de una autoridad nacional.

Art. 56. — Los actuales jueces letrados de los territorios nacionales, se denominarán: jueces nacionales de primera instancia y conservarán

su actual organización y competencia, quedando suprimidas las consultas a que se refiere el artículo 17, inciso 4 de la ley 4.055. Conocerán igualmente de las causas atribuidas hasta ahora a los jueces creados por la ley 12.833.

Art. 57. — Los juzgados creados por la ley 12.833, se convierten y se designarán juzgados nacionales de primera instancia conservando los de Santa Cruz, Neuquén, Santa Rosa, Resistencia, Formosa y Misiones, su asiento actual. Tendrán la misma competencia que los juzgados nacionales de primera instancia, a que se refiere el artículo anterior.

El dr. Rawson, tendrá su asiento en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia y el de Viedma, en Fuerte General Roca.

Créase un Juzgado Nacional de Primera Instancia, con asiento en la gobernación marítima de Tierra del Fuego, con jurisdicción en ella, en las islas Malvinas y en la zona Antártida Argentina, con la misma competencia de los jueces a que se refiere el artículo anterior.

Art. 58. — Los actuales jueces de paz de los territorios, se designarán jueces nacionales de paz de los territorios.

Para ser juez nacional de paz de territorios se requiere: ser argentino, saber leer y escribir, tener veinticinco años de edad y antecedentes honorables.

Los designa el Poder Ejecutivo a propuesta del gobernador del respectivo territorio y conservarán su cargo mientras dure su idoneidad y buena conducta. Sólo serán removidos por resolución de la cámara nacional de apelaciones respectiva, previo sumario y audiencia del interesado.

Cuerpos técnicos periciales y peritos auxiliares de la justicia nacional

Art. 59. — Como auxiliares de la justicia nacional, y bajo la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, funcionarán:

- a) Cuerpos técnicos periciales: de médicos forenses, de contadores y de calígrafos;
- b) Peritos ingenieros, tasadores, traductores e intérpretes.

Art. 60. — Los integrantes de los cuerpos técnicos, los peritos y sus respectivos empleados serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo de conformidad con lo que establece el decreto ley 33.827 del año 1944.

Art. 61. — Los cuerpos técnicos tendrán su asiento en la Capital Federal y se integrarán con los funcionarios de la respectiva especialidad que la ley de presupuesto asigne a los tribunales nacionales de la Capital Federal y de las provincias y territorios nacionales. Los peritos serán también los que la ley de presu-

puesto asigne a los tribunales nacionales de la Capital Federal y de las provincias y territorios nacionales.

Art. 62. — Para ser miembro de los cuerpos técnicos se requerirá: ciudadanía argentina, veinticinco años de edad, tres años de ejercicio en la respectiva profesión o docencia universitaria.

Art. 63. — Los cuerpos técnicos serán dirigidos y representados, respectivamente, por un decano, designado anualmente por sus integrantes entre los asignados a la justicia de la Capital Federal. El decano distribuirá la labor según las reglamentaciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

Art. 64. — La labor de los peritos (artículo 59, inciso b) será distribuida según las reglamentaciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

Art. 65. — Son obligaciones de los integrantes de los cuerpos técnicos y de los peritos:

- a) Practicar exámenes, experimentos y análisis, respecto de personas, cosas o lugares;
- b) Asistir a cualquier diligencia o acto judicial;
- c) Producir informes periciales.

Actuarán siempre a requerimiento de los jueces.

Art. 66. — La morgue judicial es un servicio del cuerpo médico forense que funcionará bajo la autoridad de su decano y la dirección de un médico, que debe reunir las mismas condiciones que los miembros del cuerpo médico forense.

Art. 67. — Corresponde a la morgue judicial:

- a) Proveer los medios necesarios para que los médicos forenses practiquen las autopsias y demás diligencias dispuestas por autoridades competentes;
- b) Exhibir por orden de autoridad competente los cadáveres que les sean entregados a los fines de su identificación;
- c) Formar y conservar el Museo de Medicina Legal.

Art. 68. — Para fines didácticos, la morgue judicial deberá:

- a) Facilitar a las cátedras de medicina legal de las universidades nacionales las piezas del museo;
- b) Admitir en el acto de las autopsias, salvo orden escrita impartida en cada caso por la autoridad judicial competente, el acceso de profesores y estudiantes de medicina legal de las universidades nacionales, en el número, condiciones y con los recaudos que se establezcan en los reglamentos.

Art. 69. — El cuerpo médico forense contará con uno o más peritos químicos, que deberán reunir las mismas condiciones que sus miembros y tendrán sus mismas obligaciones.

Art. 70. — Para ser perito ingeniero o traductor se requieren las mismas condiciones que para ser integrante de los cuerpos técnicos, y para ser tasadores o intérpretes, las que se requieran por las reglamentaciones que se dicten por la Corte Suprema de Justicia. Tendrán las mismas obligaciones que los miembros de los cuerpos técnicos.

Art. 71. — Sin perjuicio de la distribución de tareas a que se refiere el artículo 63 de esta ley, los magistrados judiciales podrán disponer, cuando lo crean necesario, de los servicios de cualquiera de los integrantes de los cuerpos técnicos.

Art. 72. — Los integrantes de los cuerpos técnicos y los peritos:

- a) Prestarán juramento de desempeñar fielmente su cargo, ante el tribunal que designe la Corte Suprema de Justicia;
- b) No podrán ser designados peritos, a propuesta de parte en ningún fuero;
- c) Además de las designaciones de oficio efectuadas por los jueces en materia penal, podrán ser utilizados excepcionalmente por los jueces de los restantes fueros, cuando medien notorias razones de urgencia, pobreza o interés público;
- d) Todos los peritos para cuyo nombramiento se requiera título profesional, tendrán las mismas garantías y gozarán, como mínimo, de igual sueldo que los secretarios de primera instancia de la Capital.

Cuando el título requerido fuera universitario, los peritos tendrán la misma jerarquía y gozarán como mínimo de igual sueldo que los procuradores fiscales de primera instancia. Para todos los peritos regirá lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.

Disposiciones especiales transitorias

Art. 73. — El Archivo General de los Tribunales, el Registro Público de Comercio y el Boletín Oficial dependerán del Poder Ejecutivo de la Nación. Una ley especial establecerá su nueva organización y funcionamiento.

Art. 74. — La Secretaría Electoral de la Capital, el Fichero Nacional de Enrolados y las secretarías electorales de las capitales de provincias y territorios seguirán a cargo del juez que actualmente las atiende.

Art. 75. — En lo no modificado por la presente ley, los tribunales nacionales continuarán rigiéndose por sus leyes de organización.

Art. 76. — Las causas en trámite seguirán hasta su terminación en los tribunales donde estén radicadas en el momento de entrar en vigencia esta ley.

Art. 77. — Las disposiciones de la presente ley referentes a los requisitos para la designación de funcionarios y empleados judiciales, no se aplicarán a los que estén desempeñando sus cargos en el momento de entrar en vigor.

Las disposiciones del artículo 12, en cuanto al título habilitante, no se aplicarán para cubrir las vacantes existentes o las que se produzcan dentro de los tres años de entrar en vigor esta ley, pudiendo proveerse las mismas con quienes, poseyendo título de escribano nacional o de procurador universitario, pertenezcan a la administración de justicia y siempre que en las respectivas leyes de organización vigentes a la fecha de la sanción de esta ley tales títulos habilitaran para ocupar los cargos vacantes.

Art. 78. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación redistribuirá las secretarías y prosecretarías de los juzgados federales existentes a la fecha (ley 13.278, artículo 7º) y las de los juzgados creados por la ley 12.833, entre los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial, en lo penal especial y en lo contencioso administrativo de la Capital Federal, teniendo en cuenta la labor asignada a unos y otros por esta ley.

Realizada esta redistribución, los prosecretarios, ujieres y empleados de los actuales juzgados de sentencia de la Capital Federal, que actúan en los trámites relacionados con las leyes 12.830 y 12.833, volverán a desempeñarse en sus anteriores funciones.

Art. 79. — A los efectos pertinentes de lo dispuesto en los artículos 4º, 5º y 6º, se considerará la antigüedad en la función judicial como equivalencia al ejercicio de la profesión de abogado. No requerirán nuevo nombramiento los magistrados cuya denominación o competencia actual cambie en virtud de esta ley.

Art. 80. — Hasta tanto se dicte la ley que reglamente la organización de los ministerios públicos, éstos continuarán desempeñándose bajo la superintendencia de la Corte Suprema, la que ajustará sus funciones de acuerdo a la organización que por esta ley se da a la justicia nacional.

Art. 81. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará a rentas generales.

Art. 82. — Esta ley entrará en vigencia a los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 83. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 84. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 14 de septiembre de 1950,
Año del Libertador General San Martín.

Antonio J. Benítez. — Victorio M. Tommasi. — Vicente Bagnasco. — Raúl Bustos Fierro. — John William Cooke. — Saturnino S. Erro.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Poder Judicial

Artículo 1º — El Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal, los tribunales federales con asiento en las provincias, y los tribunales nacionales de los territorios.

Magistratura nacional

Art. 2º — Los jueces de la Nación son inamovibles y conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones.

Art. 3º — Los jueces de la Nación son nombrados por el presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia, con acuerdo del Senado, y durante el receso del Congreso directamente en comisión hasta la próxima legislatura; y sólo pueden ser juzgados y removidos, los de la Corte Suprema, por juicio político ante el Senado, y los inferiores, por un tribunal judicial en la forma que la ley establezca.

Art. 4º — Para ser juez de la Corte Suprema y procurador general de la Nación, se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con diez años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 5º — Para ser juez de una Cámara Nacional de Apelaciones se requiere ser argentino, abogado graduado en universidad nacional con seis años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 6º — Para ser juez nacional de primera instancia se requiere ser argentino, abogado graduado en universidad nacional, con cuatro años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 7º — Antes de asumir el cargo, los jueces prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente y de conformidad con lo que prescribe la Constitución.

Art. 8º — No podrán ser simultáneamente jueces del mismo tribunal los parientes o afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará el cargo.

Art. 9º — Es incompatible la magistratura judicial con toda intervención política, salvo la emisión del voto; con toda actividad comercial o profesional, y con todo empleo o cargo público o privado, excepto la comisión de estudios o la docencia universitaria.

Art. 10. — Los jueces residirán en el lugar donde ejerzan sus funciones, o a no más de cuarenta kilómetros de ese lugar, con autorización de la Corte Su-

prema. Concurrirán todos los días hábiles a sus despachos durante el horario reglamentario.

Art. 11. — La Corte Suprema de Justicia y las cámaras de apelación tendrán el tratamiento de excelentísimas y sus miembros el de excelencia; los jueces de primera instancia, el de señoría.

De los funcionarios y empleados

Art. 12. — Sin perjuicio de los requisitos que por reglamento establezca la Corte Suprema, para ser secretario de los tribunales nacionales se requiere ser argentino, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional. No podrá designarse secretario de primera instancia al pariente del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Art. 13. — Para ser funcionario o empleado de la justicia nacional, cuando la ley no exija además otras condiciones especiales, se requiere ser argentino y poseer título de terminación de estudios secundarios. Queda exceptuado de este último requisito el personal de servicio y maestranza.

Art. 14. — La Corte Suprema de Justicia y las cámaras nacionales de apelación nombran sus funcionarios y empleados, y deciden respecto de las licencias que solicitaren. Los funcionarios y empleados dependientes de los jueces de primera instancia serán nombrados a propuesta de éstos por las cámaras de apelación. Los jueces podrán conceder a su personal licencias que no excedan de ocho días.

Art. 15. — Los funcionarios y empleados de la justicia nacional no podrán ser removidos sino por el mismo tribunal de su nombramiento y sólo por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo, con audiencia del interesado.

Art. 16. — Los funcionarios y empleados tendrán los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan.

La Corte Suprema acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados debidamente calificada y a su antigüedad.

Sanciones disciplinarias

Art. 17. — Las faltas de los funcionarios, empleados y demás auxiliares de la justicia nacional, podrán ser sancionadas con prevención, apercibimiento, multa hasta quinientos pesos, suspensión no mayor de treinta días, cesantía y exoneración, por el tribunal de que dependan, como lo establezca esta ley y los reglamentos.

En análogas circunstancias los jueces serán pasibles de las tres primeras sanciones mencionadas precedentemente, sin perjuicio de lo que disponga la ley sobre su enjuiciamiento y remoción.

Art. 18. — Podrán asimismo los tribunales y jueces imponer sanciones disciplinarias a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas, por faltas que cometieren contra su dignidad o decoro en las audiencias o escritos o contra su autoridad obstruyendo el curso de la justicia. Además de las correcciones pertinentes indicadas en el artículo anterior, podrán imponer el arresto personal hasta de quince días.

Art. 19. — Las sanciones aplicadas por la Corte Suprema de Justicia o las cámaras nacionales de apelación, sólo serán susceptibles de un reclamo de reconsideración ante el mismo tribunal.

Las sanciones dispuestas por los jueces de primera instancia que no sean de simple prevención, podrán ser apeladas dentro del tercer día.

Auxilio debido a la justicia nacional

Art. 20. — Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional prestarán de inmediato todo el auxilio que les sea requerido por los jueces nacionales para el cumplimiento de sus resoluciones, y siempre que un juez nacional dirija un despacho a un juez provincial, para practicar actos judiciales, será cumplido el encargo. Lo mismo cuando un oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez o tribunal nacional para efectuar un embargo, secuestro o prisión, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.

Corte Suprema de Justicia

Art. 21. — La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por cinco jueces y un procurador general. Tendrá su sede en la Capital Federal. Dictará su reglamento interno y económico y ejercerá superintendencia sobre todos los jueces y tribunales nacionales.

Art. 22. — Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal, se hará por sorteo con los jueces que desempeñen la presidencia de las cámaras nacionales de apelación de la Capital, o con sus substitutes legales, debiendo todos reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la corte.

Art. 23. — Las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus ministros, siempre que éstos concordaren en la solución del caso. Si hubiere discordia se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones.

Art. 24. — La Corte Suprema de Justicia conocerá:

1º Originaria y exclusivamente en las causas que se susciten entre la Nación o una provincia o sus vecinos con un Estado extranjero; en las causas concernientes a embajadores, ministros plenipotenciarios o cónsules extranjeros, y en las causas entre la Nación y una o más provincias o de éstas entre sí. En estos supuestos la Corte Suprema no procederá de oficio y sólo ejercerá jurisdicción en los casos contenciosos en que sea requerida a instancia de parte.

No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio.

A los efectos pertinentes de la primera parte de este inciso se considerarán vecinos:

- a) A las personas físicas domiciliadas en el país desde dos o más años antes de la iniciación de la demanda, cualquiera fuese su nacionalidad;
- b) A las personas jurídicas de derecho público del país;
- c) A las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país;
- d) A las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad de sus

miembros se halle en la situación prevista en el apartado a).

Son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las que les afectan directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afectan a las personas de su familia o a las de la embajada o legación.

No se dará curso a las acciones contra las personas mencionadas en el punto anterior, sin requerirse previamente del respectivo embajador o ministro plenipotenciario la conformidad de su gobierno para someterlas a juicio.

Son causas concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal.

- 2º Originariamente y por recurso extraordinario en el modo que la ley establezca, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución Nacional y se controvieran por parte interesada.
- 3º Por recurso extraordinario en casación y del pedido de revisión de la jurisprudencia, en la interpretación e inteligencia de los códigos civil, de comercio, penal, de minería, aeronáutico, sanitario y de derecho social, o leyes nacionales, en la forma que la ley determine.
- 4º En los recursos de reposición y aclaratoria de sus propias resoluciones.
- 5º En los recursos directos por apelación denegada.
- 6º En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las cámaras nacionales de apelación.
- 7º Por apelación ordinaria, de las sentencias definitivas de los tribunales nacionales de segunda instancia, en los siguientes casos:

- a) Causas en que la Nación directamente sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a 50.000 pesos;
- b) Extradición de criminales reclamados por países extranjeros;
- c) Causas a que dieren lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles;
- d) Causas criminales por delitos contra la seguridad del Estado, de la Nación, o contra los poderes públicos y el orden constitucional, cuando la pena aplicable exceda de seis años de prisión o reclusión;
- e) De las suscitadas entre una provincia y los vecinos de otra.

- 8º La Corte Suprema dirimirá las cuestiones de competencia planteadas entre jueces o tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba hacerlo. Decidirá asimismo sobre el juez competente en

los casos en que su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.

Cámaras de apelación

Art. 25.- Las cámaras de apelación conservarán su actual organización y competencia, con las modificaciones que resultan de la Constitución Nacional y de esta ley.

Art. 26.- Contra las sentencias de las cámaras de apelación no habrá recurso alguno salvo los extraordinarios constitucionales en los casos que la ley establezca y el ordinario de apelación previsto en el artículo 24, inciso 7º.

Art. 27.- Los tribunales de apelación podrán dividirse en salas de tres miembros. A los fines de reglamentar sus funciones de superintendencia y orden procesal sobre la propia cámara y juzgados de primera instancia, en cuanto les sea delegada esta facultad por la Corte Suprema, y para unificar la jurisprudencia de las salas o evitar fallos contradictorios cuando no exista interpretación de la Corte Suprema sobre la materia, cada cámara se reunirá en tribunal pleno.

Art. 28.- Los acuerdos plenarios pueden ser adoptados con asistencia de la mayoría absoluta de los miembros del tribunal, siempre que éstos concordaran en la solución del caso. Si hubiere discordia se fallará con los vocales necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones. Los vocales que no hubieren expuesto su criterio en la primera convocatoria, deberán simplemente adherir a los votos emitidos por sus colegas. La opinión de la mayoría puede ser llevada por uno de los jueces que la sostenga, la de la minoría puede serlo del mismo modo.

Art. 29.- Las sentencias definitivas de las cámaras o salas de apelación, en los procesos ordinarios de conocimiento, serán por deliberación y voto fundado de todos sus miembros previo sorteo de estudio, sin que ninguno de ellos pueda simplemente adherir al voto de otro. La mayoría debe ser personalmente la misma para las cuestiones de hecho y de derecho.

En las demás causas las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal.

Art. 30.- Las diligencias procesales se cumplirán ante la sala que conozca o deba conocer definitivamente en cada juicio.

Cámara Civil de la Capital

Art. 31.- Las dos cámaras de apelaciones en lo civil de la Capital Federal constituirán un solo tribunal que se denominará Cámara Civil de la Capital.

Art. 32.- La integración de las salas o del tribunal se hará por sorteo entre los demás miembros de éste; luego, del mismo modo, con los de la Cámara Comercial y por último con los jueces de primera instancia en lo civil.

Art. 33.- La cámara elegirá por mayoría absoluta un presidente y un vicepresidente, por un año, no reelegibles sin intervalo de un período. El vicepresidente compartirá las funciones del presidente en la extensión y forma que se determine.

Art. 34.- La Cámara Civil de la Capital tendrá la competencia que correspondía a las cámaras de apelaciones en lo civil, con las modificaciones que resultan de la Constitución Nacional y de esta ley.

Art. 35. — Las autenticaciones a que se refiere la ley 44 modificada por la ley 5.133, podrán ser hechas directamente por el funcionario que la cámara designe.

Cámara Comercial de la Capital

Art. 36. — La Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital se denominará Cámara Comercial de la Capital.

Art. 37. — La integración de las salas o del tribunal se hará por sorteo entre los demás miembros de éste; luego, del mismo modo, con los de la Cámara Civil y por último con los jueces de primera instancia en lo comercial.

Art. 38. — A pedido de la mayoría de los miembros de la Cámara Civil o Comercial, podrá convocarse a tribunal pleno de ambas, a los fines de unificar la jurisprudencia o evitar fallos contradictorios cuando no exista interpretación de la Corte Suprema sobre la materia. Rige al respecto lo establecido anteriormente para los acuerdos plenarios. El tribunal será presidido por el presidente de la cámara que hubiere pedido la convocatoria.

Cámara en lo contenciosoadministrativo de la Capital Federal

Art. 39. — La actual Cámara Federal de Apelación de la Capital se denominará Cámara en lo Contenciosoadministrativo de la Capital. Se compondrá de seis jueces, que formarán salas de tres.

Art. 40. — Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal se hará por sorteo con los miembros de la Cámara Civil, y en su defecto, con los jueces de lo contenciosoadministrativo de la Capital.

Art. 41. — La cámara por mayoría absoluta elegirá un presidente y un vicepresidente, por un año, no reelegibles sin intervalo de un período.

Art. 42. — Este tribunal será de apelación de las resoluciones de los jueces en lo contenciosoadministrativo de la Capital. Conocerá, además, de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de organismos administrativos en los casos autorizados por las leyes de previsión social; de los recursos contra las resoluciones del intendente municipal de la Capital en asuntos de carácter contenciosoadministrativo, y contra las resoluciones del jefe de policía en materia de derecho de reunión.

Cámara de Paz de la Capital

Art. 43. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia de Paz Letrada de la Capital, se denominará Cámara de Paz de la Capital. Se integrará por sorteo entre los jueces de primera instancia dependientes de ella.

Cámara del Trabajo de la Capital

Art. 44. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia del Trabajo de la Capital se denominará Cámara del Trabajo de la Capital. Se compondrá de doce miembros que formarán salas de tres, y se integrará por sorteo entre los jueces de primera instancia dependientes de ella.

Cámara Penal de la Capital

Art. 45. — La actual Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital se denominará Cámara Penal de la Capital.

Art. 46. — Formará parte de este tribunal, la actual sala en lo criminal y correccional de la Cámara Federal de Apelación de la Capital, la que constituirá una sala que conocerá de los recursos contra las resoluciones de los jueces en lo penal especial.

En los casos del artículo 4º de la ley 12.327, esta sala será integrada por sorteo con otros dos miembros del mismo tribunal.

Art. 47. — Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal, se hará por sorteo con los jueces dependientes de la misma, comenzando por los de sentencia y en lo penal especial y siguiendo con los de instrucción y en lo correccional.

Art. 48. — Créase bajo la dependencia de la cámara la oficina de servicio auxiliar con los empleados que fije la ley. Dichos empleados deberán ser puestos de modo temporario a disposición de los jueces de instrucción y en lo penal especial, con el solo objeto de lograr una más pronta substanciación de las causas que por su naturaleza o complejidad no puedan atenderse eficazmente con el personal de los juzgados.

Cámaras federales de circuito

Art. 49. — La Cámara Federal de La Plata se compondrá de seis miembros divididos en dos salas de tres. Dependerán de ella los juzgados federales de dicha ciudad, San Nicolás, Mercedes, Azul y los juzgados letrados de La Pampa.

Art. 50. — Dependerán de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el juzgado federal de dicha ciudad y los juzgados letrados de Río Negro y de Neuquén.

Art. 51. — Dependerán de la Cámara Federal de Paraná los juzgados federales de Corrientes, Paraná y Concepción del Uruguay y los juzgados letrados de Misiones.

Art. 52. — Las restantes cámaras federales de Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, conservarán su actual competencia de apelación.

Cámaras de territorios nacionales

Art. 53. — Las actuales cámaras de apelaciones de territorios del Norte y del Sur se denominarán respectivamente Cámara de Territorios del Norte y Cámara de Territorios del Sur.

Art. 54. — Dependerán de la Cámara de Territorios del Norte, con asiento en Resistencia, los juzgados letrados de primera instancia del Chaco y de Formosa.

Art. 55. — Dependerán de la Cámara de Territorios del Sur, con asiento en Comodoro Rivadavia, los juzgados letrados de Chubut, Santa Cruz, zona militar de Comodoro Rivadavia y Gobernación Marítima de Tierra del Fuego.

Juzgados de primera instancia

Art. 56. — Los juzgados de primera instancia conservarán su organización y competencia actuales, con las modificaciones que resultan de la Constitución Nacional y de esta ley.

Art. 57. — Las resoluciones de los jueces de primera instancia no serán susceptibles de recursos ordinarios

para ante las Cámaras, cuando el valor disputado en causas no penales y en último término, sin sus accesorios, no exceda de mil pesos moneda nacional.

Juzgados de primera instancia en lo civil de la Capital

Art. 58. — La Corte Suprema podrá disponer la distribución por especialidades de las causas de competencia de los jueces civiles de primera instancia en la Capital, según las necesidades de la administración de justicia, y sin que esta medida pueda privar a los jueces del conocimiento de los asuntos pendientes.

Art. 59. — El turno de los juzgados será establecido por número de causas en forma rotativa. No podrán fundarse cuestiones de competencia en razones de turno.

Juzgados de primera instancia en lo comercial de la Capital

Art. 60. — Los juzgados de primera instancia en lo comercial de la Capital conocerán de los asuntos regidos por las leyes comerciales. Entenderán en todos los hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, aunque sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad, y en las causas contenciosas fundadas en las leyes 111 y 3.975.

Art. 61. — Rige para estos juzgados lo dispuesto en los artículos 58 y 59.

Juzgados de primera instancia en lo contencioso-administrativo de la Capital

Art. 62. — Los actuales juzgados federales en lo civil y comercial de la Capital y los de lo contencioso-administrativo creados por la ley 13.278, se denominarán juzgados en lo contencioso-administrativo de la Capital.

Art. 63. — Estos juzgados conocerán:

- 1º De las causas en que sea parte la Nación o sus entidades autárquicas, como personas de derecho público no atribuidas a la competencia de otros jueces;
- 2º De las causas que versen sobre impuestos o tasas de carácter general para toda la República;
- 3º De las causas regidas por leyes especiales no incorporadas ni complementarias de los códigos comunes, ni atribuidas a la competencia de otros jueces;
- 4º De los recursos contra resoluciones administrativas no penales, que las leyes atribuyen a los jueces federales.

Art. 64. — La Secretaría Electoral de la Capital y el Fichero Nacional de Enrolados estarán a cargo del juez en lo contencioso-administrativo más antiguo.

Art. 65. — Rige para estos juzgados lo dispuesto en los artículos 58 y 59.

Juzgados de paz de la Capital

Art. 66. — Con excepción de las causas mencionadas en el artículo 60, 2º apartado, los juzgados de paz de primera instancia de la Capital conocerán:

- 1º a) De los asuntos civiles y comerciales en que el valor cuestionado no exceda de cinco mil pesos moneda nacional;
- b) De los juicios sucesorios cuyo haber hereditario no exceda prima facie de veinte mil pesos moneda nacional;
- c) De los concursos civiles cuyo pasivo no sobrepase la suma de veinte mil pesos moneda nacional;
- d) De las pequeñas quiebras a las que se refiere el título XXII de la ley 11.719.

La competencia de los juzgados mencionados subsistirá en los juicios sucesorios aun cuando hubiese contestación sobre el carácter de herederos de las personas que se presenten como tales, y aun cuando el haber hereditario exceda en definitiva hasta en un 25 % de la suma fijada en el apartado b).

e) Quedan exceptuados de la competencia de los juzgados de paz los interdictos y las venias, así como también los asuntos que se refieran al derecho de familia, con excepción de la hipótesis especificada en el apartado b).

- 2º De las demandas contra los juicios universales enumerados en el inciso anterior, cualquiera sea su importancia.
- 3º De las informaciones sumarias que se refieran a los juicios de competencia del tribunal.
- 4º De las demandas por desalojo, rescisión de contratos de locación y cobro de alquileres, cualquiera sea su importancia, haya o no contrato escrito.
- 5º De las demandas reconventionales, cualquiera sea su monto.

Juzgados del trabajo de la Capital

Art. 67. — Los juzgados del trabajo de la Capital tendrán la competencia que les atribuye la ley 12.948, aunque en las causas sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad. Los jueces del trabajo serán nombrados en la forma prevista en el artículo 3º.

Juzgados de primera instancia en lo penal de la Capital

Art. 68. — Los juzgados de sentencia, instrucción y correccionales de la Capital conservarán su actual organización y competencia. Los correccionales entenderán además en segunda y última instancia en los recursos contra las resoluciones de la municipalidad o de sus jueces de faltas y de la policía, cuando la pena impuesta exceda de cinco días de arresto o cincuenta pesos de multa.

Art. 69. — Los juzgados federales en lo criminal y correccional de la Capital se denominarán juzgados en lo penal especial de la Capital y conservarán su actual competencia, con excepción de las causas que les correspondían sólo por razón de lugar.

Art. 70. — Los juzgados creados por la ley 12.333 para la Capital Federal conservarán su actual competencia y dependerán de la cámara penal de la Capital, ante la cual serán apelables sus resoluciones cuando corresponda. Terminada la vigencia de la ley 12.333 y sus complementarias, la Corte Suprema les atribuirá nuevas funciones dentro del fuero penal.

Art. 71. — Los prosecretarios, ujieres y empleados de los juzgados de sentencia, que actúan en los trámites relacionados con las leyes 12.830 y 12.833, pasarán a los respectivos juzgados de estas leyes, con igual categoría.

Juzgados federales de sección

Art. 72. — Los juzgados federales con asiento en las provincias conservarán su actual competencia y organización, con las modificaciones que resulten de la Constitución y de esta ley. Conocerán:

- 1º De las causas civiles entre la provincia en que tuvieren su asiento y algún vecino o vecinos de otra o de la Capital Federal. Cuando hubiere más de un juez de sección en la provincia, entenderán en estas causas los que tengan su asiento en la capital de la misma;
- 2º De todos los hechos, actos y contratos concernientes a la navegación y el comercio aeronáuticos;
- 3º De las causas que versen sobre negocios particulares de los cónsules extranjeros y de todas las concernientes a los vicecónsules extranjeros;
- 4º De los recursos de hábeas corpus, cuando la amenaza, restricción o privación de la libertad de una persona provenga de una autoridad nacional, o afecte a un individuo integrante o dependiente de una autoridad nacional.

Juzgados de los territorios nacionales

Art. 73. — Los juzgados letrados de los territorios nacionales conservarán su actual organización y competencia. Quedan suprimidas las consultas a que se refiere el artículo 17, inciso 4º, de la ley 4.054.

Créase un juzgado letrado en la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, con competencia territorial en la misma y zona Antártida Argentina.

Art. 74. — Los juzgados creados por la ley 12.833 se convierten en juzgados letrados, con la misma competencia que los mencionados en el artículo anterior. Los de Santa Cruz, Neuquén, Santa Rosa, Resistencia, Formosa y Misiones, tendrán su asiento en dichos lugares. El de Rawson, en la zona militar de Comodoro Rivadavia y el de Viedma, en Puerto General Roca.

Art. 75. — Los jueces de paz de los territorios e islas nacionales serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna del juez letrado de la circunscripción correspondiente.

Para ser juez de paz se requiere: ser argentino, saber leer y escribir, treinta años de edad y antecedentes honorables.

Los jueces de paz permanecerán en sus funciones mientras dure su idoneidad y buena conducta y sólo podrán ser removidos por resolución de la cámara de apelaciones de la circunscripción, previo sumario y audiencia del interesado.

El secretario y demás personal de estos juzgados será designado por el juez letrado a propuesta del de paz.

Cuerpos técnicos y peritos auxiliares de la justicia nacional de la Capital

Art. 76. — Los cuerpos técnicos y peritos auxiliares de la justicia nacional, funcionarán bajo la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 77. — Los funcionarios y empleados de los distintos organismos serán nombrados y removidos por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo que establece el decreto 33.227/44 y percibirán el sueldo que les asigne la ley de presupuesto.

Art. 78. — En la Capital Federal habrá cuerpos de médicos forenses, de contadores y de peritos calígrafos.

Art. 79. — Para ser miembro del cuerpo médico se requiere: ciudadanía argentina, veinticinco años de edad, tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria y título de médico legista expedido por universidad nacional o, en defecto de éste, acreditar antecedentes científicos de especial versación en la materia.

Art. 80. — El cuerpo médico forense estará dirigido y representado por un médico decano designado rotativa y anualmente por el cuerpo.

Art. 81. — La labor del cuerpo médico será organizada por el decano distribuyéndola entre los miembros, según convenga a la mayor eficacia y celeridad de sus funciones.

Esta organización será sometida previamente a la aprobación del tribunal de superintendencia.

Art. 82. — Son obligaciones de los médicos forenses:

- a) Practicar los exámenes y expedir los informes requeridos por las autoridades de la justicia en lo penal;
- b) Concurrir de inmediato a los lugares a donde sean llamados por las mismas autoridades, para coadyuvar en la investigación de los hechos;
- c) Comparecer a las audiencias para las que sean citados a fin de prestar las declaraciones y suministrar los informes que se les exijan o realizar cualquier otra diligencia vinculada a sus funciones;
- d) Expedir los informes que les sean requeridos por razón de superintendencia.

Art. 83. — Los médicos que actualmente desempeñan sus tareas ante los tribunales del trabajo y justicia de paz letrada, de la Capital Federal, integrarán el cuerpo médico de los tribunales, sin perjuicio de las funciones específicas que la ley o los reglamentos les acuerden.

Art. 84. — La morgue judicial es un servicio del cuerpo médico forense, supeditada a la autoridad del jefe del cuerpo. Estará a cargo de un director, con título de médico expedido por universidad nacional y contará con el personal que le asigne la ley de presupuesto.

Art. 85. — Corresponde a la morgue judicial:

- a) Proveer los medios necesarios para que los médicos forenses practiquen las autopsias y demás diligencias dispuestas por la autoridad judicial;
- b) Formar y conservar el museo de medicina legal;
- c) Exhibir al público los cadáveres que les sean entregados por cualquier autoridad judicial a los fines de la identificación;
- d) Facilitar los medios para que se practiquen las autopsias dispuestas por las autoridades no judiciales de la Capital Federal.

Art. 86. — Para fines didácticos la morgue judicial deberá:

- a) Facilitar a la cátedra de medicina legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires las piezas del museo;
- b) Admitir en el acto de las autopsias, salvo órdenes escritas impartidas en casos especiales por la autoridad judicial competente, el acceso en número no mayor de cinco profesores y estudiantes de la cátedra de medicina legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Los estudiantes deberán concurrir acompañados por un profesor de dicha cátedra y tanto uno como otros se obligarán mediante actas suscritas ante el director de la morgue a guardar secreto de los actos que ante ellos pasaren. La acción por violación de este secreto será pública.

Art. 87. — El director de la morgue judicial llevará un registro en el que se dejará constancia de las piezas del museo facilitadas a la cátedra de medicina legal y el nombre, apellido y condiciones individuales de las personas admitidas a presenciar las autopsias.

Art. 88. — El cuerpo médico forense de la Capital Federal contará con un perito químico que deberá reunir las siguientes condiciones: ciudadanía argentina, mayoría de edad, título de químico expedido por universidad nacional con tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria.

El perito químico deberá:

- a) Practicar las diligencias y expedir los informes requeridos por la justicia en lo penal;
- b) Practicar los análisis y demás experimentaciones que el cuerpo médico le requiera por intermedio del decano, para mejor ilustración de los informes;
- c) Comparecer a las audiencias para las que sea citado a fin de prestar las declaraciones y suministrar los informes que le soliciten.

Art. 89. — El Cuerpo Médico Forense tendrá bajo su dependencia los auxiliares técnicos necesarios para el mejor servicio, conforme lo establezca la ley de presupuesto y los respectivos reglamentos.

Art. 90. — Créase la oficina del Cuerpo de Contadores de los Tribunales de la Capital Federal.

Para ocupar el cargo de contador oficial de los Tribunales de la Capital Federal se requiere: ciudadanía argentina, mayoría de edad y título de doctor en ciencias económicas o de contador público expedido por universidad nacional, con tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria.

Art. 91. — El cuerpo de contadores oficiales será dirigido y representado por uno de sus miembros elegido rotativa y anualmente por el cuerpo. Estará integrado por los contadores y personal que establezca la ley de presupuesto. El contador director sin perjuicio de sus funciones específicas desempeñará iguales tareas que los demás componentes del cuerpo y ajustará su cometido a iguales obligaciones que las dispuestas en el artículo 81 para el decano del cuerpo médico.

Art. 92. — Son obligaciones de los contadores oficiales:

- a) Practicar las pericias y expedir los informes requeridos por las autoridades de la justicia en lo penal;
- b) Comparecer a las audiencias a que sean citados a prestar las declaraciones y suministrar los informes que le soliciten.

Art. 93. — Créase la oficina del Cuerpo de Peritos Calígrafos de los Tribunales de la Capital Federal.

Art. 94. — Para ocupar el cargo de perito calígrafo se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad, con título de calígrafo público expedido por universidad nacional y tres años de ejercicio en la profesión.

Art. 95. — El Cuerpo de Peritos Calígrafos oficiales será dirigido y representado por uno de sus miembros elegido rotativa y anualmente por el cuerpo. Estará integrado por los peritos calígrafos y por el personal que establezca la ley respectiva. El calígrafo director, sin perjuicio de sus funciones específicas, desempeñará iguales tareas que los demás componentes del cuerpo y ajustará su cometido a las normas y obligaciones que establece el artículo 81 para el decano del cuerpo médico.

Art. 96. — Son obligaciones de los peritos calígrafos oficiales:

- a) Practicar las pericias y expedir los informes requeridos por la justicia en lo penal;
- b) Concurrir de inmediato a los lugares adonde a prestar declaraciones y suministrar los informes que le soliciten.

Art. 97. — Para ocupar el cargo de perito ingeniero se requiere: ciudadanía argentina, mayoría de edad, título de ingeniero civil o industrial expedido por universidad nacional y tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria.

Art. 98. — Son obligaciones del perito ingeniero oficial:

- a) Practicar las pericias y expedir los informes requeridos por la justicia en lo penal;
- b) Concurrir de inmediato a los lugares a donde sea llamado por las mismas autoridades para coadyuvar en la investigación de los hechos;
- c) Comparecer a las audiencias a que sea citado a prestar declaraciones o suministrar los informes que se les soliciten.

Art. 99. — Para ocupar el cargo de traductor e intérprete oficial de los tribunales de la Capital Federal se requiere: mayoría de edad y título de traductor público nacional.

Art. 100. — Es obligación de los peritos intérpretes y traductores cumplir las diligencias que les encomienden las autoridades de la justicia en lo penal y concurrir a las audiencias cuando sus servicios fueren necesarios.

Art. 101. — Para ocupar el cargo de tasador oficial de los tribunales de la Capital Federal se requiere ciudadanía argentina y mayoría de edad.

Art. 102. — Es obligación del perito tasador evacuar las pericias que le sean solicitadas por las autoridades de la justicia en lo penal. El tasador deberá fundar la razón de sus apreciaciones y concurrir a las audiencias a que sea citado para declarar o ampliar sus informes. Deberá concurrir, asimismo, diariamente, a la oficina que designe el tribunal de superinten-

dencia, a los efectos de notificarse de las resoluciones judiciales pertinentes.

Disposiciones comunes a los cuerpos técnicos y demás auxiliares de la justicia

Art. 103. — Sin perjuicio de la distribución de tareas efectuadas por los jefes de los cuerpos técnicos, la autoridad judicial podrá disponer cuando sea necesario de los servicios de otros integrantes del cuerpo que corresponda.

Art. 104. — Los peritos prestarán juramento de desempeñar fielmente su cargo ante el tribunal que designe la Corte Suprema; este juramento los exime de hacerlo nuevamente en las causas en que sean designados.

Art. 105. — Los peritos oficiales no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramientos de oficio en los distintos fueros de la Capital Federal. No podrán tampoco ser designados peritos a propuesta de parte en ningún fuero.

Art. 106. — Además de las designaciones de oficio efectuadas por los jueces en lo penal y con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 83, los servicios de los peritos oficiales podrán ser requeridos excepcionalmente por los jueces de los restantes fueros de la Capital cuando mediaren notorias razones de urgencia, pobreza o de interés público.

Art. 107. — Todos los peritos para cuyo nombramiento se requiera título profesional tendrán la misma jerarquía y gozarán, como mínimo de igual sueldo que los secretarios de primera instancia de la Capital.

Art. 108. — Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9º y 10 de la ley 11.833, los peritos de liberados serán considerados auxiliares de la Justicia en lo Penal en cuanto al cumplimiento de las obligaciones emergentes del artículo 13, inciso 5º del Código Penal.

Deberán remitir anualmente a la Corte Suprema o al Tribunal de Superintendencia que ésta designe una memoria detallada de su gestión.

Oficina de mandamientos y notificaciones para la justicia de la Capital Federal

Art. 109. — La actual oficina organizada por decreto del Poder Ejecutivo 25.559, de 1948, tendrá a su cargo la diligencia de los mandamientos y notificaciones que expidan las Cámaras en lo Civil, Comercial, Contencioso-administrativo, de Paz y los juzgados de primera instancia dependientes de las mismas.

La Corte Suprema podrá encomendar a esa oficina iguales diligencias del Tribunal.

Art. 110. — Quedan incorporados a esa oficina los oficiales de justicia de los actuales Juzgados Federales en lo Civil y Comercial.

Art. 111. — La Corte Suprema ejerce superintendencia sobre la oficina de Mandamientos y Notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento.

Archivo de los Tribunales

Art. 112. — El Archivo General de los Tribunales de la Capital dependerá del Ministerio de Justicia; estará a cargo de un director y un subdirector y contará además con los funcionarios y empleados que la ley determine.

El director y el subdirector deberán ser argentinos, abogados o escribanos con tres años de ejercicio

profesional o de funciones judiciales o administrativas afines.

El subdirector substituirá al titular, con todas sus facultades y obligaciones en caso de ausencia, impedimento o licencia de éste.

Art. 113. — El archivo se formará:

- 1º Con los protocolos de todas las escribanías de registro y de marina, excepto los correspondientes a los últimos cuatro años que quedarán en poder de los escribanos.
- 2º Con los protocolos de escrituras mencionadas en el artículo 9º de la acordada de la Corte Suprema del 12 de octubre de 1863.
- 3º Con los expedientes terminados o paralizados que remitan los juzgados o tribunales nacionales de la Capital.
- 4º Con los segundos ejemplares de los tomos de actas del Registro Civil de la Capital.
- 5º Con dos ejemplares diarios del Boletín Oficial.

Art. 114. — Los protocolos, expedientes y tomos del Registro Civil serán recibidos por el director, previo examen de su estado, haciendo constar el número de sus páginas y las circunstancias especiales que notare; si encontrare alguna irregularidad o infracción a las leyes fiscales, deberá devolverlos, dando cuenta de ello a la autoridad competente. Igual procedimiento observará con respecto a las planillas extractos mencionados en la ley 12.997.

Art. 115. — El archivo será organizado en oficinas, colocándose por separado los documentos que se mencionan en el artículo 113. Se formarán índices especiales de cada oficina, sin perjuicio del fichaje obligatorio de toda la documentación existente.

En los índices de expedientes se determinará el número o letra del juzgado y de la secretaría, así como los nombres del juez, secretario, de las partes y el objeto del juicio.

Art. 116. — El director expedirá por orden judicial certificados y testimonios de las escrituras, expedientes y otros documentos del archivo, observando las formalidades prescritas por las leyes de la materia. Expedirá asimismo testimonios o certificados que se le soliciten directamente cuando se tratare de documentos que no contengan obligaciones de dar o hacer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1006 y 1007 del Código Civil y sin necesidad de la citación previa o de la comparecencia del oficial público que establece el artículo 1008 del mismo código.

Art. 117. — El archivo no percibirá derecho alguno por los testimonios o certificados que expida, debiendo los interesados suministrar los sellos necesarios para su expedición, cuyo valor fijará la ley respectiva.

Art. 118. — Las partes y profesionales podrán interiorizarse de las escrituras y documentos existentes en el archivo de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 119. — Los documentos que se mencionan en el artículo 113, incisos 1º, 2º, 4º y 5º, no podrán ser retirados del archivo sino por caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 120. — Los expedientes podrán retirarse del archivo en las circunstancias previstas en el artículo anterior o en virtud de orden escrita de juez competente, por el término de sesenta días, vencidos los cuales el director reclamará la devolución, que no podrá ser demorada más de diez días, salvo causa

justificada, que se le hará saber. Si en ese plazo no fuere devuelto el expediente ni se dieren explicaciones satisfactorias, el director dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia, para que aplique la sanción correspondiente a quien ocasionó el retardo.

Art. 121. — Incorpórase al Archivo General de los Tribunales la sección selección y destrucción de expedientes, la que actuará de acuerdo con la ley 12.997, requiriéndose título de abogado o escribano para el funcionario que esté al frente de la misma.

Disposiciones especiales y transitorias

Art. 122. — En lo no modificado por la presente ley, los tribunales nacionales continuarán rigiéndose por sus leyes de procedimiento y de organización vigentes.

Art. 123. — El Registro Público de Comercio dependerá del Poder Ejecutivo. Una ley especial establecerá su nueva organización y funciones.

Art. 124. — Las causas en trámite proseguirán hasta su terminación en los tribunales donde estén radicadas en el momento de entrar en vigencia esta ley.

Art. 125. — Las disposiciones de la presente ley, referentes a los requisitos para la designación de funcionarios y empleados judiciales, no se aplicarán a los que actualmente desempeñan los respectivos cargos. En la distribución de funciones que exija la nueva organización de la justicia de la Capital, se mantendrá el personal actual con su jerarquía y sueldo.

Art. 126. — A los efectos pertinentes de lo dispuesto en los artículos 4º, 5º y 6º, se considerará la antigüedad en la función judicial como equivalente al ejercicio de la profesión de abogado. No requerirán nuevo nombramiento los magistrados cuya denominación o competencia actual cambie en virtud de esta ley.

Art. 127. — El Boletín Judicial y el personal afectado al mismo dependerán del Poder Ejecutivo.

Art. 128. — Esta ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial.

La Corte Suprema adoptará las providencias necesarias para que a esa fecha puedan funcionar los tribunales nacionales con su nueva organización.

Art. 129. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 130. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Helisario Gache Pirán.

Sr. Presidente (Trebino). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — Señor presidente: el proyecto de ley que consideramos es de extraordinaria significación jurídica en la vida de la Nación. Organiza uno de los tres poderes, y quizá el que cumple la tarea más delicada: dar a cada uno lo suyo y darlo en el conflicto entre los individuos y aun en el conflicto entre el individuo y el Estado. Es el poder regulador de la armonía social y el custodio permanente de la vida constitucional, aun por encima y todavía contra la voluntad de cualquiera de los otros dos poderes o de los dos poderes.

Por eso el Poder Ejecutivo de la Nación, celoso de cumplir con prontitud los designios constitucionales, se apresuró a enviar el proyecto

origen del despacho de la comisión que presido, aun cuando no dejaba de advertir que las modificaciones estructurales definitivas no podrán adelantarse a la existencia efectiva de los nuevos códigos de Procedimientos en lo Criminal y en lo Civil y Comercial, —que han sido sometidos ya a este Congreso—, y a los demás instrumentos legales necesarios para perfeccionar la justicia.

Pero el Poder Ejecutivo de la Nación considera que en la circunstancia presente nada impide y, al contrario, la conveniencia lo aconseja, cumplir de inmediato o sin demora, cuando menos, las reformas constitucionales generales del nuevo ordenamiento y competencia judicial. Así lo ha entendido también la comisión.

Durante largos lustros hemos vivido en la Capital Federal bajo un régimen judicial dislocado. No obstante ser la Capital Federal emidente y exclusivamente un lugar donde la Nación ejerce ella sola jurisdicción, dos órdenes de justicia coexistían: la justicia local o la justicia de la ley, y la justicia federal o de la Constitución, para usar de las designaciones más gratas a quienes sostuvieron el distingo.

El ordenamiento legal que consagró las dos justicias, la de la Constitución y la de la ley, emana sin embargo del mismo poder, para el mismo ámbito territorial. Nació en el año 1881, al dictarse la ley orgánica de los tribunales nacionales. Y nació bajo la invocación de una opinión sobre el tema, atribuida a Story. Este fué el error inicial que no se salvó posteriormente.

Decía, en efecto, Story en los *Comentarios a la Constitución de los Estados Unidos* —libro conocido aquí por la traducción de Calvo y Cantillo, después de sancionada nuestra Constitución— y refiriéndose a los Tribunales Territoriales (párrafo 1325): «Si el poder de crear tribunales es dado a las legislaturas territoriales, esos tribunales deben ser considerados estrictamente territoriales y no es justo tenerlos por tribunales constitucionales, en los cuales el poder judicial conferido por la Constitución pueda ser depositado. Ellos son incapaces de recibirlos. Son tribunales legislativos creados en virtud del derecho general de soberanía que existe en el gobierno, o en virtud de la cláusula aquella de la Constitución que faculta al Congreso para hacer todas las leyes y reglamentos necesarios respecto de los territorios de los Estados Unidos.»

Y más adelante (párrafo 1326) insiste sobre lo mismo: «Los jueces de los tribunales inferiores de que habla la Constitución —dice— no comprenden a los jueces de los tribunales establecidos en los territorios de los Estados Unidos. Los tribunales de los territorios no son tribunales constitucionales, en los cuales pueda depositarse el poder judicial conferido por la Constitución al gobierno general. Son tribunales

les legislativos, creados en virtud de la soberanía general que existe en el gobierno nacional sobre sus territorios.»

Esta opinión de Story constituye, como he dicho, el argumento fundamental de todos los que en nuestro país sostuvieron la tesis de que en la Capital Federal coexistían dos jurisdicciones: la de los tribunales locales, de origen legislativo y la de los tribunales federales, de origen constitucional. Es decir: éstos haciendo parte de los tribunales inferiores de la Nación, de conformidad al mandato del artículo 94 de la Constitución del 53, y aquéllos, emanación del poder de legislar para toda la Nación, acordado al Congreso por la misma Constitución.

La cita de Story, que se esgrimió por primera vez en su informe por la Comisión Extraparlamentaria compuesta por los doctores Victorino de la Plaza y José María Rosa, que por encargo del Poder Ejecutivo nacional redactaron el proyecto de ley orgánica que sancionó el Congreso en 1881, fué equivocada y desde entonces, sin nuevo examen y sin advertirse el error, se repitió, como argumento decisivo, como *slogan*. Y es así cómo, por un grueso error, se mantuvo un criterio equivocado en la materia.

Las palabras de Story, no eran originales. Eran mera transcripción, sin el agregado de las comillas de rigor cuando se hace transcripción, de la opinión expuesta por el presidente de la Corte de los Estados Unidos, juez Marshall, en el caso «American Insurance Co.».

Pero ni uno ni otro, se refirieron para nada, a la situación de la justicia del Distrito de Columbia, que es el distrito federal en los Estados Unidos, o sea del distrito que es a los Estados Unidos lo que la Capital Federal a nuestra República.

En efecto: Marshall, al dar su opinión en el caso judicial invocado, estudió la naturaleza y poderes de los tribunales del territorio de Florida, establecidos por ley de la legislatura local según autorización de la ley del Congreso que organizó el gobierno de dicho territorio.

Y es, refiriéndose a dichos jueces, del territorio de Florida, establecidos por su legislatura local, que dijo Marshall en el fallo citado: «Estos tribunales no son, pues, tribunales constitucionales, en los cuales se pueda depositar el poder judicial conferido por la Constitución al gobierno central. Son incapaces de recibir dicho poder. Son tribunales legislativos, creados en virtud del derecho general de soberanía que existe en el gobierno, o en virtud de aquella cláusula que faculta al Congreso a dictar todas las leyes y reglamentos necesarios, respecto de los territorios pertenecientes a los Estados Unidos.»

Story, según se advierte fácilmente de la simple lectura, no hizo sino repetir este juicio.

El distrito de Columbia, distrito federal, semejante a nuestra Capital Federal, nada tiene

que ver con los «territorios federales» de los Estados Unidos, que ni siquiera tienen una situación jurídica igual a la de nuestros territorios. Nuestros territorios, en efecto, siempre han hecho parte integrante de la Nación. Son la Nación misma. En cambio, aquéllos pertenecían a los Estados Unidos, pero no eran ninguno de los Estados que los constituyeron. Hasta se llegó a sostener que cuando un nuevo territorio federal venía a quedar bajo la soberanía de la Unión, la Constitución no regía en él automáticamente, sino que para ello era necesario una ley del Congreso y que, mientras tanto, el presidente de Estados Unidos podía gobernarlos discrecionalmente. Es que Estados Unidos de Norte América se constituyó por la unión de los Estados, y la Constitución se dió —como con acierto en esta materia lo sostienen los señores Gómez Forgues y Susini en el Trabajo de Seminario publicado en el Boletín Mensual del Seminario de Ciencias Jurídicas y Especiales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires— «por el pueblo de los Estados Unidos de América», para los Estados Unidos de América, sin que los «territorios» tuvieran intervención alguna en el proceso de su sanción.

Nuestros territorios, en cambio, han hecho parte de la Nación desde que declaramos nuestra Independencia, y jamás se ha puesto en duda que alcanzan a ellos las garantías constitucionales. Nuestra Constitución se dió para todos los habitantes de la Nación.

La justicia del Estado de Columbia estuvo y está organizada, en cambio, en distinta forma que la de los territorios de Estados Unidos. Sus cortes fueron siempre iguales a las demás cortes de circuito de Estados Unidos —equivalentes de nuestras cámaras federales y jueces de sección—, pero su competencia alcanzaba a cualquier clase de asunto, es decir, aplicaban las leyes comunes y las federales; su competencia comprendía lo que nosotros llamamos ordinaria y especial o federal, como lo organizó nuestra ley 182 del Congreso de Paraná. Y así continúa siendo, no obstante las modificaciones sufridas en su organización, no en su contenido o facultades.

Mal pudo, por consiguiente, invocarse en nuestro país la situación del distrito de Columbia para apoyar la existencia de dos jurisdicciones distintas en la Capital Federal, invocándose para ello palabras de Story, que no se referían al distrito de Columbia.

Pero, además, nuestra ley de 1881, reformada en 1886 —hoy ley 1893—, la primera que estableció las dos jurisdicciones en la Capital Federal, no se dictó bajo la exclusiva inspiración de un criterio jurídico. Se proyectó, como un remedio político, impuesto por las circunstancias y se sancionó retorciéndose los argumentos para hallar a aquella doble jurisdicción una fundamentación aparente.

Durante largos años Buenos Aires fué sede común de las autoridades nacionales y provinciales y funcionaron en ella dos órdenes de jueces: los federales, por una parte, y, por otra, los provinciales. Federalizada la Capital, cesó como asiento de las autoridades provinciales, pero no siendo posible interrumpir los trámites judiciales, ni dejar sin jueces los juicios en los que hasta entonces había intervenido la justicia provincial, la ley de federalización —número 1.029, 20 de septiembre de 1880— dispuso que hasta tanto se organizara la administración de justicia, continuarían funcionando en la Capital los tribunales provinciales, con la competencia que les estaba reconocida hasta entonces.

Situación difícil: los jueces provinciales continuaban ejerciendo su ministerio jurisdiccional en un territorio sobre el que no tenía jurisdicción el gobierno a que pertenecían. Fué sin duda un temperamento de emergencia, adoptado para evitar dificultades más graves, que importaba dar a los porteños la sensación de que aun continuaban protegidos por sus jueces. Pero era una situación transitoria llamada a desaparecer cuando se dictara una ley de organización judicial, que sin embargo debía contemplar tales sentimientos y dichas circunstancias.

Estudiando con exactitud el problema, los señores Gómez Forgues y Susini, en el trabajo de seminario ya citado, dicen:

«Así fué que el Poder Ejecutivo al propiciar la organización de la justicia metropolitana lo hizo con una alta finalidad política, teniendo en cuenta aquella circunstancia y tendiendo por eso mismo al afianzamiento de una medida: la federalización de Buenos Aires, que tantas desinteligencias y conflictos había suscitado.

«Bien podían decir, pues, los miembros de la comisión nombrada por el Ejecutivo, en la comunicación con que acompañaban su proyecto al excusarse de no haber confeccionado los códigos procesales: «Nosotros nos hemos contraído, pues, principalmente a formular el proyecto de organización, porque comprendemos, y vuestra excelencia se dignó manifestárnoslo, que era el trabajo que consideraba de más urgencia para terminar los arreglos y consolidación de las autoridades de la Capital, haciendo cesar la subsistencia anormal de los tribunales actuales.»

Razones políticas urgían, por consiguiente, la sanción de una ley que, al borrar los últimos vestigios de la jurisdicción provincial, introdujera de lleno a Buenos Aires en el ámbito de la vida institucional de la Nación a cuyo exclusivo imperio quedaba en adelante sometida. Pero, ello no obstante, era también preciso tener en cuenta el sentimiento localista porteño, no extinguido por cierto, dándole satisfacción en la medida compatible con las circunstancias.

«Por una parte había que dar cima a la obra de unificación nacional, cuyo coronamiento era la capitalización de Buenos Aires, y por otra, el gobierno nacional no quería aparecer como desconociendo la indiscutible personalidad de la primera ciudad de la República.

«De ahí que la ley en cuestión se nos presenta con el carácter de una solución transaccional entre esos dos principios señalados; como un compromiso entre la necesidad de dar a la Nación su capital definitiva, y la conveniencia de suavizar en lo posible una llaga que sangraba todavía.

«Las leyes no cambian de un solo golpe las tradiciones —expresaba muy bien el doctor González Iramain—, por más que ellas se dicten para responder a premios exigencias del momento; y si la de 1880, que convirtió en capital de la Nación a la provincia de Buenos Aires, resolvió un urgente problema constitutivo, no podía extirpar aquellos sentimientos que estaban arraigados bien hondo y que sólo habían de desvanecerse con el transcurso de los años, que dió miras más amplias a nuestros hombres de gobierno y con el crecimiento del país, que hizo imposibles las tentativas separatistas. Convencidos de esta verdad que enuncio, el Poder Ejecutivo nacional y los miembros del Congreso de aquella época, dictan la ley del 81, organizando los tribunales de la Capital, ajustándose a un sistema ecléctico, pues creaban la justicia federal, a la vez que conservaban la ordinaria o común de la provincia, existente desde mucho tiempo atrás, en condescendencia necesaria hacia el estado de las cosas en aquel entonces.

«El mismo propósito conciliatorio de los intereses generales con las exigencias localistas, se trasluce en las palabras del diputado Marengo, miembro informante de la Comisión de Legislación, quien decía en la sesión del 7 de noviembre de 1881: «En la actual Capital de la República existen tribunales satisfactoriamente organizados para garantizar la vida, la libertad, la propiedad y el honor de los ciudadanos. De lo que aquí se trata es de hacer que los tribunales que desempeñen esta misión, reconozcan en adelante el origen que les corresponde, dada la modificación política que se ha operado en el municipio; es decir, que los tribunales que ejercen jurisdicción en el territorio de la Capital, sean tribunales creados por el Congreso y que ejerzan la jurisdicción en virtud de leyes de la Nación.»

«El ministro de Justicia e Instrucción Pública, presente en esa sesión, al encarecer la necesidad de sancionar esa ley, hacía notar que se trataba de conservar lo existente, dándole el carácter nacional que hasta entonces no revestía, satisfaciendo así la necesidad del momento, que era pasar del orden judicial provincial, al orden judicial nacional.

«En la mente de los autores de la ley —y esto lo confesaba explícitamente el diputado Marengo— los «tribunales ordinarios» que se creaban para la Capital eran los sucedáneos de los tribunales provinciales, con la diferencia de que en adelante los jueces reconocerían un origen nacional. Aquello servía para complacer el amor propio de los porteños; esto para consolidar la nueva situación.

«La solución adoptada lo fué, pues, en atención a las circunstancias imperantes.»

En posteriores debates legislativos y académicos, este concepto de oportunidad fué cubierto con argumentos jurídicos errados, bajo la invocación de las palabras de Story a que antes me he referido, y nuestra antigua Corte Suprema, con igual fundamento erróneo, afirmó en el conocido caso «Acevedo»: «La jurisdicción de los jueces federales difiere substancialmente de la de los jueces del territorio de la Capital, no obstante ser unos y otros nacionales y proceder su nombramiento del gobierno de la Nación... Los primeros son, propiamente, los jueces de la Constitución, creados por el artículo 94 de la misma; los segundos son los jueces de la ley, establecidos por el Congreso en virtud de la facultad que le acuerda el artículo 67, inciso 27, para ejercer una legislación exclusiva en la Capital y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que quedan fuera de los límites que se asignen a las provincias. En esta forma y con estas distinciones han sido creadas y funcionan la justicia territorial y la federal de esta Capital, según la ley de diciembre 15 de 1881.» Y para dar mayor autoridad a sus palabras, cita luego la opinión de Story y reproduce el conocido párrafo 1.636 de su libro.

Esta solución fué siempre criticada. Y con acierto. Tomás Jofré, nuestro talentoso y sagaz procesalista; Rodolfo Rivarola, González Iramain en su tesis doctoral, González Calderón y muchos más sostuvieron siempre con ahinco, que la tesis consagrada por la ley del 81 y posteriores y el fallo recordado de la Corte, era equivocado y que en nuestra Capital no había más que una justicia: la nacional, con un solo origen: la Constitución.

Existe al respecto un testimonio irrecusable, de quienes no pueden ser sospechados de parcialidad. Me refiero a los de los mismos autores de la Constitución del 53.

En efecto, buena parte de ellos intervinieron en la sanción de la ley 182 dictada por el Congreso de Paraná. Es nuestra primera ley orgánica de tribunales. Intervinieron en su sanción, entre otros, el doctor Juan del Campillo, ministro de Justicia de Urquiza, autor del proyecto, y los señores Zapata y Leyva, miembros de la comisión del Senado que lo despachó.

La iniciativa comenzó a tratarse en el Senado en la sesión del 18 de agosto de 1857 y fué definitivamente sancionado en la sesión de la Cámara de Diputados del 28 de julio del año siguiente.

Debo recordar que la provincia de Entre Ríos, asiento en aquel entonces de las autoridades de la Nación, fué declarada territorio federalizado y que, al dictarse la ley 182, existía, organizada y en funcionamiento —en ella, por supuesto—, la justicia provincial. Por eso el Poder Ejecutivo estableció en el artículo 29 del proyecto: «Los jueces del territorio federalizado ejercerán la jurisdicción federal y la ordinaria de provincia en todos los casos en que no esté atribuida originariamente a los tribunales superiores.»

La Comisión de Legislación y Negocios Constitucionales del Senado repitió este artículo en su despacho como artículo 34, cambiando tan sólo las palabras «superiores» por «federales» y quedando, por último, redactado el artículo que en la enumeración final lleva el número 33 en la siguiente forma: «Los jueces del territorio federalizado ejercerán además de la jurisdicción federal en todos los casos que no esté atribuida originariamente a las cortes de distrito, la ordinaria de provincia.»

Al tratarse en la Cámara de Diputados, el señor Funes, miembro informante de la Comisión de Justicia, Culto e Instrucción Pública, dijo reiterando el sentido de la disposición: «La misma persona que está investida con el carácter de juez federal, hace también de juez local porque se le conceden las dos atribuciones» (sesión del 24 de junio de 1858).

Quedó así perfectamente establecido, por los mismos hombres que años antes sancionaron la Constitución Nacional que, en el distrito federal, sólo existía una jurisdicción cuyos magistrados podían conocer de las causas ordinarias y de las especiales atribuidas por la propia ley 182 a los jueces federales.

Pero la existencia de una jurisdicción no es obstáculo para que la labor de los jueces que la integran se divida. Una cosa es unidad jurisdiccional, y otra cosa es unificar, poniendo en manos de un solo juez el conocimiento de todos los litigios posibles. En aquellos primeros tiempos, de vida sencilla y de poca labor judicial, era posible aceptar que un juez conociera de cualquier causa. La vida actual —difícil, complicada, diversificada— exige en todos los órdenes la especialización, como razón de eficiencia, y no escapan a esta norma los jueces.

Ya de mucho atrás se ha admitido la división de su trabajo por especialidades, sin que esta división por especialidades importe reconocer orígenes distintos a su jurisdicción.

Es curioso que quienes advertían el carácter nacional de los llamados jueces ordinarios persistieran en su empeño de establecer dos categorías de tribunales. Ya que reconocían a todos

los jueces como magistrados de la Nación, lo lógico hubiera sido no establecer otras divisiones que las que se originaran por razón de la competencia asignada a cada uno, según lo requirieran las circunstancias. Púdose muy bien establecer que determinados jueces conocieran de causas regidas por los códigos comunes, y otros de causas regidas por las llamadas «leyes especiales»; por ejemplo: enrolamiento y servicio militar, aduanas, moneda, etcétera. Esto nada tiene de contradictorio con la afirmación de que todos los jueces metropolitanos son nacionales.

Se comprende fácilmente, por ser lógico y útil en razón de la especialización y mejor división del trabajo, que el juez en lo civil conozca de las cuestiones regidas por la ley civil; el juez del crimen, de las regidas por la ley penal, y así sucesivamente los demás tribunales existentes o que puedan crearse en adelante, como sería el caso, por ejemplo, si se establecieran tribunales del trabajo.

Nuestro movimiento revolucionario ha perseguido, como uno de sus fines, restablecer la verdad constitucional, refirmando el sentido de la unidad nacional. Y para que no pueda continuarse con argumentos mentidos, contrariándose aquel principio de unidad, la Constitución de Perón ha colocado, por fin, las cosas en su lugar, declarando en el artículo 94, in fine: «En la Capital de la República todos los tribunales tienen el mismo carácter nacional.»

Yo recuerdo en este instante las inspiradas palabras del constituyente doctor Alvarez Rodríguez, de prematura y dolorosa desaparición, al defender en lo pertinente la nueva Constitución Nacional: «Sabido es —decía el constituyente Alvarez Rodríguez— que la ley de federalización de 1880 fué sancionada en circunstancias históricas excepcionales, y que para el logro de su alta finalidad política debió nutrirse en un fondo de temperancia.» Y más adelante decía: «La reforma que se proyecta atribuye carácter nacional a toda la justicia de la Capital, es decir, que serán los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que se refiere el texto de nuestra Constitución.»

Y agregaba: «Casi todas las respuestas llegadas a la comisión por eminentes juristas fueron categóricas en el sentido de la unificación de fueros en la Capital.

«Tal es el estado del problema que se propone resolver la reforma proyectada. La coexistencia de dos órdenes de tribunales, federales y locales, sólo se explica en las provincias que tienen atribuciones de darse sus propias instituciones locales y organizar su administración de justicia; pero carece de fundamento establecerla en la Capital de la República, sometida a la legislación exclusiva del Congreso de la Nación y a la jefatura inmediata y local

del Poder Ejecutivo, y cuyos jueces no pueden dejar de ser nacionales.

«La razón del doble fuero debe encontrarse en la necesidad de substraer al conocimiento de los tribunales de provincia las causas que afectan al interés superior de la Nación.

«Refiriéndose al punto, expresaba Alberdi en su obra *Derecho Público Provincial Argentino*: «La aplicación de leyes que representan el interés de una nación no podrá encomendarse sin graves peligros de injusticia y parcialidad a tribunales y juzgados de provincias, sin responsabilidad ante el gobierno nacional que no los ha nombrado ni puede remover, y sin responsabilidad ante la República, cuya soberanía judicial no ejerce.»

«En conclusión, la reforma que se proyecta atribuye carácter nacional a toda la justicia de la Capital, es decir, que serán los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que se refiere el texto de nuestra Constitución.»

Su potestad tiene un solo origen: la Constitución Nacional, y todos ellos tienen el mismo carácter de jueces nacionales. Tienen todos, indistintamente, en potencia, el poder de juzgar toda cuestión que se suscite en el ámbito de la Capital Federal y sin hacer distingos entre lugar y lugar dentro del mismo distrito federal y sin que tenga significación que las partes sean de distinta nacionalidad o domicilio. Lo que no impide, como con acierto se ha postulado por los continuos sostenedores de la tesis de la unidad jurisdiccional en el territorio de la Capital, que la labor de los jueces nacionales de la Capital se divida por especialidades, atribuyéndoles competencia, según la materia.

Es el criterio que ha seguido la comisión en el despacho sometido a consideración de esta Cámara.

Ahora podemos organizar nuestra justicia, cumpliendo el pensamiento de los Constituyentes del 53 y el claro mandato del artículo 94 de la actual; es decir, organizar la justicia nacional.

Mientras no se sancionen los códigos sometidos al conocimiento del Congreso —Código de Procedimientos Criminales y Código de Procedimientos Civiles— que consagran la oralidad, no será posible dar forma definitiva a los tribunales —ya que la oralidad exige en gran parte el tribunal colegiado de instancia única—, pero sí es posible hacer de ella un todo orgánico, bajo iguales principios y con iguales directivas. A ello tiende este despacho.

Al mismo tiempo que se cumplen estos propósitos, se ha querido llenar vacíos evidentes:

- a) Normas de organización y funcionamiento, uniformes para toda la justicia nacional del país, substituyendo las disposiciones discordes, cuando no contra-

dictorias, desparramadas en una organización desarticulada: jueces locales y federales de la Capital Federal, jueces federales en provincia, jueces letrados en territorios. En fin, un mosaico legal;

- b) Estatuto del magistrado. Consagrar una solución de justicia: si hay una sola justicia nacional, establecer una sola carrera judicial. Todos los jueces nacionales de la República tienen igual jerarquía, sólo se dividen por grado o instancia, y en su consecuencia, todos los jueces nacionales de la República, de igual grado o instancia, deben tener una misma retribución;
- c) Estatuto y escalafón para todos los empleados judiciales, librados hasta ahora a la buena o mala disposición de cada tribunal. Si bien varios de éstos han establecido, con el más plausible sentido, normas severas sobre ascensos, ello ha dependido de la bondad de las personas que integran el órgano jurisdiccional y no de un derecho adquirido por el empleado;
- d) Redistribución de las tareas de la justicia en la Capital Federal, según principios corrientes de especialidad y conformes al sentido de unidad jurisdiccional a que me he referido ya;
- e) Legislación sobre organismos auxiliares técnicos, que por su significación en la vida judicial requerían un régimen jurídico;
- f) Atribución clara al Poder Ejecutivo del gobierno de organismos en los cuales, si bien se refleja o en los que se toma conocimiento de actos judiciales, cumplen funciones eminentemente administrativas, como ser: Registro Público de Comercio, Archivo y Boletín.

Estas son las finalidades del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación cumpliendo su propósito de adecuar la vida jurídica de la Nación a los mandatos de la Constitución justicialista.

La comisión ha introducido en él modificaciones que, a su juicio, lo perfeccionan, para lo cual ha escuchado las opiniones de nuestros más altos tribunales de la Nación, las sugerencias que le han llegado de los sectores directamente vinculados a esta iniciativa y las enseñanzas de la erudita exposición con que fué presentado ante el Senado de la Nación el proyecto del ex senador doctor Julio Herrera.

He de examinar brevemente cómo se cumplen aquellas finalidades en el despacho de la comisión.

En el artículo 19, desarrollando el mandato del artículo 89 de la Constitución Nacional, se

señala cómo está compuesto el Poder Judicial: la Suprema Corte, los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales de las provincias y territorios.

Debo advertir que para refirmar el concepto de que toda la magistratura sobre la que se legisla es uniformemente «nacional», por oposición a las magistraturas provinciales —las dos únicas que conoce nuestra Constitución—, se ha designado también uniformemente a todos los jueces «nacionales», reemplazando la heterogeneidad de designaciones que se usaban hasta ahora: jueces comunes, federales, letrados, cámara del Norte, cámara del Sur, etcétera.

Todas son cámaras o jueces nacionales, calificándolos por la materia de que conocen y por el lugar de su asiento. Un común denominador —la palabra «nacionales»— refirma, como digo, aquel criterio de unidad de toda la magistratura instituida por el artículo 89 y siguientes de la Constitución Nacional.

A continuación se señalan con brevedad los elementos que fijan el estatuto de los magistrados: designación, condiciones que deben reunir, obligaciones, deberes, remoción. Se repiten disposiciones constitucionales violándose quizá algunas condiciones de técnica legislativa con el deseo de reiterar en la ley las disposiciones que se refieren al estatuto del magistrado. Para ser juez —término que usa normalmente la ley como expresión genérica, tanto para los integrantes de los tribunales colegiados como para los unipersonales—, se requiere, sin distinción de instancia, ser argentino nativo. Se acepta así un criterio que se va acentuando: el de exigir, para desempeñar funciones que comprometen los altos intereses de la Nación, la condición de ser argentino de origen.

Para ser juez de la Corte se requieren treinta años de edad y diez de ejercicio en la profesión; para ser juez de cámara, treinta años de edad y seis de ejercicio en la profesión, y para ser juez de primera instancia, veinticinco años de edad y cuatro en el ejercicio de la profesión. Por una disposición posterior se equipara el desempeño de una función judicial al ejercicio profesional.

En el artículo 29, en materia retributiva, luego de repetir el mandato constitucional de que la compensación que se les fije no podrá serles disminuída, se consagra una normal de absoluta justicia, que desde tiempo atrás se reclama imperiosamente por toda la justicia del interior: la equiparación de los sueldos de todos los magistrados del mismo grado, cualquiera sea el lugar donde ejercen sus funciones.

Hace algún tiempo este Parlamento equiparó la retribución de todos los jueces de la Capital Federal, cualquiera fuera la materia de su competencia. Pero era preciso allanar la diferencia que condenaba a los jueces del interior a una

menor retribución. Lo hemos proyectado ahora. Es una norma justicialista que, por otra forma, refirma aun más la unidad de la justicia nacional. Realizan la misma función y con frecuencia con el sacrificio de hallarse obligados a vivir sin el confort de las grandes ciudades, sin los halagos de la vida cultural de la Capital Federal, sometidos a los rigores del clima y a los inconvenientes para lograr educación adecuada para sus hijos. Si el menor costo, en algunos casos, podría equilibrar estos inconvenientes, las más de las veces, en gran parte del interior, la vida no es más barata que la de Buenos Aires o, por lo menos, es siempre más difícil.

Por cierto que igual norma de justicia se consagra para todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional.

Posteriormente, en el artículo 99 se establecen incompatibilidades de los jueces con actividades de proselitismo político, con el ejercicio del comercio y con la realización de cualquier actividad profesional. Sólo está permitido la comisión de estudios o la docencia, aunque no la primaria o secundaria.

Se dispone que los jueces deben residir en un radio de sesenta kilómetros de la Capital, distancia que la comisión ha fijado considerando que por todas las leyes y disposiciones administrativas últimas, se comprenden dentro de dicho radio al Gran Buenos Aires. En condiciones excepcionales, la Corte Suprema de Justicia podrá conceder autorización para residir a una distancia mayor.

Se legisla para los funcionarios y para los empleados, estableciéndose el estatuto del empleado de la administración de justicia. Se dispone que para ser secretario o prosecretario de los tribunales nacionales, se requiere ser argentino, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional. Para ser designado, en cambio, funcionario o empleado en la justicia nacional, cuando la ley no exija otras condiciones especiales, se requiere ser argentino, dándose preferencia a quienes acrediten haber terminado estudios secundarios.

Se dispone que la Corte Suprema nombra, remueve y decide sobre toda cuestión vinculada al personal de la justicia de la Nación, cuya designación no dependa del Poder Ejecutivo, conforme a las normas reglamentarias que ella misma debe imponerse.

Consagra el artículo 15 la estabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, que no podrán ser removidos sino por causa de mala conducta o ineptitud, previo sumario administrativo con audiencia del interesado.

Se prescribe en el artículo 16 que los empleados tendrán los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan y se dispone que la Corte Suprema debe acordar un escalafón

que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los empleados, debidamente calificada, y su antigüedad.

Se establece la aplicación de sanciones disciplinarias y el procedimiento respectivo y se consagra también cuáles son las facultades disciplinarias de los jueces respecto de los abogados, procuradores y litigantes, disponiéndose que en caso de arresto esa medida debe ser cumplida en una dependencia del propio tribunal o juzgado, o en el domicilio del afectado, de tal manera que no se menoscabe la persona del que sufre la sanción.

Se prescribe en el artículo 20 que las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo de la Nación deben prestar de inmediato todo el auxilio que les sea requerido por los jueces nacionales dentro de su jurisdicción, y que los jueces provinciales están obligados a dar cumplimiento a los despachos de los jueces nacionales. Se dispone asimismo que las autoridades provinciales están obligadas a cumplir las disposiciones de los jueces nacionales dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Entrando ya a legislar respecto de la Corte Suprema de Justicia, se prescribe que ella estará compuesta por cinco jueces y un procurador general y que ejercerá superintendencia sobre todos los tribunales de la Nación, en la forma que establezcan sus reglamentos.

Se dispone cómo se integra la Corte, estableciéndose que ella se integrará no ya con los conjuces, como se venía haciendo hasta ahora, sino con otros funcionarios judiciales, con los presidentes de las Cámara de Apelaciones de la Capital.

Se prescribe que las decisiones de la Corte se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran y que en caso de desacuerdo se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones.

Se legisla a propósito de la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte, recogiendo las enseñanzas de la propia jurisprudencia del alto tribunal que en más de un tema ha fijado criterio claro, definiendo el sentido de las expresiones de las leyes.

También se legisla sobre el recurso extraordinario, el de casación y el de revisión, que es el recurso del artículo 241 de la ley 50, y el que consagra el artículo 551 del Código de Procedimientos Criminales, de los recursos directos por apelación delegada y de los de queja por retardo de justicia.

Se legisla también, a propósito de la apelación ordinaria, contra las sentencias de las cámaras nacionales de apelaciones y se prescribe que las cuestiones de competencia que se planteen entre jueces que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlas, serán resueltas por la Corte Suprema de

manera que no haya posibilidad de que un litigante no tenga juez que proteja su derecho.

Se establecen disposiciones comunes para todas las cámaras de apelaciones de la República. Se dispone que las cámaras que tengan un número suficiente de vocales se dividirán en salas de tres miembros; que ellas designarán por sí presidente y vicepresidente, y se establece, adoptando un principio semejante al adoptado ya para la Corte Suprema, que las decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que las integran, siempre que éstos concordaren en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones.

Si se tratare de sentencias definitivas de unas u otras en procesos ordinarios, se dictarán por deliberación y voto de los jueces que las subscriben. En las demás causas las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal.

Se legisla a propósito de las decisiones de los tribunales plenarios de las cámaras, prescribiéndose que las cámaras nacionales de apelaciones se reunirán en tribunal pleno para estos objetos: para reglamentar su labor o la distribución de la labor entre sus salas, si las hubiere, y entre los juzgados de primera instancia que dependan de ella, resolviendo las cuestiones que se susciten al respecto; para unificar la jurisprudencia de las salas o en las que se dicten sentencias contradictorias cuando no exista interpretación de la Corte Suprema, disponiéndose que la doctrina legal o interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales la cámara que la pronuncie es tribunal de alzada.

Se dispone también uniformemente que las cámaras nacionales de apelaciones o sus salas se integrarán por sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego, del mismo modo, con los jueces de las otras cámaras nacionales de apelaciones, en el orden que establezca la reglamentación y, por último, siempre por sorteo, con los jueces de primera instancia que dependen de la cámara o sala que deba integrarse.

En el artículo 32, la ley traza una especie de diagrama de los tribunales nacionales de la Capital, diciendo que estarán integrados por: 19 cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal: a) En lo civil, comercial y penal especial y en lo contenciosoadministrativo; b) En lo civil; c) En lo comercial; d) En lo penal; e) Del trabajo; f) De paz. Luego se hace una enumeración correlativa de los jueces de primera instancia, respecto de los cuales las cámaras hacen de tribunal de alzada.

Legisla especialmente el artículo 33 sobre la cámara nacional de apelaciones que hemos llamado «en lo civil, comercial y penal especial y

en lo contenciosoadministrativo, la cual será tribunal de alzada de los tribunales correlativos. Tiene la misma competencia que la Cámara Federal actual, con las excepciones a que ya me referiré y que deberá conocer en los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de organismos administrativos en los casos autorizados por las leyes y contra las resoluciones del jefe de la Policía Federal en materia de derecho de reunión; hasta ahora sin un tribunal establecido por las leyes ante el cual poder apelar.

Se prescribe también que las dos cámaras de apelaciones en lo civil de la Capital, existentes a la fecha de sanción de esta ley, constituirán un solo tribunal.

En el artículo 37 se establece que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, existente a la fecha de la sanción de esta ley, se denominará «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, de la Capital Federal». Luego, por el artículo 38 se crea bajo su dependencia la oficina de servicio auxiliar con los empleados que fije la ley. Dichos empleados deberán ser puestos de modo temporario a disposición de los jueces de instrucción y en lo penal especial, con el solo objeto de lograr una más pronta substanciación de las causas que por su naturaleza o complejidad no puedan atenderse eficazmente con el personal de los juzgados.

Es un principio de policía judicial, para librar a los jueces, en algunos casos, de la necesidad de recurrir a la justicia policial o de tener en sus manos un elemento de investigación propio que les permita dirigir más directamente la investigación.

Se prescribe que se eleve a doce el número de vocales de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, teniendo en cuenta el número extraordinario de asuntos en que debe conocer.

Al legislar sobre los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial de la Capital Federal, se prescribe que los juzgados federales número 5 y número 6, que existen a la fecha de la sanción de esta ley, que recibieron esa numeración por la ley 12.378, se denominarán juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial, conservando su actual competencia, pero no conocerán: a) De las causas cuyo conocimiento les está atribuido por razones de la nacionalidad o el domicilio de las personas; b) De las causas que se atribuyen por esta ley a los jueces nacionales de primera instancia en lo contenciosoadministrativo de la Capital Federal; y c) De las causas a que se refiere el artículo 46 de esta ley, es decir, de las causas atribuidas a la justicia del trabajo y de las causas que se atribuyen por la ley a los juzgados en lo contenciosoadministrativo de la Capital Federal. Conocerán, además, de las cau-

sas que versen sobre hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transportes terrestres, con excepción de las acciones civiles por reparación de los daños y perjuicios causados por delitos y cuasidelitos y los regidos por el derecho de la navegación y el derecho aeronáutico, entendiendo que todo lo que se refiera al transporte tiene tanta trascendencia económica, tanta importancia en la independencia y soberanía de la Nación, que es conveniente colocarlo bajo jueces que estén especializados en esta materia que constituye una nueva organización jurídica.

Los juzgados federales en lo criminal y correccional que existen a la fecha se transformarán en juzgados de primera instancia en lo penal especial y conservarán su actual competencia, pero no conocerán de las causas cuyo conocimiento le está atribuido por razón del lugar o las que se hayan atribuido por disposición expresa de esta ley a otro tribunal.

Para salvar un inconveniente que suele suscitarse con frecuencia en los tribunales, a propósito de procesos paralelos, cuando las personas caen bajo la jurisdicción federal, la ordinaria o la provincial, se prescribe que cuando un delito o un concurso de delitos atribuido a una o más personas como autores, cómplices o encubridores, diera lugar a la instrucción de un solo proceso, y uno o varios de los hechos o personas cayera bajo la competencia de los jueces de primera instancia en lo penal especial de la Capital Federal, dicho proceso será totalmente substanciado y terminado en el tribunal de esta competencia, en miras a acelerar el proceso y a que en un solo proceso se resuelvan todos los problemas conexos en un solo delito.

Los actuales juzgados federales números 3 y 4 de la Capital Federal y los juzgados creados por la ley 12.833, se denominarán juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo de la Capital Federal y serán competentes para conocer de las causas contencioso administrativas; de las causas que versen sobre contribuciones nacionales y sus infracciones; de las causas cuyo conocimiento está atribuido a los jueces creados para la Capital Federal por la ley 12.833 y de los recursos contra las resoluciones administrativas que las leyes en vigor atribuyen a los jueces federales existentes a la fecha de la sanción de esta ley.

Quiero dar una explicación a este respecto. Por la ley 12.833 se crearon los tribunales llamados administrativos, cuya actividad puede cesar en breve en virtud de las disposiciones legales que hemos dictado sobre agio y, más aún, por el levantamiento de los precios topes por el Poder Ejecutivo. Era conveniente, entonces, dar un lugar en la justicia nacional a estos jueces especializados en lo administrativo y no dislocarlos, aislarlos y dejarlos fuera del

panorama de la justicia nacional. La comisión ha creído prudente incorporarlos y formar con ellos y los ya existentes un cuerpo de jueces que por su especialidad están vinculados a todo lo que sea materia administrativa.

Se crean diez nuevos juzgados de trabajo en la Capital, porque los existentes son insuficientes para atender el número de causas que tiene la justicia del trabajo.

En cuanto a los jueces de paz de la Capital, se hace ascender a \$ 10.000 el límite actual de su competencia en los asuntos civiles y comerciales; en los asuntos sucesorios, a \$ 30.000, teniendo en cuenta que hoy cualquier bien alcanza fácilmente ese límite, pero admitiéndose a continuación que si de la tasación definitiva resultara un valor superior continuará interviniendo en el juicio siempre el juez de paz.

En los concursos civiles y en las pequeñas quiebras se eleva el límite hasta \$ 20.000, teniendo en cuenta la disposición que sobre las pequeñas quiebras establece con el mismo límite la ley de bancarrotas a consideración del Honorable Senado de la Nación.

Se prescribe también que la justicia de paz entenderá en todas las «demandas por desalojo, rescisión, cumplimiento, cobro de alquileres y demás cuestiones vinculadas al contrato de locación, cualquiera sea su importancia, haya o no contrato escrito». Se considera que la justicia de paz ha adquirido una tal práctica, una tal fineza jurisprudencial en materia de locación, que es bueno dejar en sus manos todo lo que se refiere a ella.

Sr. Martínez Luque. — Me permito insinuar la conveniencia de que la Honorable Cámara pase a un breve cuarto intermedio para descanso del orador.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Trebino). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 19 y 10.

—A la hora 19 y 15:

Sr. Presidente (Trebino). — Continúa la sesión.

Está en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — Por el artículo 49 se dispone que la actual oficina de mandamientos y notificaciones para la justicia de la Capital Federal, funcionará bajo la superintendencia de la Corte Suprema y diligenciará también sus órdenes.

A continuación se legisla sobre los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorios, y alterándose en algunos casos la juris-

dicción de las cámaras federales que ahora son cámaras nacionales de apelación con asiento en las provincias y en algunos territorios. Se consagra una modificación acerca de la cual debo llamar la atención de la Honorable Cámara. Se crea un nuevo juzgado nacional de primera instancia con asiento en la gobernación marítima de Tierra del Fuego y se le da jurisdicción no sólo en esa gobernación, sino también en las islas Malvinas y en el Antártida argentina, con el propósito de reiterar una vez más la decisión inquebrantable del pueblo argentino de considerar a las islas Malvinas territorio nacional.

En el artículo 59 se legisla respecto de los cuerpos técnicos periciales y de los simples peritos. Hasta ahora, el cuerpo médico de los tribunales y el cuerpo de peritos contadores funcionaban sin un régimen legal estable, que se les da por esta ley. En la misma se determina cómo funcionan esos cuerpos técnicos periciales, quién los dirige, qué obligaciones y qué derechos tienen. Se legisla con respecto a la morgue judicial dependiente del cuerpo técnico médico, ordenándose que no sólo servirá como elemento de estudio para la Universidad de Buenos Aires, sino también para todas las universidades del país.

Por fin, en disposiciones especiales transitorias, en el artículo 73, se prescribe que el Archivo General de los Tribunales —como dije al comienzo— el Registro Público de Comercio y el boletín dependerán del Poder Ejecutivo de la Nación, debiendo una ley especial establecer su nueva organización y funcionamiento. Se dispone que la Secretaría Electoral de la Capital, el Fichero Nacional de Enrolados y las secretarías electorales de las capitales de provincias y territorios, seguirán a cargo del juez que actualmente las atiende.

Las causas en trámite seguirán hasta su terminación en los tribunales donde estén radicadas en el momento de entrar en funcionamiento esta ley. Y las disposiciones de la ley, que vamos a dictar, referentes a los requisitos para designación de los magistrados, no se aplicarán a los que estén desempeñando sus cargos en el momento de entrar en vigor. Se ha querido no privar de legítimas aspiraciones adquiridas en el ejercicio de la profesión judicial, sea como magistrado, sea como funcionario, sea como mero empleado, y se ha reconocido, entonces, que los que ya tienen, por así decirlo, un derecho adquirido de acuerdo con las leyes actualmente en vigencia, continúan gozando la posibilidad de alcanzar los mismos grados en el escalafón judicial que podían alcanzar según las normas vigentes ahora.

Se dispone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha de redistribuir las secretarías de los juzgados contenciosoadministrativos creados por las antiguas leyes federales

y a los juzgados administrativos que se incorporan, teniendo en cuenta que a los primeros se le asignaban cinco secretarías y los últimos sólo tienen dos secretarías.

Se dispone que realizada esta redistribución los secretarios y empleados de los actuales juzgados de sentencia de la Capital, que actúan en los trámites relacionados con las leyes 12.830 y 12.833 volverán a desempeñar sus anteriores funciones.

Como lo anuncié en su mensaje el Poder Ejecutivo de la Nación, es su propósito proyectar una nueva organización para el ministerio público, y por esa razón, dentro del proyecto de ley que consideramos enviado por el Poder Ejecutivo no se incluye ninguna disposición que se refiera especialmente a los fiscales, defensores y asesores de menores, es decir, a todo el ministerio público.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara don Juan de la Torre.

Pero nosotros hemos creído necesario que se dicte una disposición transitoria que establezca que, mientras no se dicte esa ley, ejerza jurisdicción sobre el ministerio público y pueda ordenar sus funciones, adecuándolas a la nueva organización que por esta ley se da a la justicia nacional. De esa tarea se encarga, como órgano de superintendencia y órgano superior del Poder Judicial, a la Corte Suprema de la Nación.

Por último, se prescribe que esta ley entrará en vigencia a los noventa días de su publicación, término dentro del cual se entiende que la Corte Suprema de Justicia deberá adecuar todos los organismos de la administración judicial a las exigencias de esta ley.

Señor presidente: la comisión entiende haber realizado una tarea útil aceptando, con leves modificaciones, el proyecto del Poder Ejecutivo nacional. Cree que esta organización judicial podrá servir de base o eslabón para la futura organización de nuestra justicia, que habrá que dictarse, como ya lo dije, cuando los nuevos códigos de procedimiento en lo Criminal y en lo Civil se dicten. Será entonces el momento de crear los organismos colegiados que puedan conocer en el proceso que se desarrolle bajo dichas disposiciones legales. Pero entendemos que por ahora, y hasta tanto ellos lleguen, cumpliendo el mandato constitucional y llenando los vacíos que la legislación tiene a propósito de los problemas a que me he referido, conviene que se dicten estas normas que organizan y dan forma al mandato constitucional de erigir una sola justicia en todo el país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (de la Torre). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Señor presidente: este proyecto, como la mayor parte de las leyes impor-

tantes que ha sancionado el Congreso, va a salir así, precipitadamente, sin que ni la comisión ni los señores diputados hayan podido hacer un estudio concienzudo del problema.

Se trata de una ley orgánica del Poder Judicial, vale decir, la ley que va a reglar el modo de funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Su trascendencia es innegable. Pero el problema que el país tiene planteado en este aspecto de su vida institucional no es precisamente el de la organización legal de la justicia, sino el de la recuperación moral y espiritual de los jueces.

La excelsa función de administrar justicia que la sociedad pone en manos de los jueces exige una consagración, una voluntad y una calidad moral y espiritual extraordinarias para que esa función se cumpla cabalmente.

He dicho, señor presidente, que la función de administrar justicia es sin duda una excelsa tarea que cumplen los hombres. Surge así el interrogante que interesa dilucidar: ¿qué es la justicia?

El problema de la justicia se nos presenta en un doble aspecto. En su aspecto práctico, como un fenómeno de la realidad, diría, la justicia no es otra cosa que la efectividad del principio según el cual se debe dar a cada uno lo suyo; es decir, que en ese aspecto ella se manifiesta por su exteriorización; es la forma externa y pragmática de la justicia.

La realización de la justicia se cumple mediante un instrumento, el derecho; el derecho es así, el instrumento apto para dar efectividad a la justicia.

El otro aspecto de la justicia es el aspecto que yo llamo ideal, su lado interno diría; y en este sentido la justicia es un problema de orden espiritual y moral, es un estado del alma humana, un estado de la conciencia, que se caracteriza por la aspiración a una vida superior, a una vida que se eleva a las altas regiones de los ideales humanos, y se caracteriza por su perpetuo renacer en la conciencia.

La justicia en este aspecto, vale decir, como un ideal, como un estado del alma humana, no podría ser definida en términos precisos ni delineada en sus contornos exactos, ni es algo aferrable a los sentidos por lo mismo que es un estado del alma, un sentimiento y a veces una emoción. La justicia desde este punto de vista, escapa a toda definición. Yo diría para traducirla en un concepto que es ese estado que se nos presenta como algo inmanente a nuestra vida y que se nos representa en una fórmula llena de belleza y llena de idealidad, que aspira traducirse al exterior en un sentido de solidaridad humana.

Del Vecchio, el filósofo del idealismo italiano y de mis preferencias, afirmó con exacto concepto que la justicia culmina en la suprema exigencia del respeto de la autonomía del ser hu-

mano, a fin de que éste, no como personalidad empírica, sino como órgano de las ideas universales, pueda desenvolver armónicamente su naturaleza y actuar plenamente sus propios fines.

Para que esto sea una verdad, afirma también, que nada se puede pretender en nombre de la justicia sin someterse al vínculo que ella impone y que es por necesidad lógica una natural corrección del egoísmo.

Aristóteles a su vez ha definido la justicia en este aspecto ideal como una virtud universal y perfecta y la injusticia como un vicio total.

Es así, señor presidente, que nosotros nos encontramos con que la justicia en su aspecto ideal, la justicia como sentimiento y como idea, la justicia como estado del alma humana, se caracteriza precisamente por esa aspiración suprema a una vida ideal, a una vida en dignidad y en honor.

En el otro aspecto, en el aspecto en que la forma ideal aspira a traducirse en una realidad del mundo exterior la justicia tiene en el derecho el instrumento para su realización; el derecho que más que un fenómeno de organización social es también un ritmo necesario de la vida espiritual, es el arma o el instrumento mediante el cual la justicia trasciende al exterior y se realiza en la comunidad de los hombres. El derecho para realizar la justicia debe asegurar los bienes supremos de la personalidad humana: la libertad, el orden jurídico, el honor, la vida, el patrimonio. Todos éstos son un conjunto de bienes que integran la personalidad humana y cuya efectividad, amparo y protección lo otorga el orden jurídico. Cada uno de estos bienes, señor presidente, tiene para el ser humano un valor trascendente de innegable significación. En primer lugar, el derecho debe asegurar la libertad del hombre. La libertad, palabra que envuelve en su magia un verdadero sentido emocional, ha sido la eterna preocupación y aspiración de los hombres. La lucha permanente del ser humano por conquistar o recuperar su libertad, casi puede decirse que es lo que configura las distintas etapas de la historia de la humanidad. Ayer y hoy el hombre ha luchado y sigue luchando por su libertad, y tanta es su trascendencia que hombres del talento y de la preocupación filosófica de Benedetto Croce, ha escrito el primer capítulo de su *Historia de Europa en el siglo XIX*, dedicándolo a lo que él llama la religión de la libertad. Y afirma que la preocupación de los pueblos de Europa a la caída de Napoleón —el déspota genial como él lo llama— ha sido la de asegurar la libertad para el hombre, la libertad para los pueblos y la dignidad para el ser humano.

Otro autor, Erich Fromm, ha escrito un magnífico libro que denomina *El miedo a la libertad*, que es un estudio de psicología política en el que se ponen de manifiesto todos los factores que a veces conspiran contra la efecti-

va libertad del hombre. Guido de Ruggero y otros escritores han dejado también páginas magníficas en las que se define con precisión el verdadero concepto de la libertad.

La libertad se nos presenta, señor presidente, en un doble aspecto: en su aspecto negativo, o externo como podría yo llamarle, la libertad considera más que el contenido intrínseco de la libertad individual, la remoción de aquellos obstáculos que la perturban o la dificultan, es decir, que la libertad sería el medio o el instrumento destinado a remover aquellos obstáculos capaces de perturbarla o de impedirla.

En su aspecto positivo la libertad es una fuerza interior que se renueva permanentemente en la conciencia del hombre y constituye una aspiración permanente para realizar la suprema dignidad y la suprema aspiración humana a una vida libre, a una vida austera, a una vida noble.

El aspecto negativo tiene, sin duda, una importancia grande aun cuando no es toda la que a la libertad corresponde. Todos aspiramos a remover los obstáculos que se oponen al ejercicio de nuestras libertades. Todos deseamos desenvolver nuestra personalidad en un clima en que los obstáculos no existan, o los que existan sean removidos. Pero reducido a este aspecto, el problema de la libertad tiene el gran inconveniente —y es la característica común de los hombres que hablan de la libertad en sus diversas manifestaciones como libertad del miedo, de la necesidad, etcétera— de que la preocupación por este bien supremo del ser humano termina con la remoción del obstáculo que la impedía; es decir, se reduce a una mera eliminación de impedimentos para realizarse en lo externo. Pero esta concepción de la libertad es insuficiente y de ahí la trascendencia extraordinaria que el problema de la libertad tiene en el orden interno, o sea, en su aspecto positivo, como expresión de un sentimiento del alma humana, de un bien espiritual y moral que debe ser permanentemente renovado y reactualizado en la conciencia, para que, aun removidos esos obstáculos, subsista como una fuerza espiritual y moral, mantenga su perennidad interior y se exteriorice constantemente como una expresión de anhelos y sentimientos, como una aspiración suprema del ser humano.

He ahí por qué he dicho que uno y otro aspecto se complementan.

La libertad, en verdad, es un estado del alma que se realiza en lo externo mediante la eliminación de los obstáculos que la impiden.

Un maestro prematuramente desaparecido, que honró la cátedra de la Universidad de Córdoba, filósofo y sociólogo eminente, el doctor Raúl Orgaz, en un discurso notable decía esto que voy a leer: «Puede reconocerse que el Estado liberal, como cualquier otro Estado, necesita celosos defensores y custodios, y que la defensa jurídica de la libertad es indispensable

en un Estado democrático. Mas no pongamos demasiado alta nuestra fe en la eficacia de las normas y busquemos un poco mas abajo la fuente de la perennidad de la idea liberal.

«Hace muchos siglos Juvenal lanzaba la célebre pregunta: ¿quién custodia a los custodios? La libertad tiene sus custodios y guardianes en los magistrados, pero sólo la educación de las masas para la libertad, es decir, la educación para el reconocimiento de los valores éticos de la personalidad puede hacer de ella inflexibles custodios de los custodios e infundir más fuerzas al enflaquecido Estado liberal de nuestros días. Únicamente así es lícito hablar de neoliberalismo, expresión empleada para significar lo que hay de imperecedero en la idea de libertad.»

Más o menos en esa época, hace ya siete años, en una conferencia académica el diputado que habla afirmaba este concepto que me voy a permitir también leer: «Es que la justicia —decía entonces— como el derecho que la realiza, constituyen una idea lógica, no una idea de fuerza, como lo sostenía Ihering. Ambas se conquistan en la conciencia, se arraigan como un sentimiento, se difunden como un ideal y buscan su realización en la vida, y si el símbolo de la justicia se nos aparece empuñando una espada, no es porque la representación de la espada se connaturalice con la idea de justicia. No; la justicia es una exigencia absoluta de la conciencia humana. La espada, símbolo de la fuerza, es tan sólo el instrumento de su protección. La justicia actúa por su fuerza immanente. La espada es su custodio y no actúa sino para asegurar su validez. Si así no lo hace, se convierte en su verdugo. Pero la justicia como el derecho, no viven ni se realizan sino en un clima de libertad, de esa libertad tan necesaria a los pueblos y para la cual reclamaba nuestro decano el doctor Orgaz, en su magnífico discurso en esta academia, sus custodios y sus guardianes. Allá donde falta la libertad, la justicia se pierde en el ambiente brumoso de la mistificación y el derecho deja de brillar como luz señera en el fondo de la conciencia para caer vencido por la arbitrariedad y el despotismo. Dirijamos, pues, nuestros pensamientos hacia las regiones más puras del ideal donde reina la justicia y seamos nosotros mismos los custodios de la libertad con el arma invencible del derecho.»

Este pensamiento que yo exponía hace siete años, cobra hoy una actualidad impresionante. Vivimos todavía bajo el reclamo permanente de una justicia que no hemos podido alcanzar. Para realizar esta justicia a que aspira el pueblo argentino, es necesario asegurar los distintos dones que la justicia nos proporciona.

A la libertad de que he hablado se agrega la seguridad y garantía del orden jurídico. No hay justicia sin orden jurídico. El orden jurídico significa que el hombre vive exclusivamente so-

metido a las leyes, significa que el gobierno de la conducta humana está sometido a un régimen preestablecido de normas jurídicas que aseguran su libertad, su honor, su vida, sus bienes.

Cuando el orden jurídico desaparece, el hombre deja de estar sometido a las leyes para quedar bajo la arbitrariedad de los que mandan.

Yo no encontraría, señor presidente, mejor pensamiento para definir el orden jurídico que este que stampa Guglielmo Ferrero en uno de sus magníficos libros. Dice Ferrero: «En la ciudad que el destino, en un momento benigno, me asignó como refugio para los últimos años de mi vida, presencia de vez en cuando un espectáculo que siempre me produce honda impresión. La ciudad está regida por una democracia compuesta de dos partidos que frecuentemente organizan manifestaciones, desfiles y reuniones al aire libre para afirmar sus respectivos programas. A veces, las manifestaciones de ambos partidos desfilan a la misma hora, siguiendo itinerarios distintos, con despliegue de banderas y al son de la música. En ambos desfiles todo es distinto: insignias y personas, pasiones y doctrinas; lo que para unos es el bien, es el mal para los otros y viceversa. En uno y otro desfile pueden percibirse, cristalizados, los contrastes ideológicos y las rivalidades por la conquista del poder que en tantas ocasiones han ensangrentado la historia, los contrastes y rivalidades por los cuales toda Europa estuvo en lucha desde 1789 a 1814. Quienes toman parte en estos desfiles no son ángeles entonando himnos en loor de una idea, sino hombres apasionados que se disputan el poder. Pero todos caminan tranquilamente y en orden, vigilados por alguno que otro fornido gendarme desarmado y benévolo. ¿Por qué? Porque entre ellos existe la inteligencia de que solucionarán sus diferencias por medio de discusiones y votos; que la mayoría determinará el derecho de mandato, que la mitad más uno será el argumento más decisivo en favor de la verdad de las ideas que entre sí se discuten...»

Sr. Visca. — El señor diputado por Córdoba no está en el tema en debate.

Sr. Presidente (de la Torre). — Señor diputado por Córdoba: el señor diputado por Buenos Aires observa al señor diputado que no está en la cuestión en debate.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Visca. — Estamos en el proyecto sobre organización de la justicia.

Sr. Dellepiane. — ¿Pero qué es lo que persigue la justicia, sino dar a cada uno lo suyo?

Sr. Mercader. — El señor diputado ha oído hablar al profesor Benítez.

Sr. Presidente (de la Torre). — La Presidencia ruega a los señores diputados no interrumpen al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Yadarola. — No es un problema político el que planteo, sino eminentemente idealista y doctrinario; es el problema de la justicia.

Continúa diciendo Ferrero: «Convenio frágil por demás. Es evidente que la mayoría no prueba nada: ni la capacidad de un gobierno ni la verdad de una doctrina ni la justicia de un veredicto. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un simple convenio, cuyo absurdo es tan fácil demostrar, baste para canalizar pasiones vehementes como la rivalidad de las ambiciones y la discordia ideológica? Siempre me pareció que los dos torrentes humanos pasaban entre dos hilos de seda casi invisibles que un niño podía romper. Y sin embargo los dos hilos de seda los sujetan, y dirigen cual si fuesen diques poderosos. ¿Por qué? ¿Ilusión, timidez, creencia en falsos principios inventados desde hace algún siglo? No, ambos desfiles tienen razón: si quebrasan los hilos de seda, se arrojarían el uno contra el otro, se desplomarían la columna de la ley, y el temor se apoderaría de los espíritus. Y entonces habría que reemplazar los hilos de seda por cadenas de hierro.»

Este pensamiento, señor presidente, es de una actualidad impresionante. También el mundo de hoy, a cuya situación no escapa nuestra patria, está en trance de romper los hilos de seda que constituyen los diques del orden jurídico, para caer aherrojados por las cadenas de hierro del despotismo. La República Argentina no vive hoy un orden jurídico.

Sr. Visca. — Señor presidente: hago la cuestión formal al señor diputado porque no se está refiriendo a la orden del día 134.

Sr. Yadarola. — La mejor prueba de que se vive al margen del orden jurídico...

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

Sr. Visca. — Hago la cuestión formal al señor diputado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por Córdoba: el señor diputado por Buenos Aires plantea la cuestión de que el señor diputado no se ajusta al asunto en debate. La Presidencia invita al señor diputado a que se concrete a la cuestión.

Sr. Yadarola. — Señor presidente: estamos en un terreno estrictamente doctrinario y ajustado al tema en debate.

Decía que cuando el orden jurídico desaparece empiezan a funcionar las leyes represivas que, cual cadenas de hierro, van aherrojando las conciencias ciudadanas. Esta Cámara, como expresión de ese estado que hoy vive la República, ha sancionado dos leyes de evidente carácter represivo, la que prohíbe la tenencia de armas y la que reprime el espionaje, sabotaje, etcétera.

Sr. Visca. — Vuelvo a hacerle la cuestión formal al señor diputado, y solicito que la Cámara lo resuelva.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por Córdoba: el señor diputado por Buenos Aires insiste en plantear la cuestión de que el señor diputado está fuera del asunto que considera la Honorable Cámara. La Presidencia le invita nuevamente a que se concrete al asunto en discusión.

Sr. Dellepiane. — Después, los juristas del peronismo comienzan en el Génesis y terminan en el Apocalipsis.

—Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor disputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Decía que el orden jurídico y el sometimiento a las leyes se imponen más por el contenido moral de las normas jurídicas que por su intimidación represiva. Los hombres viven dentro de la ley más por el sentido moral que los induce a someterse a ella, para no tener que prosternarse, según la fórmula clásica, ante los tiranos.

No es posible imponer el orden de otra manera. Es ilegítimo e inhumano pretender imponer el orden codificando el terror. Por eso afirmo que el orden jurídico —que ha de ser garantizado por esta justicia para cuyo funcionamiento se va a dictar esta ley— es de la esencia de nuestro régimen democrático, una exigencia impostergable de la vida argentina y los jueces deben asegurar la vigencia efectiva de ese orden jurídico. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Es también función de la justicia la defensa del honor y de la vida de los hombres. Ambos bienes son de la esencia de la vida humana. El hombre no vive sino en un clima y en un plano de dignidad, de honor y de decoro. La justicia debe asegurar la defensa de esos bienes inalienables.

—Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Es también función de los jueces asegurar la defensa del patrimonio. Los hombres adquieren su mayor independencia para actuar en la vida y para el ejercicio de las varias funciones que el destino les depare cuando han podido asegurarse un patrimonio que les permita vivir libres de presiones y de reacciones que afectan su libertad y su vida.

Todo esto es de la esencia de la justicia y de la función que los jueces han de cumplir para asegurarla. Para que el Poder Judicial pueda

llenar cumplidamente esa excelsa función que nuestro régimen le adjudica, es necesario que se organice sobre bases que le permitan un desenvolvimiento integral libre de presiones, con gran autoridad moral y gran sentido de su responsabilidad intelectual y civil.

La autonomía del Poder Judicial es de la esencia del régimen democrático. Nuestra Constitución, la de 1853, la consagraba como una exigencia absoluta del régimen democrático.

Sr. Colom. — También la del 49.

Sr. Yadarola. — [La Constitución del 49 ha reiterado esa forma de organización de la justicia, y la ley que se discute procura dar efectividad a ese principio.]

Es natural que un poder judicial no pueda cumplir su alta misión si no actúa con plena autonomía. El principio de la autonomía del Poder Judicial constituye uno de los elementos esenciales del régimen democrático. Ya Montesequieu señalaba en su magnífica obra *Espíritu de las leyes*, que cumplió doscientos años hace apenas poco más de un año, que en el régimen democrático la división y autonomía de los poderes hace a su esencia.

En nuestro régimen democrático es también como digo de su esencia la autonomía del Poder Judicial. Esa autonomía permite que el Poder Judicial, como poder moderador, pueda contener los excesos de los otros poderes del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Por eso la Constitución le ha dado, entre otras atribuciones extraordinarias, la de anular los decretos arbitrarios que pueda dictar el Poder Ejecutivo, o declarar inconstitucional las leyes que pueda sancionar el Congreso.

Esta autonomía tiene tal trascendencia que todos los autores, no obstante ser conciencia hecha, la repiten e insisten en ella. Eduardo Couture, el magnífico profesor uruguayo, dice esto en un párrafo de uno de sus libros que me permitirá leer: «Es evidente que en último término, en su desenvolvimiento final dentro del sistema normativo, la sentencia es una operación humana de la inteligencia y de la voluntad. Su valor será, pues, el valor que puedan atribuirle esa inteligencia y esa voluntad. Valdrá lo que el juez que la dicte valga como hombre, en su más profundo significado intelectual y moral. Quiere decir que al final de toda esta reflexión venimos a desembocar en una conclusión del más excepcional significado político: que de la elección de los hombres depende la suerte de la justicia. Será buena si la ley permite elegir hombres buenos; será mala si la ley autoriza a elegir hombres malos. El problema de la elección del juez resulta ser, en definitiva, el problema total de la justicia.»

Se advierte así, que es cierto lo que afirmaba hace un instante: que para la realidad de esta excelsa función que se encomienda a los tri-

bunales de justicia, es indispensable la recuperación moral y espiritual de los jueces.

Hugo Alsina, profesor de nuestra universidad, afirma igual concepto: «La independencia del Poder Judicial no importa una desvinculación completa respecto de otros poderes, sino la garantía suficiente para que los jueces puedan pronunciar sus fallos con absoluta libertad con prescindencia de las otras ramas del gobierno y sin temor a represalias por parte de las mismas. Sólo en esas condiciones podrá afirmarse que la sentencia es la expresión de la justicia. En cuanto cualquiera de los otros poderes, ya sea en forma directa o indirecta, a modo de sanción o recompensa, pueda influir en el ánimo del juez, nace el peligro de que sus actos no traduzcan fielmente su pensamiento, y la sentencia no sea, por lo tanto, justa en derecho. No basta entonces establecer el principio, sino que es necesario asegurar su respeto, y para ello debe rodearse al magistrado de garantías que lo pongan a cubierto frente a los otros poderes: la inamovilidad en el cargo y la prohibición de disminuir sus sueldos.

«Pero, ¿cuál es el contenido del principio de independencia del Poder Judicial? Desde luego, su facultad para aplicar e interpretar la ley sin intervención de los otros poderes; pero, además, existen otros aspectos que lo caracterizan con mayor precisión. En tanto que el juez puede establecer la ineficacia de una ley del Congreso, declarándola contraria a los principios de la Constitución Nacional, el Congreso no podría por una ley deconocer los efectos de la sentencia de un juez pasada en autoridad de cosa juzgada; mientras ningún acto del juez puede ser revisado por el Poder Ejecutivo, todos los actos de éste son susceptibles de caer bajo el control judicial. Dentro del régimen de nuestra Constitución, el Poder Judicial es, en efecto, el verdadero baluarte de los principios y garantías que ella consagra.»

He aquí, señor presidente, bien demostrado cómo en el concepto de todos los hombres que han tenido la preocupación por el estudio de estos problemas que interesan a la organización de la justicia, queda perfectamente establecido el principio de la autonomía judicial. El principio de la libertad material y espiritual de los jueces es esencial para que el Poder Judicial funcione regularmente y para que los jueces cumplan la misión de hacer justicia dando a cada uno lo suyo.

La independencia de los jueces debe ser de tal manera asegurada que ninguna presión de los otros poderes pueda hacerles torcer una decisión.

Sobre este particular me voy a permitir leer el pensamiento de Bielsa, conocido maestro del derecho. «La autoridad moral sin tachas —dice—, la independencia de juicio, el desarrollo del sentido jurídico, el decoro «para la función»

y «en la función», la ausencia de antecedentes negativos para la «personalidad» que el cargo exige en razón directa de la jerarquía y la responsabilidad, la consagración efectiva, reconocida públicamente en la defensa del derecho y no en designios subalternos en el orden político y profesional, todas éstas son las exigencias y condiciones que garantizan una buena justicia, una justicia imparcial, soberana, moderada y fundada en los grandes principios constitucionales que son el *substrátum* de todas las instituciones que forman el orden jurídico positivo. Ya hemos considerado algunos aspectos de esta cuestión.

«Cuando no haya jueces advenedizos que han logrado su cargo como favor retributivo de menesteres políticos o administrativos, en los cuales han sido instrumento de designios no siempre conciliables con el derecho y la moral política, ni hayan profesado cierta obsecuencia oportunista con los hombres y los tiempos, tan variables o tornadizos, por otra parte, en la suerte y en la adversidad, la justicia se habrá elevado virtualmente a ese plano superior de majestad, austeridad e independencia, que constituye como la sabiduría misma, una garantía de tranquilidad general y satisfacción pública. El juez debe ser independiente de todo lo que no sea la ley que debe aplicar; sólo a ella debe acatamiento.»

Estos conceptos hacen a la esencia del régimen democrático y al principio fundamental de la separación, división y autonomía de los poderes del Estado. Cuando estos atributos han desaparecido, la justicia no funciona; podrá existir un Poder Judicial con el nombre de tal, podrán funcionar juzgados, actuar jueces y dictarse sentencias, pero el Poder Judicial no funciona como lo quiere la Constitución, ni los jueces cumplen la extraordinaria función de distribuir justicia.

Entre nosotros el problema de la estabilidad de los jueces, de la garantía de su permanencia en el cargo, de su independencia, desgraciadamente ha sido de tal modo trastocado en estos últimos tiempos, que hoy podemos afirmar que los principios de la autonomía del Poder Judicial e independencia de los jueces no funcionan en la República.

Se ha removido a tribunales íntegros, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta jueces de inferior jerarquía, por el único delito de no hablar el lenguaje de la revolución. Ya el presidente de la República en su primer mensaje ante el Congreso afirmó que también los jueces debían hablar el lenguaje de la revolución, y tan pronto como así lo entendió, los jueces fueron removidos.

Sr. Visca. — ¿Por qué no habla de los jueces del radicalismo?

Sr. Yadarola. — La remoción del digno juez federal de Córdoba, doctor Barraco Mármol, es

expresión de este estado de perturbación políticojudicial que vive la República.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Se mantiene, señor presidente...

Sr. Bustos Fierro. — Ya he de decir en qué forma el juez Barraco Mármol hablaba el lenguaje político siendo juez federal; hablaba el lenguaje del conservadorismo, que es el del señor diputado.

Sr. Yadarola. — El lenguaje mío es el del radicalismo, partido progresista mucho mejor que el retrógrado a que el señor diputado pertenece.

La justicia argentina está intimidada. El caso de nuestro colega, diputado Balbin, que sufre los rigores de la cárcel por el delito de ser hombre libre, bajo la acción de un juez que obedece a órdenes, es el signo cabal del sometimiento de la justicia.

Sr. Visca. — Está fuera de la cuestión, el señor diputado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por Córdoba: el señor diputado por Buenos Aires observa, nuevamente, que no está en la cuestión el señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — He dicho que la justicia en nuestro país está intimidada. Necesitamos crear un instrumento que le dé absoluta independencia y libertad. Es indudable que la justicia está politizada y por ello perturbada y desplazada de su órbita constitucional.

El proyecto que se discute establece la prohibición a los funcionarios del Poder Judicial, de toda intervención en política. ¡Magnífica norma, señor presidente, que nosotros subscribimos! Los jueces deben ser absolutamente prescindentes en materia política. Afirma algún escritor que deben ser, incluso, prescindentes de toda actuación activa en la vida social.

Desgraciadamente, el fenómeno que hoy presencia la República es el de la completa politización de los jueces. Miembros de la Corte Suprema de Justicia concurren a los actos políticos del partido gobernante y hacen exteriorizaciones de adhesión al jefe del Partido Peronista.

Sr. Visca. — Que planteen el juicio político a la corte; que asuman la responsabilidad. Este proyecto se refiere a la organización de la justicia y el señor diputado se aparta del asunto.

Sr. Presidente (Cámpora). — Vuelven a hacer la observación, señor diputado por Córdoba.

Sr. Monjardin. — La Presidencia debe ejercer un cierto poder moderador.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia lo está ejerciendo al dirigirse al señor diputado por Córdoba, sin someter el caso a la Honorable Cámara.

Sr. Monjardin. — A quien debe llamarse la atención es al señor diputado de la mayoría.

Sr. Presidente (Cámpora). — No está en el uso de la palabra el señor diputado, sino el señor diputado por Córdoba.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Yadarola. — Estoy refiriéndome concretamente a un artículo del proyecto según el cual se prohíbe a los funcionarios del Poder Judicial intervenir en política, norma que nadie puede dejar de aplaudir, y que todos deseamos ver aplicada y cumplida rigurosa y estrictamente como única garantía de imparcialidad de los jueces y de seguridad para el pueblo. Pero desgraciadamente, frente a esa norma prohibitiva la realidad que nos presenta nuestro Poder Judicial de hoy es la inversa de lo que la norma quiere consagrar. Eso es lo que critico, y en ese sentido yo reclamo de los jueces su absoluta prescindencia en política. Si la ley les asegura su estabilidad, aun cuando corran el riesgo de ser removidos por un abuso de la prepotencia oficial, deben afrontarlo y saber cumplir con su deber antes que entregar la dignidad de sus magistraturas a las exigencias de la política militante. Tan cierta es mi observación de que los jueces están intimidados, que los miembros del Poder Judicial se han considerado obligados a hacer la consabida donación a la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón; también ellos han llevado su óbolo «voluntario», entre comillas, a la fundación...

Sr. Visca. — El señor diputado por Córdoba está derivando el asunto a una cuestión política.

Sr. Yadarola. — Es así como la independencia de los jueces no existe prácticamente.

Sr. Visca. — Está fuera de la cuestión.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por Córdoba: por última vez la Presidencia le informa que los señores diputados de la mayoría insisten en que está fuera de la cuestión. La próxima vez deberá decidirlo la Honorable Cámara.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Creo, señor presidente, que ningún diputado de la mayoría ni nadie que me

escuche puede atribuir a estas ideas que estoy exponiendo un mezquino propósito político.

Sr. Visca. — ¡Qué esperanza!

Sr. Yadarola. — Todos tenemos la responsabilidad de la hora que vive la República y todos aspiramos a perfeccionar sus instituciones por medio de los instrumentos legales; y cuando yo formulo estas críticas, señores diputados del peronismo, creo con toda honestidad espiritual e intelectual, que los señores diputados deben recogerlas como una apreciación sincera, sensata y noblemente inspirada y no como expresión de un bastardo sentimiento político.

He dicho que con todos estos fenómenos que ocurren en la vida judicial argentina se desnaturaliza la función de la justicia y se rebaja y disminuye el decoro de los jueces. Queremos asegurar para los jueces una permanente estabilidad y seguridad en sus cargos, para que a su vez aseguren a la sociedad una permanente y efectiva realización de la justicia.

También el Poder Legislativo ha incurrido en el grave vicio de interferir la acción de la justicia. El Congreso ha dictado leyes suspendiendo la ejecución de sentencia definitivas de los jueces; ha dictado leyes que anulan los efectos definitivos de la cosa juzgada, la única y esencial garantía para la estabilidad de los derechos y de las transacciones.

Sr. Colom. — Y las seguirá dictando, mientras las continúe exigiendo el bienestar del pueblo.

Sr. Yadarola. — Se admite la revocación de la cosa juzgada.

Sr. Colom. — El Congreso seguirá dictando leyes de ese tipo cuando respondan al espíritu de la revolución.

Sr. Yadarola. — En un régimen de efectiva y eficaz organización jurídica, sólo cuando se llegara a la comprobación de hechos fraudulentos que hubiesen determinado la sentencia podrían anularse los efectos de la cosa juzgada, revocándose la sentencia definitiva.

Sr. Dellepiane. — ¡Decir que los cuartelazos son revoluciones!

Sr. Visca. — Fué un cuartelazo que los llevó a ustedes...

Sr. Colom. — Esta revolución no es chirinada, señor diputado, sino una revolución social, revolución que para felicidad de ustedes es incruenta. Si hubiera costado cien mil vidas no estarían ustedes allí.

Sr. Yadarola. — Para el señor diputado estamos viviendo una revolución; yo digo que es una involución de la vida argentina.

—Murmillos en las bancas de la mayoría.

En síntesis, señor presidente, he expuesto nuestro pensamiento sobre el problema fundamental de la justicia y la organización de los tribunales que han de realizarla.

Voy a referirme ahora brevemente a algunas particularidades del proyecto.

Yo no podría decir que en su estructura general el proyecto sea malo; por el contrario, creo que contempla, en términos generales, aunque en forma incompleta, el problema de la organización de la justicia con un criterio adecuado y correcto. Lo importante será que la ley se cumpla. Pero hay algunos aspectos particulares acerca de los cuales quiero señalar mis discrepancias más bien de doctrina que de formulación jurídica de los principios y soluciones que la ley contiene. En primer lugar, en lo que se refiere a la división de las jurisdicciones en lo civil y comercial.

Vengo sosteniendo desde hace muchos años la necesidad de unificar todo el derecho privado civil y comercial en la rama de las obligaciones y contratos.

En realidad, todo ese conjunto de normas que regulan relaciones económicas de derecho privado tienen una materia análoga sobre la cual versa y a la cual se aplica la legislación. No existe diferencia esencial entre lo que se llama la materia comercial propia de la legislación mercantil y lo que se llama la materia puramente civil. Entre la industria comercial y la industria agraria, por ejemplo, no existen diferencias de contenido; se trata, simplemente, de distintas esferas de acción de la actividad económica. El comerciante compra para revender; el chacarero siembra para vender el producto de sus cosechas, y para ello ha de adquirir previamente la semilla, utilizar el trabajo del hombre para el cultivo y para la recolección, y luego vende su grano. Hay allí intercambio de productos, de bienes y de trabajo. No hay diferencias de naturaleza entre el acto que cumple el comerciante y el que cumple el chacarero que siembra su campo y vende el producto de sus cosechas. En una palabra, la materia es de una perfecta analogía.

Sr. Benítez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Yadarola. — Sí, señor diputado.

Sr. Benítez. — En doctrina podremos discutir lo que afirma el señor diputado, pero nos encontramos con que hay un Código de Comercio y un Código Civil que califican distintamente una y otra actividad. Para nuestro Código de Comercio una es la actividad comercial y otra la civil, y nosotros no podemos alterar los códigos.

Respetuosos del orden de prelación de la legislación, tenemos que tratar en esta ley de ordenar nuestra justicia de acuerdo con nuestros códigos de fondo, que todavía no se han reformado.

Sr. Yadarola. — Creo que el señor diputado está en un error. La circunstancia de que exis-

tan dos códigos en pleno funcionamiento, el Civil y el Comercial, para reglar actividades de índole económica, no excluye la posibilidad de la unificación del procedimiento o de la jurisdicción que ha de aplicarlos. El mismo proyecto ya unifica en algunos particulares, cuando establece, por ejemplo, que los jueces de paz entienden en los asuntos civiles o comerciales hasta el límite de cinco mil pesos, y cuando establece también que en materias de pequeñas quiebras —y esto para mí es un error— intervienen los jueces de paz y se aplican a ese estado de quiebra, las normas del Código de Comercio y de la Ley de Quiebras, por jueces en lo civil como son los de la justicia de paz. De modo que el principio de la unificación de las jurisdicciones puede muy bien anticiparse a la unificación de los códigos de fondo. La mejor prueba es que la legislación procesal de Córdoba desde hace más de veinte años establece la unificación de la jurisdicción en lo civil y en lo comercial, no obstante que tiene el país los dos códigos, y su aplicación ha sido de indudable beneficio para la mejor realización de la justicia.

Sr. Benítez. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Yadarola. — Sí, señor diputado.

Sr. Benítez. — Si se unificaran las dos jurisdicciones en su totalidad, muy bien, pero el señor diputado se refiere a unificarla sólo en lo relativo a las obligaciones.

En cuanto a ciertos actos llamados de comercio, hemos mantenido las dos jurisdicciones, porque ya existe un concepto muy arraigado al respecto, sobre todo en la Capital, y no hemos querido innovar en esta materia.

Por otra parte, respeto el criterio del señor diputado sobre el particular, como igualmente el hecho de que algunas legislaciones del país han unificado en gran parte esas jurisdicciones.

Sr. Yadarola. — Respeto el punto de vista del señor diputado, pero estoy exponiendo mi pensamiento en un problema cuya vinculación con la organización de los tribunales es incuestionable.

Esta unificación es viable, sobre todo por el hecho de que una gran parte de la legislación que rige en toda la materia contractual y obligacional está prácticamente unificada.

El Código Civil rige todas las relaciones de contenido económico en las normas de carácter general sobre las obligaciones y contratos. El Código de Comercio no contiene disposiciones generales sobre los contratos ni las obligaciones y se aplican siempre las normas del derecho civil. La unificación tendría incluso la ventaja de hacer desaparecer esa duplicidad de legislación que se superpone con perjuicio para la recta aplicación de la justicia. Así, por ejemplo, en el Código Civil tenemos regladas las socie-

dades e igualmente en el Código de Comercio. Los principios jurídicos que están en la base de esa legislación sobre sociedades son los mismos en uno y otro código. El fenómeno se repite en materia de compraventa, de mandato, de fianzas y en algunas otras instituciones.

Todo esto está demostrando la conveniencia y posibilidad de llegar a la unificación del derecho de fondo y podríamos, como he dicho recién, dar un paso en este orden de ideas empezando por unificar la jurisdicción civil y comercial. Esa es la tendencia del derecho moderno. Tanto es así, que el Poder Ejecutivo ha remitido hace algunos días al Honorable Senado un proyecto de ley sobre concursos civiles y comerciales que denomina —a mi juicio equivocadamente— ley de bancarrotas, que unifica la legislación para esas dos categorías de deudores que quedaran así sometidos a una misma jurisdicción, la comercial, allí donde no existe la unificación, lo que está demostrando que en dicha ley, que es de fondo y simultáneamente de forma, el día que se sancione, como seguramente va a ocurrir, va a regir indistintamente para el comerciante y el no comerciante y el juez de comercio tendrá que resolver las cuestiones jurídicas nacidas de actos civiles del no comerciante fallido. De modo que la conveniencia de la unificación de los códigos de fondo en materia de obligaciones y contratos es evidente, y podríamos comenzar por la unificación de los fueros, que evitaría, incluso, una serie de incidentes interminables sobre incompetencia de jurisdicción. Es sabido que los malos litigantes recurren con frecuencia al procedimiento dilatorio de oponer excepción de incompetencia, afirmando que la cuestión que se discute pertenece al derecho comercial o viceversa y perturban la buena marcha de la justicia.

Si nosotros, en un ligero examen de los antecedentes del problema, de la unificación del derecho privado, nos detuviéramos en las causas que determinaron la separación de las dos ramas, el derecho civil y el derecho comercial, advertiríamos que fueron sólo circunstancias accidentales, a veces tan sólo un problema de política legislativa circunstancial, las que determinaron la separación de las dos ramas del derecho privado. En el antiguo derecho romano no existía la separación del derecho civil y derecho comercial. Tal vez por la obra admirable de adaptación cumplida por los pretores, las normas del derecho romano se aplicaban indistintamente, sin riesgo ni dificultades para la mayor celeridad de la actividad comercial, a una y otra clase o especie de actividad. Fué recién en la Edad Media, cuando la caída del imperio romano da nacimiento a esa nueva organización del mundo occidental, en que nacen con las corporaciones de artesanos, de comerciantes, etcétera, ciertas normas especiales destinadas a regir la actividad de

esas corporaciones que forman el antecedente remoto del derecho mercantil. En esas normas —digo— se origina el derecho comercial que luego tomó cuerpo en la codificación francesa y trascendió a la codificación de casi todo el mundo civilizado. La división de las dos ramas del derecho privado no fué, pues, determinada por diferencias de naturaleza de sus normas ni de contenido de las relaciones que regían o gobernaban.

Hay en la historia jurídica del mundo, señor presidente, ejemplos que nos demuestran la bondad del sistema que propugno. El Código Suizo de las Obligaciones consagra la unificación en forma perfectamente adecuada; es, tal vez, el más completo y que mejor sistematiza la unificación; el Código de Polonia —con soluciones que no acepto, porque las considero insuficientes— ha establecido la unificación; el Código Civil italiano de 1942 también ha consagrado la unificación, si bien por un procedimiento objetable y, a mi juicio, equivocado, pues no ha hecho una verdadera unificación como la que yo propugno, en base a un «Código Unico de las Relaciones Económicas», sino mediante una mera yuxtaposición de las normas del derecho comercial y del derecho civil, una simple incorporación del Código de Comercio al Código Civil; pero, de todas maneras, el hecho cierto es que se ha llegado a la unificación. El principio está triunfante. La doctrina jurídica universal viene luchando desde hace muchos años por alcanzar la unificación. En Roma, el Instituto Internacional para la unificación del derecho privado ha elaborado proyectos completos sobre la compraventa, sobre la responsabilidad y sobre las obligaciones de los que hospedan en sus hoteles o albergues, que importan la prueba cabal de la conveniencia y de la posibilidad de llegar a la unificación. Unificación que se alcanzaría no sólo en el orden interno, sino también en el orden internacional.

Francisco Consentini ha publicado un proyecto de código, que él llama Código Internacional de las Obligaciones, en el que unifica toda la materia de contenido económico; es éste un antecedente de indudable valor doctrinario.

He ahí, en apretada síntesis, los antecedentes y fundamentos que apoyan la tesis que sostengo. Y como un ejemplo de lo que puede hacer el trabajo de los hombres que aspiran a asegurar la mejor justicia mediante la unificación de las normas que han dado realidad a la vida de los pueblos, puedo citar el trabajo cumplido por una comisión mixta italofrancesa, constituida a iniciativa del ilustre romanista Victorio Scialoja en 1916, que llegó a elaborar un proyecto magnífico de Código de las Obligaciones y Contratos, que es la cabal demostración de la ventaja y conveniencia de la tesis que vengo sosteniendo.

—Suenan la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para el uso de la palabra.

En definitiva, yo creo que el proyecto habría ganado si se hubiese llegado a la unificación de la jurisdicción. Dejo así, un poco sintéticamente, bajo el apremio del tiempo, justificado y fundado nuestro punto de vista sobre este particular.

Se incluye también entre las facultades de la Corte Suprema de Justicia la de actuar como tribunal de casación. Lo es en cumplimiento de la cláusula constitucional que ya le atribuye esta función a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Yo no desconozco, señor presidente, que el problema de la casación ha entusiasmado a muchos juristas de nuestro país. Yo no me cuento entre los entusiastas de la casación. Yo creo que en un régimen federativo como el de la República Argentina, en un régimen donde la propia Constitución deja a las provincias la autonomía para la aplicación de los códigos de fondo —Civil, Comercial, Penal y de Minería—, la intervención de la Corte Suprema de Justicia, unificando la jurisprudencia de los tribunales provinciales, importa un avance sobre la facultad privativa de las provincias de aplicar esos códigos de fondo. Es cierto que la Constitución lo consagra, pero es incuestionable que existe una gran contradicción entre la norma del artículo 68, inciso 11 y la norma que consagra a la Corte Suprema como tribunal de casación para toda la República. Es una nueva forma de desnaturalización del federalismo.

La ley establece también, como un principio saludable, el de la incompatibilidad de la función judicial con cualquiera otra actividad de orden administrativo o comercial. Sin duda alguna, es una solución plausible. Pero estimo que para conseguir una permanente consagración de los jueces a la altísima función de distribuir justicia es necesario que la incompatibilidad se extienda también a la función docente universitaria.

Quiénes alguna vez en nuestra vida hemos consagrado preocupaciones y desvelos a la cátedra universitaria sabemos cuánta es la preocupación, el tiempo y la dedicación que la enseñanza eficiente reclama. Quiénes, además, actuamos en la vida judicial sabemos cuánta consagración y cuántos desvelos reclama la función judicial para que los jueces cumplan con su deber de hacer justicia rápida, seria y eficiente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ha vencido el plazo de que disponía el señor diputado para su exposición.

Sr. Yadarola. — Ya concluyo mi exposición, señor presidente.

De ahí surge la necesidad de ampliar la incompatibilidad a la función docente universi-

taria, porque es necesario que los jueces se consagren exclusivamente a la justicia.

En síntesis, la aspiración de la Unión Cívica Radical en este extraordinario problema de la organización de la justicia es la de que hagamos una justicia imparcial, independiente, libre de presiones y coerciones, para que sea una realidad la fórmula suprema y absoluta de la justicia: *fiat justitia peream ego pereat mundus*. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Colom. — ¡Justicia como la actual: libre e independiente!

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bagnasco. — No he de seguir al señor diputado por Córdoba en la primera parte de su exposición.

Tengo para mí que los planteos sobre los conceptos de justicia, derecho, libertad y orden jurídico expuestos por el señor diputado preopinante están alejados del tema que debate la Honorable Cámara. Para mí es una verdad inconcusa que hay una serie de principios básicos, aceptados por el consenso general y que se hallan contenidos en su mayor parte en la legislación de fondo.

Si cada vez que este cuerpo, en el ejercicio de sus facultades, se dispone a legislar, discute los principios básicos del derecho, difícilmente se lograría concretar una legislación. Considero que para sancionar una ley orgánica de administración de justicia no podemos comenzar por estudiar el problema de la justicia desde fojas uno. A mi entender, éste es otro aspecto de la cuestión, sin desmerecer, por cierto, la importancia de los conceptos expuestos por el señor diputado por Córdoba, y sin entrar a discutir la bondad de los mismos, yo creo que nuestro deber en este momento es legislar a fin de establecer una administración de justicia teniendo en cuenta, desde luego, el verdadero significado del vocablo «justicia», pero sin entrar a definirlo con la minuciosidad y el punto de vista expuesto por el señor diputado por Córdoba.

Por eso estimo que el reajuste del organismo administrativo de la justicia cobra su verdadera jerarquía cuando se lo examina con relación a dos aspectos importantes. En primer lugar, debemos aceptar que la obligatoriedad de la norma jurídica coloca al Estado en la necesidad de asegurar las garantías jurisdiccionales. Ello consiste en imponer su cumplimiento a todo aquel que pretenda eludirla o violarla. Para ese objeto, que no hace sino dar a la ley la efectividad que implícitamente se ha tenido en mira al dictarla, el Estado tiene en sus manos el poder y los medios inherentes a su soberanía, los que ejerce mediante la justicia organizada en forma de tribunales judiciales y administrativos.

La organización administrativa de la justicia tiene así una relación directa con los fines

esenciales del Estado. Nuestra Constitución así lo establece en el Preámbulo al fijar entre sus objetivos el de afianzar la justicia. No podría ser de otro modo, desde que siendo una de las ramas en que se divide el poder soberano, su administración tiene importancia fundamental en el ordenamiento jurídico de los países que han logrado un mínimo de evolución y progreso.

La actividad judicial se desarrolla mediante la acción de los tribunales llamados a conocer y decidir los conflictos que se producen por el choque de intereses particulares entre sí o con los de la administración pública. Por ello es que la independencia del Poder Judicial es un axioma en punto a la garantía de los derechos.

En eso concordamos con el señor diputado por Córdoba, pero nosotros entendemos que la justicia, además de independiente, debe ser eficaz y no podría serlo si los hombres llamados a ejercitar la función tienen ideas y convicciones que no guardan armonía y correlación con el sentimiento público que por múltiples causas y formas de exteriorización define para cada lugar y tiempo la conciencia social.

Por eso, señor presidente, nosotros hacemos cuestión fundamental del elemento hombre, y el señor diputado también cuando habla de la falibilidad del hombre.

Es necesario tener presente que los tribunales son entes de existencia ideal, que sólo pueden exteriorizar su acción mediante la actividad de seres humanos, y el nombramiento de esos hombres para el desempeño del cargo los inviste de las atribuciones requeridas para manejar, en los límites de su función, la porción del poder público que el Estado delega en ellos.

Es, entonces, trascendental y conviene destacar su importancia, lo que se relaciona con la elegibilidad del hombre; pero si asociamos esta idea a la de la necesidad de que el Estado cumpla los fines, tendremos entonces que aceptar el principio que este bloque ha venido sosteniendo en la materia durante toda su actuación.

Nosotros creemos que es de la mayor importancia para el éxito de la acción de gobierno, que uno de los tres poderes del Estado, el llamado a aplicar la voluntad del pueblo soberano manifestado en la norma legal, sea un colaborador eficaz al servicio de la conciencia social, del sentimiento del pueblo. Y esa conciencia; ese sentimiento, ha tenido su más definida y clara exteriorización con motivo de la reforma constitucional en los términos sancionados por la Constitución justicialista de 1949, que todos hemos jurado cumplir, incluso los hombres que integran el Poder Judicial.

No es, pues, sino una consecuencia necesaria, lógica y normal que los jueces de la República tengan ideas y convicciones concordantes con la Constitución nacional. Esto, señor presidente,

no quiere significar que los jueces de la Constitución hagan proselitismo político —por eso está, precisamente, prohibido en el proyecto—, pero sí que concuerden, que mantengan con la Constitución una total identificación.

La Constitución es nuestra carta fundamental, es la que nos da el orden jurídico, y ella debe ser respetada; y los hombres que han de manejarla e interpretarla deben sentirse identificados con los conceptos que ella contiene.

Sr. Mercader. — Ni la Fundación de Ayuda Social ni las células peronistas están en la Constitución.

Sr. Bagnasco. — Ruego al señor diputado por Buenos Aires, que es el catedrático de su bloque, que me deje exponer.

Quiero aprovechar esta oportunidad para reivindicar a la justicia de la República, tan injustamente agraviada con palabras imprudentes y maliciosas en el reciente debate realizado en este recinto con motivo de la consideración de la ley sobre traición, espionaje y sabotaje.

Hubo quien se refirió a los jueces argentinos en tono peyorativo, atribuyéndoles ideas y convicciones coincidentes con la doctrina del peronismo, para inferirles, sacando consecuencias inadecuadas, agravios y desprecios.

Yo pregunto, señor presidente, si esas voces estarán en desacuerdo o tendrán rencor porque la justicia ha sabido interpretar las palabras del general Perón, cuando dijo: «Nosotros no reconocemos otro privilegio que el derecho de todos los ciudadanos de ser tratados por igual, sean sabios o no, sean pobres o sean ricos».

Es indudable que en el terreno político, lo que es el bien para uno constituye el motivo de ataque para otros; pero llevados los elementos de juicio al terreno objetivo, no puedo suponer que la justicia del caso Bemberg, por ejemplo, que ha logrado romper los lazos poderosos de los intereses creados, sobreponiéndose a las influencias y al capital para hacer verdadera justicia, merezca el agravio y el denuedo.

Con estas palabras quiero cumplir un propósito de reivindicar a la justicia de la República, haciendo votos para que siga el rumbo que ya se ha trazado, sin desmayos y sin temores, con la seguridad de que así ha de servir los bien entendidos intereses del pueblo argentino.

No nos extrañan, por cierto, las palabras pronunciadas recién por el señor diputado por Córdoba. Sabemos que hombres de ese sector siempre se han opuesto a una verdadera revolución, aunque esa palabra haya sido perennemente invocada como bandera. A nosotros nos basta comparar las consecuencias de aquella justicia con la justicia de ahora, y preguntarle luego al pueblo cuál prefiere. Con toda seguridad que no habrá ninguna clase de hesitación. Esta justicia ha superado en todos los aspectos a la justicia de la antipatria que imperaba en la República antes de la revolución.

Sr. Monjardin. — ¿Cómo puede decirse eso en serio, señor diputado?

Sr. Bagnasco. — Pregunto cómo puede decirse en serio que los diputados de la Unión Cívica Radical, que fueron vejados por los fallos injustos de la Corte Suprema, hayan sido sus grandes paladines y sus mejores abogados en este recinto. Yo quiero preguntar cómo es que, entre los hombres de la Unión Cívica Radical, todavía no se ha unificado el criterio con respecto a aquella justicia. Cuando se unifique, cuando se logre una verdadera unidad de criterio, entonces escucharemos la palabra del bloque, y no la de un diputado radical.

Sr. Yadarola. — La Unión Cívica Radical defiende a la institución, no defiende a los hombres.

Sr. Decker. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Bagnasco. — Sí, señor diputado.

Sr. Decker. — Con la venia de la Presidencia, voy a hacer uso de la interrupción que me ha concedido el señor diputado para refrescar un poco la memoria de algunos señores legisladores, que tienen el sentido de respetar la institución, como lo tienen a no dudarlos todos los miembros de esta Cámara, y decirle que los primeros proyectos de juicio político a los miembros de la Suprema Corte, y de cargos fundamentados, no provinieron del sector peronista, o de nuestro movimiento, sino precisamente de hombres que estaban coligados en aquella oportunidad juntamente con los diputados de la oposición, en la fenecida Unidad Democrática. Tal sucedió con las manifestaciones del doctor Sánchez Viamonte y del señor González Roura, que no comparten nuestros ideales.

Es necesario recordar esto porque es muy conocido el estribillo de que nosotros fuimos los que propedimos a aquel famoso juicio. Pero los diarios, categóricamente, anuncian lo contrario. Recuerdo en este instante a un periódico que ya ha pasado a formar parte de las cosas desaparecidas, que se llamaba «Antinazi», y en el que se publicaba una acusación furibunda contra la Suprema Corte de Justicia, porque no había querido aceptar en aquella oportunidad lo de «El gobierno a la Corte», que pedían quienes hubieran sido nefastos para el futuro de la República.

Sr. Visca. — Los traidores al pueblo, de la plaza San Martín.

Sr. Vischi. — Y todas las leyes de represión, evidentemente anticonstitucionales, que dictó el Congreso, fueron toleradas por la Corte Suprema, que este Congreso de la revolución depuso mediante el juicio político, sin que esa corte las hubiera declarado inconstitucionales. En cambio, en las provincias, y aun en la justicia federal, fueron declaradas inconstitucionales leyes que fijaban un salario mínimo para los trabajadores de la industria privada. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

Sr. Yadarola. — Es preferible el error de los jueces, señor diputado, a la inestabilidad de la justicia.

Sr. Decker. — Nadie discute la estabilidad de la justicia, pero no vamos a consentir la estabilidad de jueces que quieran traficar con los altos intereses de la Nación.

Sr. Bagnasco. — Quiero justificar la vehemencia de mis palabras ante la interrupción de los señores diputados de la minoría con el recuerdo de la actitud que tuvo la corte ante los pedidos reiterados del ex presidente Hipólito Yrigoyen. Recuerden los señores diputados la serie de escritos pidiendo amparo elevados por el ex presidente Yrigoyen, el que había sido llevado a la primera magistratura por la voluntad popular, líder y jefe del partido de los señores diputados.

Sr. Visca. — De algunos de los señores diputados.

Sr. Yadarola. — Derrocado en 1930 con la colaboración del señor diputado Visca.

Sr. Bagnasco. — Ese tribunal tuvo una desconsideración absoluta hacia el ex presidente salido de las filas populares. Eso es lo que produjo en mí una especie de rebelión ante las palabras de los señores diputados.

Continúo. El señor diputado por Córdoba ha criticado la actitud del Congreso al dictar leyes que detienen la ejecución de sentencias ya dictadas. El Congreso ha tomado esa actitud con un amplio sentido de justicia. La serie de conceptos y de citas que demuestran la ilustración del señor diputado por Córdoba, no han conseguido inculcarle el verdadero sentido de la justicia que, según lo sostenía Aristóteles, tiene como finalidad suprema la equidad. El señor diputado se detiene en un escalón distante del de la equidad: en el de la igualdad ante la ley.

Nuestro Estado justicialista busca con la doctrina peronista verdadera justicia y aspira a llegar a la equidad, que es, en nuestro concepto, lo que puede determinar una justa distribución del mínimo de los bienes materiales y morales que necesitan poseer los hombres. Justifico las leyes dictadas por el Congreso que no implicaban un avasallamiento de las facultades del Poder Judicial, sino que querían, con la doctrina contenida en sus disposiciones, imponer en la República el verdadero sentido de la justicia que había estado conculcado durante tanto tiempo.

Con respecto al concepto emitido sobre la unificación de los fueros civil y comercial, participo en parte de las ideas del señor diputado por Córdoba. En la provincia de Buenos Aires el sistema se aplica con resultados interesantes. Pero es necesario también tener en cuenta que en la Capital Federal los problemas son más complejos y más difíciles de resolver, máxime, como bien lo ha expuesto el señor diputado por la Capital, doctor Benítez, que ya hay una escuela al respecto que entiende que la modificación de ese criterio crearía una situación de difícil so-

lución hasta perjudicar los intereses de los litigantes.

Creo que en un futuro cercano, una vez aprobados los códigos procesales, se debe proceder a la modificación definitiva de la ley orgánica de la justicia para establecer una verdadera unificación de fueros que evite las cuestiones de competencia que dilatan, hacen engorrosa y gravan la justicia. Lo que sostiene la ley es la unificación de fueros de la justicia, de acuerdo a lo determinado en la Constitución de 1949.

El artículo 99, en su última parte, atribuye carácter nacional a todos los tribunales de la Capital, poniendo término a la discusión que se viene manteniendo en la doctrina al elevar a esos tribunales al rango de jueces de la Constitución.

Como bien lo explicó el señor diputado por la Capital, fueron razones circunstanciales de transitoria vigencia las que establecieron, allá por 1880, una diferencia de fueros entre la justicia federal de la Capital de la República y la justicia ordinaria de la misma jurisdicción. No mediaron entonces razones técnicas ni administrativas, sino sólo el propósito de no aumentar los motivos de rozamiento, el choque de ideas o intereses, con motivo de la federalización de Buenos Aires. Desde entonces se ha mantenido la diferencia de fueros; y desaparecida hace mucho tiempo la razón circunstancial, a mi juicio resulta anacrónico su mantenimiento.

Al discutirse la ley orgánica para los tribunales de la Capital en 1886, tuvo influencia en su sanción el por entonces reciente proceso de federalización de la Capital y el texto sancionado por ley 1893, crea jueces de primera instancia en lo civil, en lo comercial, en lo criminal y correccional de la Capital y dos cámaras de apelaciones, una en materia civil y otra en materia criminal, correccional y comercial, reglamentando su organización y funcionamiento.

El problema por otra parte ha sido ampliamente discutido en el seno de la Convención Nacional Constituyente de 1949. Distinguidos juriconsultos emitieron entonces su opinión, entre ellos varios jueces de la Corte y, en mi concepto, el debate de hoy nos debe llevar a la conclusión de que el proyecto en este aspecto hace bien en limitarse a adecuar la organización de la administración de justicia a la reforma constitucional sancionada en 1949, que atribuye carácter nacional a toda la justicia de la Capital, eliminando la subsistencia de dos órdenes de fueros: el federal, de raigambre constitucional, y el ordinario o local, al que se le ha asignado carácter meramente legislativo.

Con respecto al problema planteado por el señor diputado por Córdoba, que considera que se lesiona el sistema federal al facultar a la Corte Suprema para actuar como tribunal de casación, creo que es un error sostener esa doctrina. Sabemos que por la Constitución la legislación

de fondo está reservada al Congreso Nacional. Por lo demás, sería redundante reeditar aquí todos los argumentos expuestos en la doctrina, en la práctica, en el libro, en las conferencias de abogados, coincidente con la opinión de los colegios de abogados sobre la necesidad imperiosa de establecer el tribunal de casación, sobre los beneficios extraordinarios que los resultados de la aplicación de ese tribunal traería para la unificación de la jurisprudencia. Reincidir sobre eso, a mi juicio, sería traer a colación hechos de todos conocidos. Por eso me llama la atención el principio sostenido por el señor diputado, que con seguridad no es el sostenido por ninguno de los hombres que actuamos en el foro.

Analizando otro aspecto del proyecto, deseo asimismo poner de relieve lo relacionado con la reforma que se proyecta en la legislación relativa a la organización de la administración de justicia. Me refiero a la equiparación en la jerarquía y dignidad de todos los tribunales de la Capital, cualquiera sea la materia de su competencia. Tan jueces son los de primera instancia en lo civil, comercial, criminal y correccional, como los de la justicia de paz o del trabajo.

Este aspecto del proyecto señala la orientación igualitaria de la acción de gobierno, dando jueces dignos y de igual jerarquía, tanto a los pobres como a los ricos, y colocando a los magistrados judiciales en condiciones de atender sus funciones con independencia y sin sujeción a la voluntad de hombres influyentes por su posición social o por el poder del capital. La justicia será en adelante una sola para todos los habitantes de la Capital, sujeta a iguales condiciones y reglamentos.

Con respecto al planteo hecho por el señor diputado por Córdoba sobre la incompatibilidad de que trata el proyecto, deseo expresar mi opinión. Es cierto que ha sido materia discutida con acopio de argumentos, en pro y en contra, la incompatibilidad de la función judicial sobre todo con la docencia, que es la que sanciona este proyecto. Este adopta el mantenimiento del estado de cosas actual, es decir, que no se considera incompatible la magistratura con la cátedra universitaria.

Los partidarios de la incompatibilidad sostienen, en primer lugar, la incompatibilidad horaria. En segundo lugar, el recargo de tareas de quien a la labor que exige la magistratura debe sumar la que representa la realización de los estudios requeridos para recoger la información y preparar las conferencias docentes, lo que redunda en perjuicio de una u otra actividad. Por fin, se sostiene que el catedrático, al expresar sus ideas y convicciones doctrinarias desde la cátedra, está adelantando opiniones que luego pueden obstaculizar su libre decisión al dictar sentencia.

Todos estos argumentos son, sin duda, atendibles, pero frente a los que se le oponen pierden valor y eficacia.

La incompatibilidad horaria puede o no existir, según sea la distribución de las horas de cátedra. Claro es que aquel magistrado que no pueda obtener para la cátedra un horario no simultáneo con las horas que requiere la atención personal del juzgado, podrá dejar de ejercer la cátedra. Pero esa circunstancia de hecho no autoriza para establecer una prohibición absoluta y general en la ley. La incompatibilidad queda así como una cuestión de hecho, que deberá ser considerada en cada caso particular para determinar si afecta o no el buen desempeño del funcionario.

En cuanto a la presunción de que la suma de tareas puede acarrear perjuicios al desempeño eficaz de la magistratura, también es un argumento serio. Pero el mismo se contesta con éxito: si los estudios que exige la docencia y el tiempo que requiere podrían constituir un recargo inconveniente durante los primeros años de la cátedra, tal recargo de labor se realiza al comienzo cuando el profesor puede soportarla sin inconveniente por la plenitud del vigor físico que da la juventud, sobre todo en esta época en que los profesores se seleccionan especialmente dentro de la juventud argentina. Luego, la cátedra sólo exige una labor de actualización que no es pesada, ni demanda mucho tiempo. Y, en cambio, la preparación que al magistrado proporcionan los conocimientos adquiridos en la actividad docente facilitan su labor en la magistratura y le ahorran tiempo en la preparación de sus sentencias, utilizando para hacerlas el material recogido para la cátedra, que ya tiene ordenado. Aparte de que su formación intelectual y doctrinaria le permiten afrontar las causas sometidas a su conocimiento y decisión con una preparación especializada que facilita extraordinariamente su tarea con economía de tiempo y de esfuerzos.

Creo que, aparte de las circunstancias personales, con su influencia preponderante en cada caso, un profesor de la materia está en mejores condiciones de ser un buen juez cuando tiene la preparación doctrinaria que da la cátedra, que cuando carece de ella en la forma integral, con raigambre en los principios esenciales de la ciencia jurídica, en la doctrina de los autores, en la legislación comparada y en los antecedentes históricos de las instituciones.

Por otra parte, esa preparación traducida en las sentencias dan jerarquía a la magistratura contribuyendo al prestigio de la justicia. Y, además, el desempeño de la magistratura pone al catedrático en contacto con la vida, con la realidad social, de manera que desde la cátedra las enseñanzas que imparte no serán puramente

teóricas, divorciadas de las enseñanzas que procura la experiencia.

Por ello, creo también que será mejor profesor aquel que al dictar su cátedra se encuentra en condiciones de coordinar la doctrina con los sentimientos y necesidades del pueblo que conoce a través de su experiencia de magistrado.

Por último, al argumento que se funda en el adelanto que de sus opiniones hace el magistrado al dictar la cátedra, se contesta con razón que la misma situación se produce en las sentencias fundadas en doctrina, que exteriorizan la opinión del juez. De reconocerse validez al argumento, los jueces no podrían fallar juicios sobre materias análogas, después de haber emitido opinión en una sentencia anterior.

Pero debe aún agregarse que, lejos de ser un inconveniente, es hasta cierto punto una ventaja que se conozca de antemano la opinión doctrinaria de los magistrados, que no es sino su interpretación del texto de la ley, porque de esa manera se evitarán muchos juicios que se inician debido al texto ambiguo y de dudosa interpretación. El ideal sería que cada artículo de los códigos y leyes tuviera una interpretación establecida de antemano por el legislador. Ello no es posible debido a las circunstancias de hecho que atañen a cada caso particular. Pero es sin duda ventajoso que se conozca de antemano la opinión doctrinaria de los magistrados a fin de disminuir los pleitos, sobre todo cuando en breve espacio de tiempo se pondrá en acción la corte de casación, que tiene precisamente la finalidad de interpretación de las leyes.

Otro aspecto interesante del proyecto, y que constituye una innovación, es el que se refiere al nombramiento de secretarios y empleados.

El proyecto que se encuentra a consideración de la Honorable Cámara acuerda a la Corte Suprema la atribución de nombrar por sí sola los secretarios y demás empleados de las cámaras de apelación y de los juzgados de primera instancia. Actualmente los nombramientos se hacen por las respectivas cámaras de apelación a propuesta de los jueces.

La modificación tiene su fundamento en la disposición del artículo 21 del proyecto que atribuye a la Corte Suprema superintendencia sobre todos los tribunales de la Nación en la forma que establezca en sus reglamentos. En la actualidad, ejerce la superintendencia cada una de las cámaras de apelación sobre los tribunales de su dependencia, con la facultad de nombrar al personal a propuesta de los respectivos jueces.

Esta última facultad de los jueces de proponer los nombramientos ha quedado también eliminada, porque la comisión considera y entiende que la selección que debe significar el nombramiento será contemplada en los regla-

mentos que dicte la Corte Suprema, desde el punto de vista de las condiciones personales y de la idoneidad del candidato, organizándose en tal forma un régimen uniforme e igualitario en las designaciones sin que en el mismo quepan favoritismos de ninguna clase.

Quedarán en tal forma sometidos al mismo régimen legal y reglamentario todos los tribunales nacionales, dentro de los cuales están comprendidos los actuales tribunales federales, los de la justicia ordinaria de la Capital, de la paz letrada y del trabajo.

Si la Corte Suprema ha de dictar los reglamentos relativos al nombramiento, remoción, régimen disciplinario, escalafón, etcétera, que han de regular las actividades de los secretarios y demás personal de los tribunales nacionales, debe tener necesariamente la facultad de designar sin limitaciones dicho personal en el futuro, asumiendo la responsabilidad que comporta el nombramiento. No sería lógico ni conveniente que la corte se hiciera responsable del resultado y eficacia en el funcionamiento de esas actividades, si ellas están desempeñadas por personas cuya designación no le corresponde en forma exclusiva.

Creo, señor presidente, que la sanción de este proyecto de ley ha de traer aparejado para la administración de justicia resultados altamente benéficos, pues en él se han contemplado la mayoría de los principios que la doctrina en esta materia ha venido elaborando. Ello ha de contribuir, con seguridad, a que la justicia de la República, que en estos últimos tiempos ha ido adquiriendo un prestigio de que carecía, pueda servir fiel y ampliamente a los altos intereses de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Cámpora).—Si hubiera asentimiento, la Honorable Cámara podría pasar a cuarto intermedio hasta las 22.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora).—Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 55.

—A la hora 22 y 45:

Sr. Presidente (Cámpora).—Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot.—Señor presidente: me preocupa especialmente el proyecto que en este momento considera la Cámara, porque interpretando el pensamiento de los compañeros integrantes de este sector, allá en el período de 1947 propuse la designación, que la Honorable

Cámara aceptó, de una comisión especial redactora de los códigos de procedimientos en lo Civil, Comercial y Penal, de la Capital Federal y también de la ley orgánica de los tribunales nacionales.

Dicha comisión no cumplió, por cierto, lo que de ella se esperaba, en cuanto a realizar la encuesta que la Cámara decidió efectuar, en la que habrían opinado profesores, magistrados y profesionales, en una palabra, todos los sectores vinculados a esta materia tan importante para la vida nacional. Por el contrario, la comisión se ha limitado a considerar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo —es el caso de recordarlo— que tuvo entrada en la Honorable Cámara el 31 de agosto del año pasado. No se le brindó la preferente atención que el mismo merecía, ni siquiera ante los fundamentos del mensaje con que el Poder Ejecutivo lo acompañó, en el que solicitaba a la Honorable Cámara se dignara «prestarle su más pronta sanción legislativa».

Pero, señor presidente, el proyecto ha sido mejorado por la comisión, y hoy la Cámara se encuentra en presencia de una iniciativa por la que se proyecta una ley orgánica para la justicia nacional que, en cuanto a los aspectos que se legisla, constituye un buen proyecto y un mejor despacho de comisión.

Digo un buen proyecto y un mejor despacho de comisión sin que esto signifique afirmar que nos encontramos en presencia de lo que anheláramos algunos diputados nos hubiera ofrecido tanto el Poder Ejecutivo como la comisión especial de este cuerpo.

Más adelante me permitiré indicar lo que, en mi modesta opinión, constituye omisiones, que de haber sido salvadas habrían mejorado notablemente este proyecto de ley orgánica, y que al no hacerlo se ha desperdiciado una magnífica oportunidad para lograr con ello que esta ley orgánica de la justicia nacional fuera la ley revolucionaria de que se ha hablado con alguna insistencia esta noche por parte de los señores diputados de la mayoría.

Creo que diputados de uno y otro sector que han opinado sobre la ley en debate pueden subscribir todas las afirmaciones que se han vertido esta noche, claro está que eliminando los planteos de política combativa con que se ha acompañado dichas afirmaciones de carácter técnico.

Ya se ha hablado extensamente del contenido de esta ley y del propósito que se persigue con la misma. En particular hemos de hacer conocer, en algunos de los aspectos principales que contempla el proyecto, nuestro punto de vista en cuanto a nuestro criterio y en cuanto a lo que consideramos pudo haberse incorporado para mejorar y hacer más perfecta la ley.

Por eso, al hablar en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, me limitaré a hacer

afirmaciones de carácter general en cuanto al contenido del proyecto y a la importancia que damos a la administración de justicia en un país democrático.

Al hacerlo conviene destacar, previamente, que no nos sentimos excesivamente seducidos o atraídos por la letra de este proyecto de ley, que, en general, en cuanto a su redacción y a su contenido, no es atacable, pero que tenemos nuestras dudas en cuanto a que su redacción y contenido puedan permitir en la práctica demasiadas, errores, avances o atropellos que consideramos desnaturalizan la función judicial. Coincidimos con la letra del proyecto, pero la práctica diaria nos indica que las leyes, técnicamente bien confeccionadas, que encaran o resuelven con acierto o justicia aspectos de la vida nacional, puestas en manos de poderes ejecutivos, nacional o provinciales —que todo lo refieren a los puntos de vistas políticos que sustentan y a los propósitos que persiguen—, se ven desnaturalizadas y pasan a ser letra muerta en lo bueno que las leyes contienen, para brindar espectáculos de triste recuerdo que provocan la justa lamentación del pueblo de la República.

Discernir justicia es un propósito que debe cumplirse sin perjudicar a nadie y dando a cada uno lo suyo. Estos son principios elementales de derecho que se complementan. Por lo tanto, la justicia debe existir para todos; si no ocurre así, no es justicia, aunque los actos se cumplan en su nombre.

Siempre se descubren injusticias a través de los tiempos, pero los pueblos creen constantemente en ella y luchan por su afianzamiento a pesar de los reveses que pueda sufrir. De aceptarse la existencia de ideas innatas, es indudable que la justicia debe ser considerada como una de ellas.

Sin justicia garantizada y bien discernida no hay civilización ni progreso. En la vida constituye un gran aliciente la confianza que se tenga en lograr una reparación por medio de la justicia que pueda iluminar un momento de amarga desesperanza a los damnificados, a los agraviados y a los perseguidos.

Conviene que precisemos nuestro concepto sobre la administración de justicia y a los propósitos a que debe servir este proyecto de ley que consideramos: el respeto celoso a la división de los poderes, la consagración de la inamovilidad de los magistrados que deben discernir justicia y hacer efectiva, sin reticencias, sin excepciones, la igualdad absoluta de quienes comparecen ante los estrados judiciales reclamando su pronunciamiento.

Es innegable que estos aspectos así sintetizados de la administración de justicia, y que hacen al gobierno y a la vida de los pueblos,

han tenido en el transcurso del tiempo accidentado y azaroso desenvolvimiento.

En Roma el magistrado disponía del «jus edicendi» y cumplía actividades legislativas, administrativas y judiciales. Por lo tanto, no había aparecido aún la división de los poderes. En el Imperio, el soberano era la fuente de todo derecho y de toda justicia. Los bárbaros administraron justicia en sus asambleas, numerosas y tumultosas. Allí se afirmó el concepto de la cosa juzgada y pasó al derecho germánico en forma mucho más amplia que en el derecho romano del Imperio. La Edad Media nos exhibe la justicia del señor, del rey, de la iglesia, de las ciudades. La justicia real va absorbiendo poco a poco todas las otras y se valen de otros medios, es decir, de los jueces en conusión. El mundo antiguo no instituyó un poder judicial como órgano separado o independiente. Para muchos autores la magistratura en Francia, Inglaterra y Alemania, no tiene existencia constitucional ni tampoco está organizada como poder de gobierno, ni acordó a los jueces la garantía de la inamovilidad, ni a las partes el derecho de la igualdad ante la ley.

En sus primeras horas América gozó de los beneficios de una justicia, que si no pudo llamarse con exactitud contencioso-administrativa propendía, en primer término, a la defensa de las personas. Así lo dice textualmente la recopilación de Indias, en su libro II, título XV, ley 35, que establecía que «su finalidad es remediar o defender a las personas agraviadas de cualesquier autos o determinaciones que proveyeren u ordenaren los virreyes o presidentes por vía de gobierno». ¡Es magnífico, señor presidente, este antecedente del origen de nuestra vida judicial en América propendiendo, en primer término, a la defensa de las personas contra los abusos de los virreyes o de los presidentes!

El rey comunica a Nicolás de Arredondo, en 1789, en su cédula al nombrarlo virrey en Buenos Aires: «No podréis votar en las causas de justicia porque no sois letrado». Está naciendo en estas tierras el principio de la separación de los poderes. En la Ordenanza General de Intendentes de 1782, dictada con anterioridad, los gobernadores intendentes recibieron la limitación de que «el teniente tenía que ser forzosamente un letrado», a quien se le asignaban funciones casi exclusivamente judiciales.

Cesó el virrey de desempeñar estas funciones y tanto quiso exhibirse la división de los poderes y facultades que hasta se mudaron de asiento. Los jueces se instalaron en las casas consistoriales.

Cuando los integrantes de la Real Audiencia fueron llamados a la sala capitular del Cabildo para prestar juramento de acatamiento a la

nueva Junta de Gobierno, el fiscal del crimen, don Antonio Carpe y Rodríguez, fué quien llevó la voz de aquel organismo e hincado, frente al crucifijo, juró con su mano sobre los Santos Evangelios, pero hizo escuchar su protesta por el acto, «porque el tribunal —afirmó— como inmediato representante de la soberanía, el pueblo, jamás había jurado sino al soberano y debía jurar ante otra autoridad». Y en el acta consta que se le permitió allí establecer la protesta porque «las circunstancias eran extraordinarias y estrechaban a la prestación del juramento».

Así se reconoció que la justicia, después del 25 de Mayo de 1810, en estas tierras, tenía su origen en el pueblo, que era el único soberano. En 1810 se concibe la primera idea de un poder judicial organizado. Nace, pues, en estas tierras junto con el grito de libertad.

En el artículo 7º de la Bases de la Junta Provisoria Gubernativa, que según Mitre en su Historia de Belgrano (Tomo I, página 265) fueron la primera constitución política del pueblo argentino, se dice: «que los referidos señores que componen la Junta Provisoria quedan excluidos de ejercer el Poder Judicial, el cual se refundiría en la Real audiencia, a quien se pasarán todas las causas contenciosas que no sean de gobierno.»

Conviene repetir que nuestro país nace a la vista libre consagrando ya la separación de los poderes y delimitando las funciones del Poder Judicial frente al que tiene la parte ejecutiva del gobierno.

Mariano Moreno escribe en la Gazeta de aquellos tiempos: «Licurgo fué el primero que trabajando sobre las meditaciones de Minos, encontró en la división de los poderes el único freno para contener al magistrado en sus deberes. El choque de actividades independientes debía producir un equilibrio en sus asambleas». En otra oportunidad dijo: «Equilíbrense los poderes y se mantendrá la pureza de la administración.» Montesquieu, por su parte, desde su histórico *Espíritu de las Leyes*, había cumplido ya la trascendental misión de lanzar concretamente al mundo estas ideas.

En lo que se ha operado notable evolución es en el concepto de cuáles son los elementos que configuran la función judicial. Ha sido producto de una lenta evolución, con sus avances y retrocesos. No fué suficiente que en el Estatuto Provisional de 1815 o en el Reglamento Provisorio de 1817 se hablara ya del Poder Judicial. Era necesario, juntamente con la tarea de asegurar su acatamiento, establecer los elementos que harían posible la función judicial, como la universalidad de la jurisdicción, la independencia y la inamovilidad de los jueces, la desaparición del tribunal ad hoc, su dedicación a la tarea judicial con exclusión de cualquiera otra, la posibilidad de declarar inconsti-

tucionales las leyes, decretos, etcétera; el hábeas corpus, que constituye al Poder Judicial en guardián de la libertad; la posibilidad de llegar a condenar pecuniariamente al Estado; etcétera.

Por eso el congresal don Manuel Antonio de Castro, glosando a Montesquieu, había manifestado en 1824: «Desde el momento que se pone en un solo hombre la autoridad de dictar la ley, la de aplicarla y la de ejecutarla, se acaba la libertad. ¡Pero qué cosa más monstruosa es ver a un hombre en una parte haciendo la ley, en otra ejecutándola y tal vez en otra aplicándola! Desde ese momento ya no puede llamarse uno ciudadano libre, ya no puede tener opinión de su seguridad y libertad pues no está garantido y esto sucederá cada vez que en un solo cuerpo se reúnan todos los poderes.»

Por eso según la frase de Mitre, el Poder Judicial era una teoría, el programa de un derecho; necesitaba ser un hecho.

Anduvo la República en su marcha hacia la organización y como consecuencia de la Constitución de 1853 se instaló en aquellos momentos la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con la letra de la Constitución del 53, que sobre estos aspectos ha recogido en gran parte o casi en su totalidad la Constitución de 1949—, estos principios se hicieron realidad en nuestra legislación.

Es indudable que nuestra carta fundamental recibe en este, como en tantos otros aspectos, el soplo magnífico de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artículo 14 dice: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución».

Estos principios, como dije al comienzo de mi exposición, que tuvieron una azarosa y lenta elaboración, al final se encontraron en triunfo en casi todos los países en los que se trataba de escribir y de cumplir lo escrito en las cartas fundamentales.

Sr. Díaz de Vivar. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. López Serrot. — Sí, señor diputado.

Sr. Díaz de Vivar. — Me parece —no sé si lo interpreté bien al señor diputado— que cuando se refería a la doctrina de Montesquieu sobre la división de los poderes, hablaba de la división de los poderes como de una teoría definitiva en el sentido de que estaba totalmente lograda.

A ese respecto llamo la atención del señor diputado diciéndole que sobre el problema de la división de los poderes y sobre la teoría de Montesquieu se ha elaborado mucho y son muchos los autores que discuten a este respecto acerca de si en la mentalidad, en el pensamiento político de Montesquieu, esta división de los poderes es absoluta.

Yo estimo que en la actualidad en la doctrina y frente a esa teoría precisa, la mayoría de los autores está de acuerdo en que se ha superado un poco ese afán de una división radical de los poderes. Por lo pronto, nosotros hablamos de división de los poderes en forma incorrecta, porque el poder, como un derivado de la soberanía, es una unidad. Técnicamente, jurídicamente, deberíamos hablar de funciones, porque son las funciones las que están divididas.

Actualmente se estima que no existe una división radical y por eso se prefiere usar otro término: se habla de una distinción de poderes, porque es evidente que en la convivencia de tres funciones hay innumerables casos en que estas interfieren mutuamente y prueban que su convivencia constitucional, aun en un régimen puro del Estado de derecho burgués liberal, supone no una división radical de poderes sino una distinción, digo, de funciones.

No sé si me expliqué con claridad. Pero mi planteo es estrictamente jurídico constitucional.

Sr. Rojas. — Sólo en la España de Franco y en la Rusia de Stalin no hay división de poderes; pero en todas las constituciones modernas existe.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Decker. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. López Serrot. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital, en uso de la interrupción que le fué concedida.

Sr. Decker. — A propósito de las manifestaciones que se han vertido sobre la división de los poderes o sobre la organización del Poder Judicial como una expresión de democracia, quiero significar a los honorables miembros de la Cámara que ninguno de los aquí presentes podemos poner en duda a existencia de la democracia en un pueblo como el Canadá.

Sin embargo, en Canadá, el gobernador, que es designado por el rey de Inglaterra, nombra sin acuerdo de ningún otro poder colegiado a todos los magistrados, teniendo también la facultad de removerlos. Debo agregar que no sólo designa a todos los miembros que integran el Poder Judicial, sino también al Senado que es vitalicio, por imperio de su propia voluntad, y sin que ello implique en ningún caso desvirtuar los principios democráticos que existen en aquel país y que todos le reconocemos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vítolo. — Le ruego señor diputado que me permita una interrupción.

Sr. López Serrot. — Con mucho gusto.

Sr. Vítolo. — No es la primera vez que en la Cámara se hace alusión a la pretendida decadencia del principio de la división de los poderes.

Sr. Díaz de Vivar. — Yo no me referí a eso.

Sr. Miel Asquía. — Nadie habló de decadencia.

Sr. Vítolo. — Yo acepto que sea una unidad la soberanía, pero indudablemente de lo que aquí se trata es del ejercicio de la soberanía y en esa distribución funcional el principio de la división de los poderes seguirá siendo todavía un postulado de la libertad.

La manifestación hecha por el señor diputado Decker, no sé con qué intención, no podrá conducirnos a sostener la existencia de un Poder Judicial que no sea absolutamente independiente, tan independiente como lo desea a través de su exposición el señor diputado López Serrot, como antes, también, el señor diputado Yadarola.

Hay un hecho cierto: la división de los poderes como postulado de la democracia, finca, entre otros conceptos, en que el Poder Ejecutivo no tenga facultades judiciales y en que el Poder Judicial goce de absoluta independencia. Eso es lo fundamental en esta argumentación que estamos haciendo.

Sr. Visca. — Está equivocado el señor diputado.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Agradezco la interrupción del señor diputado Díaz de Vivar, pero quiero aclarar que en ningún instante afirmé que es en extremo absoluta la división de los poderes, y que si hice esas referencias ha sido al solo efecto de destacar la importancia trascendental que tiene la independencia de uno de los poderes —en este caso el Poder Judicial— frente a los otros poderes del Estado.

En refuerzo dé mis argumentos quiero traer un recuerdo lejano y una expresión contemporánea. El recuerdo está constituido por las palabras de Washington al entregar su nombramiento al primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos: «Experimento especial placer al dirigirme a vos —dijo— como la cabeza de ese gran departamento que debe ser considerado como la llave de nuestro edificio político.»

Y la expresión contemporánea pertenece a Harold Lasky, que en su libro *El Estado moderno*, expresa: «Si conocemos la forma en que actúa la administración de justicia de un Estado, conoceremos también exactamente su nivel moral. La independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo constituye, según lo hemos visto, una de las condiciones esenciales de la libertad.»

Pero no debemos tampoco sobre este aspecto conformarnos exclusivamente con la teoría. La

declaración de derechos de 1789 no impidió en Francia —al decir de Duguit en su obra *La transformación del Estado*—, «ni la tiranía sanguinaria de la Convención, ni el despotismo de Napoleón, ni el golpe de Estado de 1851, ni las limitaciones impuestas al gobierno central, ni la negación de los derechos individuales, invocando la necesidad de una cruenta guerra».

Los reiterados reconocimientos que de los derechos individuales han hecho los textos constitucionales patrios a partir del reglamento de la Junta del 22 de octubre de 1811, en que se declaró que el Poder Ejecutivo «no podrá tener arrestado a ningún individuo, en ningún caso, mas de 48 horas, dentro de cuyo término deberá remitirlo al juez competente, con lo que se hubiera obrado», y concretados en aquellas limpias páginas que no tuvieron otro destinatario que el pueblo argentino de la Constitución de 1853, no han impedido, es cierto, el desborde, el avance del poder, pero siempre han determinado las garantías de que debe gozar el individuo. Y aun en los momentos de desorden, como aquellos que trajeron el fracaso de la Constitución de 1826, podemos afirmar con Mitre: «A este triunfo bárbaro no faltó del todo la conciencia de algo que era superior a la fuerza bruta que reconocía el poder de la opinión. En otro país, donde esa luz intensa hubiera faltado, los caudillos vencedores, dividiéndose el imperio, como los generales de Alejandro, habrían proclamado la supremacía de la fuerza. Así fué en el hecho, pero en sus manifestaciones externas invocaban los principios y se revestían de formas.»

Pero la noción de tales garantías crea un estado de sensibilidad colectiva que, muy especialmente en las dictaduras —con dictadores encubiertos, rebosantes de aspiraciones, pero anémicos de fuerzas espirituales— presenta el caso de que los propios déspotas tienen que formular reiteradas protestas de respeto a las garantías y derechos de los habitantes y del pueblo; y éste, en la íntima seguridad de ser dueño de ellas, y tener derecho inalienable a gozarlas, obtiene las fuerzas que forman, aunque sólo una garantía moral, la reserva de donde sacan los recursos para la lucha definitiva en la que, salvados los obstáculos, siempre vence.

«Las garantías individuales —dice Alberdi en *Bases y puntos de partida*— proclamadas con tanta gloria, conquistadas con tanta sangre, se convertirán en palabras vanas, en mentiras relumbrosas, si no se hacen efectivas por medio de las garantías públicas».

Proclama, pues, la necesidad de proteger los derechos y las garantías que en nuestra época habrían de ser distinguidas magistralmente por el doctor Sánchez Viamonte, en sus trabajos *El hábeas corpus* y *La ley marcial y el estado de sitio*.

En el Estado moderno existe una función propia, que es la de administrar justicia, y ésta exhibe —según mi modo de ver— tres elementos fundamentales: la separación de los poderes, que garantizan la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes; la inamovilidad de los jueces encargados de discernir justicia, y la igualdad de todos ante los jueces que la disciernen.

En nuestro caso sostenemos concretamente que la organización de la justicia, así como el orden procesal, deben traducir el modo de ser democrático que inspira todas las instituciones jurídicas argentinas. En el proceso civil y penal también se pone en juego el interés público, y de allí nace la necesidad de munir al juez de los poderes necesarios para concurrir a satisfacerlo, por lo que resulta inadecuado, a los fines de la justicia, determinar su más perfecta organización y acordar, al juzgador, las facultades necesarias para imponer sus sanciones. Pero hay que evitar el despotismo y la tiranía del juez.

Siglos enteros fueron necesarios para llevar el derecho a su justo equilibrio. Por eso repito, es previa la forma cómo se organiza la justicia. Hay que consagrar un riguroso sistema selectivo para la designación de los jueces y magistrados; hay que dictar normas rigurosas en cuanto a los derechos y obligaciones de los abogados, procuradores, etcétera, en su carácter de auxiliares y cooperadores de la recta administración de la justicia. No es, pues, sólo cuestión de aumentar los poderes del juez. Bien se ha dicho que con ello se corre el riesgo «de sumar al mal de la enfermedad, el mal del remedio».

Hay que armonizar los intereses del individuo y del Estado. Juegan en este aspecto la libertad y la autoridad. La excesiva preeminencia de alguno de ellos lo será en detrimento del derecho. La libertad es una indeclinable exigencia del espíritu humano y de la dignidad del hombre. Su naturaleza es frágil. Su defensa exige renovar la energía moral, y una constante y celosa vigilancia que debe estar a cargo de la justicia.

Concretándome, después de fijada así nuestra posición sobre la importancia que viene del fondo de la historia y que debe asignarse a la separación de los poderes y al respeto de la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, adquiere una importancia extraordinaria la inamovilidad de los jueces que ha sido y es considerada por la sana doctrina como un elemento fundamental para asegurar la imparcial y correcta administración de justicia. Los señores diputados de la mayoría que manifiestan su solidaridad con la Convención Constituyente de 1949, sabrán que la misma agregó enfáticamente en el artículo 91 de la Constitución vigente, refiriéndose a la condición de los jueces las palabras

«son inamovibles»; pero recordarán también que esto se relacionaba exclusivamente con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales inferiores de la Nación, pues en la parte final del mismo artículo se determina que los jueces de los tribunales inferiores serán juzgados con sujeción a la ley de enjuiciamiento que, como se recordará, fué sancionada por esta mayoría en ausencia de la representación radical.

Hasta en Italia, durante el régimen totalitario de Mussolini, se consagró y respetó el principio de la inamovilidad de los jueces (artículo 69 del Estatuto), y fué en la Alemania de Hitler, durante el régimen nacionalsocialista donde los jueces vieron ampliar sus facultades destacándose que cumplían una función trascendental, como que estaban autorizados hasta para reformar la ley. Pero todo esto carece de valor y constituye mera teoría, por cuanto se les quitó todo lo que podía constituir la menor independencia del poder central; fueron convertidos en simples instrumentos debiendo buscar las fuentes para discernir justicia en la ley, siempre un acto de voluntad del fúerer, en la ideología del partido nacionalsocialista y hasta en los discursos y programas de gobierno expresados por Hitler, ya que sus opiniones eran consideradas como fuentes de derecho.

En nuestro país la disposición constitucional requiriendo nuevo acuerdo para los integrantes del Poder Judicial de la Nación juna de las disposiciones transitorias votadas por la Convención Constituyente de 1949! tornó en meras palabras y teorías la expresión del artículo 91 de la Constitución en vigencia, este principio que debemos defender con ahinco y con calor porque hace, a mi modo de ver, a la posibilidad del bueno y correcto discernimiento de la justicia.

Sr. Colom. — La Convención Constituyente fué soberana.

Sr. López Serrot. — La realidad es conocida: una disposición transitoria permitió al Senado de la Nación —porque en eso el Poder Ejecutivo hábilmente trató de no responsabilizarse— negar su acuerdo a una legión de magistrados judiciales que han honrado los estrados de la justicia argentina por el solo hecho —como ya lo ha afirmado con gran acierto y autoridad mi colega el diputado Yadarola— de no compartir el ideal político del gobierno y de la mayoría que existe en el Senado de la Nación.

Sr. Decker. — Y de la Constitución, que es lo esencial.

Sr. Colom. — Guardemos silencio piadoso, señor diputado.

Sr. López Serrot. — El proyecto habla de la inamovilidad de los jueces, transcribiendo a mi juicio innecesariamente, las disposiciones constitucionales que no es menester repetir. Ellas determinan además, una prohibición que alcanza

a los integrantes del Poder Judicial, de actuar en la vida política del país.

También es oportuno recordar que este proyecto existe en la Comisión Especial de la Cámara, desde el 31 de agosto del año pasado y ha sido conocido por magistrados y funcionarios judiciales, pero en la iniciación del año judicial que tuvo lugar el 1º de febrero último, en los tribunales de esta ciudad capital de la República, se dió el caso de presenciar el espectáculo de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exaltaron con palabras absolutamente imprudentes, porque definían una filiación y una postura política, su solidaridad con la política del presidente de la República y del partido que gobierna, mientras se permitió — como lo recogió la crónica de aquellos días — que los empleados de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires y del Registro de la Propiedad, gritaran en los pasillos, en las escalinatas, y en la propia sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los nombres o los apellidos del presidente de la República y de su esposa y que agitaran banderas argentinas en las que no figuraba el sol pero aparecían las fotografías del presidente de la República y de su esposa.

Sr. Decker. — Me parece muy bien; hay libertad total.

Sr. López Serrot. — Esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que por el artículo 14 de este proyecto de ley que se considera se le asigna nada menos que la tarea de «nombrar, remover y decidir sobre todas las cuestiones vinculadas con el personal de la justicia cuya designación no corresponda al Poder Ejecutivo».

Ya tenemos una noción exacta de cuál ha de ser, después de rotos todos los frenos y eliminado todo el recato y el criterio con que la Suprema Corte de Justicia ha de cumplir con este artículo 14 de la ley que se considera, al designar los empleados o funcionarios en el futuro e incluso poder remover a los actuales funcionarios y empleados de la justicia nacional.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ruego a los señores diputados que no interrumpen al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. López Serrot. — He manifestado que al debatirse en particular este proyecto hemos de fijar nuestra posición sobre algunos de los aspectos que contempla esta ley. He dicho también que en general el proyecto de ley que consideramos no merece objeción fundamental; pero sí debemos afirmar que desperdicia la magnífica oportunidad que se brindaba a un Parlamento que se precia de revolucionario...

Sr. Miel Asquía. — Que lo es.

Sr. López Serrot. — ...de haber dado a la República una ley orgánica, auténticamente revolucionaria e innovadora. Esta ley no es más que una repetición de leyes anteriores...

Sr. Decker. — Esta ley más que revolucionaria, es peronista.

Sr. López Serrot. — ...adecuando la estructura y la organización de los tribunales a la eliminación del fuero federal en la Capital de la República. Pero hay aspectos importantísimos que esta ley para ser, repito, una ley de avanzada como lo habríamos anhelado los diputados de este sector, omite contemplar; y no alcanzo a comprender los móviles de esta omisión que nos hace desperdiciar una ocasión propicia para dar una ley más o menos perfecta. Hay aspectos de la vida judicial que las modernas leyes orgánicas de la justicia incluyen, eliminándolos de los códigos de procedimientos; y que en este proyecto no se han incluido. Me refiero a las recusaciones y excusaciones; causas, modo y oportunidad de plantearlas.

Sr. Bustos Fierro. — Eso es materia de código procesal.

Sr. López Serrot. — Y faltan otros detalles importantes como la obligatoriedad de juramento por parte de funcionarios y empleados; la creación de un tribunal de responsabilidades para juzgar a los empleados y funcionarios y aplicar las sanciones; establecer los derechos, obligaciones e incompatibilidades de los funcionarios judiciales.

Existen otros aspectos de gran importancia que de haber sido contemplados en la ley le darían a ésta un sabor ciertamente revolucionario, como el de la creación de la policía judicial; establecer los derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones a los abogados y procuradores; la creación del registro de tasadores y martilleros públicos de tan señalada importancia como auxiliares de la justicia; determinación de las normas para el funcionamiento del Registro Público de Comercio, del de la Propiedad y del Registro Nacional de Reincidencia y estadística criminal; organización y funcionamiento de los establecimientos carcelarios y, principalmente, estas dos cosas que intencionalmente la ley no contempla: me refiero a las normas a que debe ajustar su funcionamiento el ministerio público y a la organización de los colegios de abogados.

Sr. Rojas. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. López Serrot. — Sí, señor diputado.

Sr. Rojas. — Se omite también reglamentar por sorteo el discernimiento de los edictos judiciales.

Sr. López Serrot. — Es decir que esta ley será buena en los aspectos que contempla, pero la Cámara y el Poder Ejecutivo habrán desperdiciado la oportunidad de dar al país la ley revolucionaria, la ley nueva, la ley de avanzada que en esta materia exige el actual momento

de nuestro desenvolvimiento judicial y de la cultura jurídica alcanzada en el mundo.

Durante esta sesión hemos hablado los abogados, y coincidido todos en defender la libertad. Napoleón por algo siempre tuvo aversión por los abogados, por ser en la teoría y en la práctica los precursores de la libertad, especialmente del pensamiento. Los abogados sostenemos también que la Constitución Nacional debe constituir el más fuerte lazo de unión de todos los argentinos; obedecerla y respetarla constituye la mayor seguridad, pues con ello se contribuye a asegurar el orden. Los abogados deben sacrificar todo otro interés frente a la necesidad de bregar por lo que son valores fundamentales: la justicia, la paz, el orden, la seguridad. Pero para todo ello necesitamos un buen funcionamiento judicial.

Los diputados de la Unión Cívica Radical no deseamos para nuestra República una justicia enana en una sociedad de actividad múltiple, para el logro de sus necesidades funcionales. Pero recordemos que el mal no es de hoy. Hipólito Yrigoyen dijo en su memorial a la Corte en 1931 desde Martín García: «Los pueblos no experimentan fatalidad más grande que aquella en que comprueban la subversión de la justicia que colma el extravío del desamparo, cuando ella se escalona desde la base hasta la cúspide en su claudicación».

Sr. Visca. — Esa es la Corte que ustedes defendieron.

Sr. López Serrot. — Para terminar, señores diputados, yo recuerdo una anécdota atribuida al mariscal Lyautey, quien al comprobar, en el Marruecos francés, que un rayo había abatido en medio de un bosque de cedros un conjunto de magníficos árboles, dió orden de que se plantaran otros para reemplazarlo; y al advertírsele que eran necesarios más de dos mil años para alcanzar su mismo desarrollo, contestó: «Tanta mayor razón para plantarlos inmediatamente.»

Yo hubiera deseado que esta ley hubiera sido un árbol puesto por este Parlamento para conseguir que algún día alcancemos la justicia que afianzará el progreso del país desde el punto de vista jurídico procesal.

La mala justicia — a veces mala por deficiencias en su organización — puede exhibir ante el país a víctimas y mártires de sus malas sanciones, a veces de la pasión política de los llamados a discernir justicia. Pero no nos interesa un precio tan alto para probar la ausencia de justicia, pues si por mala justicia exhibimos la existencia de mártires, también tendremos que admitir que en nuestra patria aun existen entre quienes discernen justicia los que pueden ser calificados de verdugos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Señor presidente: el proyecto de ley que consideramos está destinado a reglar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.

La oposición entiende que si bien el proyecto no es malo, por lo menos presenta fallas que pueden ser subsanadas. En realidad todo lo humano es perfectible, pero lo que yo no alcanzo a comprender, entonces, es la falta absoluta de antecedentes parlamentarios en lo que se refiere a modificaciones de la ley orgánica en vigencia. En una rápida revisión que he hecho de las iniciativas de los señores diputados — algunos de los cuales ya fueron legisladores en oportunidades anteriores — no he encontrado proyecto alguno que revelara alguna intranquilidad sobre la materia.

La última ley vigente sobre funcionamiento de tribunales data de 1902, y de 1902 a 1942 ha pasado mucha agua bajo el puente.

Sr. López Serrot. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Colom. — Sí, señor diputado.

Sr. López Serrot. — Para ser absolutamente veraz en su afirmación le ruego que recuerde que en 1947, como lo he manifestado al comienzo de mi exposición, propusimos la constitución de una comisión especial para realizar una encuesta y redactar los códigos procesales en lo civil, comercial y penal y la ley orgánica de la justicia nacional, interpretando precisamente el pensamiento del bloque de la Unión Cívica Radical. En consecuencia, mal podíamos proyectar reformas a la ley orgánica de la justicia nacional cuando habíamos logrado ya la constitución de una comisión especial a ese solo fin.

Sr. Colom. — Prosigo, señor presidente.

Las manifestaciones del señor diputado vienen a ratificar lo dicho por mí: desde 1902, fecha en que se sanciona la ley 4.055, a 1942 no hay constancia de ninguna inquietud del grupo radical. El radicalismo, desde 1916 a 1930, tuvo el gobierno de la República y la responsabilidad de ser mayoría en esta Cámara; y si no logró mayoría en el Senado lo fué por un error político, pues no hizo lo que debió hacer. Habiendo llegado la Unión Cívica Radical al gobierno en 1916 por el primer plebiscito popular, pudo obrar con criterio revolucionario, disolviendo el Senado e interviniendo el Poder Judicial. La Unión Cívica Radical no adoptó, a pesar de su denominación, una resolución radical y quizás su ulterior fracaso en el gobierno obedezca a esa actitud negativa.

Nosotros, en cambio, vivimos una hora absolutamente revolucionaria, y tanto es así que uno de los primeros actos de este parlamento de la revolución fué enjuiciar, por iniciativa del señor diputado Decker, en esa época presidente de nuestro bloque, a la Corte Suprema de Justicia, a esa Suprema Corte de Justicia defendida esta tarde por el señor diputado Yadarola, a esa

Corte Suprema de Justicia que, de acuerdo al párrafo incompleto leído por el señor diputado López Serrot, había cerrado sus puertas a un presidente constitucional depuesto, a quien se negó a escuchar. Esa Suprema Corte de Justicia fué enjuiciada y sus miembros fueron legalmente separados por mal desempeño en sus funciones, tal como lo establecía la Constitución del 53.

Sr. Yadarola. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Colom. — Sí, señor diputado.

Sr. Yadarola. — Cuando los hombres de la Unión Cívica Radical nos referimos a la Corte Suprema de Justicia no es para defender a los hombres que la integraban, cuya situación podía ser equivocada, cuya conducta podía haber sido débil, en muchos supuestos contraria a los intereses del gobierno de la Unión Cívica Radical. Pero de lo que yo tengo la absoluta seguridad es de que si Hipólito Yrigoyen hubiera vuelto al gobierno después del año 1930, después que la Corte Suprema le negó la justicia que él pedía, no hubiera procedido a remover esos jueces; su respeto por la justicia le hubiera llevado a tolerar los gravísimos errores de la Corte, para salvar el principio fundamental de la inamovilidad del Poder Judicial.

Sr. Visca. — Y hubiera sido consecuente con todos los desaciertos de la Suprema Corte de Justicia.

Sr. Colom. — Lo lamentable de todo esto, señor presidente, es que...

Sr. Visca. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Colom. — Sí, señor diputado.

Sr. Visca. — Aceptar la posición del señor diputado por Córdoba sería negar lo que él mismo ha sostenido esta noche y en otras oportunidades, de acuerdo con su doctrina. ¿Cómo es posible separar del conjunto que forma el tribunal de la corte a quienes están investidos del carácter de jueces de esa corte? ¿Cómo es posible que el señor Yrigoyen, cuyos desaciertos en el gobierno, para unos, y aciertos para otros, ha cubierto una página muy extensa de la vida pública argentina...

Sr. Mercader. — Y ponderada.

Sr. Visca. — ... y ponderada, en la opinión del señor diputado, y no ponderada en la opinión de muchos de los que hoy están sentados en el sector de que forma parte el señor diputado, cómo es posible, digo, aceptar que el señor Yrigoyen, vuelto al gobierno —es decir, su partido, porque también en esto está en contradicción el señor diputado con la doctrina democrática, cuando lo sitúa al señor Yrigoyen entre los dictadores—, no hubiera hecho nada contra los jueces de la Corte, que desconocieron la Constitución, lo que equivaldría a decir que hubiera sido consecuente con su posición, según algu-

nos, de avasallar todo lo que hacía al derecho, a las instituciones y a la Constitución de la República? En este caso apoyaría la delincuencia institucional.

Es lamentable, pero el señor diputado exhibe una posición doctrinaria contraria a la señalada por el señor diputado López Serrot, lo que no hace por primera vez, ya que en otro debate memorable del año pasado fueron dichos señores diputados protagonistas de discrepancias substanciales y definitivas.

En Córdoba, los enemigos del señor diputado han llegado a sostener que sus inclinaciones no han sido siempre democráticas, porque en reiteradas oportunidades él —y no solamente él sino también otros hombres del gobierno de la provincia de Córdoba— ha sido partidario de sistemas que algunos de sus compañeros condenan como fascistas.

Sr. Rabanal. — Todos los repudiamos.

Sr. Visca. — Agradezco al señor diputado la oportunidad de la interrupción para señalar el hecho de no aceptar se infiriera a Yrigoyen el agravio de presentarlo como aceptando la ignominia que significa el que la Corte negara el ejercicio del derecho a un procesado, y más en el caso de que tenía la representación popular por una elección en que fué consagrado presidente de la República. Eso se agrava con la afirmación por la cual se le negó sensibilidad radical. Es de todos conocido que apenas llegó al gobierno en el año 1916 arrasó con todo lo que no estaba de acuerdo con su supuesta doctrina.

Muchas gracias, señor diputado, por la interrupción que me ha concedido.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Agregaré dos palabras más para rectificar al señor diputado Yadarola en sus juicios sobre los ex miembros de esa Corte de Justicia que tanto defiende.

Nosotros nunca hemos atacado a la Suprema Corte como institución, sino que nos hemos limitado a enjuiciar a sus magistrados por violación reiterada a la ley que juraron respetar.

Como representantes naturales del pueblo y como guardadores celosos de la Constitución nacional, nos vimos necesitados a declarar la procedencia del juicio político. Esa Corte Suprema de Justicia fuerte ante el débil, como lo demostró su sordera ante los reclamos del hombre cautivo en Martín García, fué débil frente al gobierno fuerte surgido el 4 de junio. Una Corte que aceptaba directivas de los grandes capitales foráneos, no podía subsistir sin peligro para la nueva Argentina.

Un ejemplo nos lo da el caso clásico de aquel juicio en el que un usuario después de lograr sentencia favorable contra una empresa de servicios públicos, vió demorado por ese tribunal

el trámite de su expediente hasta que llegó ante ese mismo estrado un juicio similar, especialmente elaborado, donde actor y demandado de consuno habían preparado el terreno para que el tribunal supremo de la República pudiera sentar jurisprudencia favorable a la empresa demandada. De lo que afirmo tengo pruebas. Hubo un ministro de Relaciones Exteriores de la Nación que anticipó por cablegrama el resultado de ese juicio. De haberse fallado el juicio del usuario auténtico la compañía demandada se habría visto obligada a pagar millones.

Esa corte no podía ser defendida por nadie, y sin embargo lo fué por los representantes de la Unión Cívica Radical.

Sr. Benítez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Colom. — Sí, señor diputado.

Sr. Benítez. — No es de mi agrado recordar antecedentes en los que haya sido actor, pero me permito decir al señor diputado Yadarola lo siguiente: he participado con el doctor Antille en la defensa del doctor Yrigoyen, de manera que puedo hablar con absoluta propiedad de lo que hicieron la Corte Suprema de Justicia y el juez federal, y del pensamiento del doctor Yrigoyen respecto de una y de otro.

El juez federal y la Corte Suprema de Justicia, antes de resolver, y sin ocultarlo, nos decían que tenían que consultar al Poder Ejecutivo de la Nación.

Sr. Frondizi. — Igual que ahora, en el caso Balbin.

Sr. Benítez. — No, señor diputado.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Benítez. — Yo he oído al señor Yrigoyen expresiones tan terminantes y categóricas respecto de la maldad de esa Corte, que puedo asegurar que, de haber vuelto al gobierno el doctor Yrigoyen, no hubiera vivido un día...

Sr. Frondizi. — Esta Corte es peor. Está de rodillas frente al gobierno.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Colom. — Le concedo una breve interrupción al señor diputado Díaz de Vivar antes de proseguir.

Sr. Presidente (Cámpora). — Le quedan al señor diputado por la Capital cinco minutos de la media hora que le acuerda el reglamento para hacer uso de la palabra.

Sr. Frondizi. — Estos jueces son peores que los jueces del fraude.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Díaz de Vivar. — Me voy a referir a expresiones del señor diputado por Córdoba doctor Yadarola cuando hablaba de la politicidad o del politicismo de esta Corte, recordando a un presidente de un país absolutamente democrático como es el presidente Roosevelt. Cuando Roosevelt llegó al gobierno pretendió hacer triunfar lo que llamó el *new deal*, pero tuvo la oposición sañuda y sistemática de la Corte Suprema de Justicia, que amenazaba torpedearlo políticamente. Entonces el presidente Roosevelt, procediendo revolucionariamente, incorporó, aprovechando el fallecimiento de unos jueces y el retiro de otros, una cantidad de miembros nuevos a la Corte Suprema, todos militantes políticos del Partido Demócrata, para asegurar una mayoría para su plan político.

Sr. Vitolo. — Lo hizo por las vías legales.

Sr. Conte Grand. — ¿Y el juicio político qué es?

Sr. Díaz de Vivar. — Ese antecedente conocido muestra fehacientemente la necesidad que tienen todos los gobiernos revolucionarios de que el más alto poder judicial del país acompañe, dentro del cauce constitucional, su gestión política.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia informa al señor diputado por la Capital que sólo le corresponde media hora para hacer uso de la palabra.

Sr. Colom. — Yo le ruego a la Presidencia que me descuenta las interrupciones.

Sr. Presidente (Cámpora). — No, señor diputado. En materia de tiempo, la Presidencia no abre cuenta corriente.

Sr. Colom. — La práctica parlamentaria lo autoriza, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — No, señor diputado.

Con respecto al descuento de tiempo, no hay práctica parlamentaria.

Sr. Frondizi. — El señor diputado por la Capital tiene cuenta corriente en todas partes.

Sr. Mercader. — Es la primera cuenta corriente que no le conceden al señor diputado. *(Risas.)*

Sr. Rabanal. — El señor diputado dice que las ha cancelado todas.

Sr. Colom. — Ruego a los señores diputados de la oposición que me dejen hablar.

Le informo al señor diputado que mis cuentas corrientes las sigo manteniendo con saldo favorable.

Sr. Mercader. — Pero aquí no le dan crédito. *(Risas.)*

Sr. Colom. — El señor diputado por Córdoba formuló juicio severo, no sólo para la corte actual, sino también para los otros jueces.

Sr. Yadarola. — Que proceden como la corte. Hay excepciones.

Sr. Colom. — El señor diputado por Córdoba afirmó también que la justicia argentina está

intimidada, vale decir, que no puede administrar justicia.

Sr. Yadarola. — Es exacto.

Sr. Frondizi. — Pregúnteselo el señor diputado a los que intervienen en los procesos a Balbin.

Sr. Colom. — Y la verdad es que nuestra justicia está aplicando la ley sin interferencias.

Los señores diputados se agravian de la situación que se ha creado voluntariamente el candidato de la Unión Cívica Radical a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el que por afán proselitista se provocó a sabiendas catorce procesos, para lograr con el martirio mayor cantidad de votos, y los señores diputados ahora se asustan por el pedido del agente fiscal...

Sr. Frondizi. — No nos asustamos, ni Balbin está asustado. Se quedará preso Balbin todo el tiempo que haga falta.

Sr. Colom. — ...pedido que, si llega a concretarse en condena, quizá determine el pedido de indulto...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Rabanal. — Lo van a tener a Balbin de gobernador de la provincia dentro de doce años

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Frondizi. — Es más digno estar en la cárcel...

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — El señor diputado por Córdoba hizo el elogio a los jueces separados y evidenció no conocer la orden del día 55, del año 1948, del Senado de la Nación. Yo le recomiendo que la lea, porque en ella podrá ver las causas que determinaron al Poder Ejecutivo a hacer uso de la facultad que le ha conferido la cuarta cláusula transitoria de la Constitución de 1949.

En este expediente que tengo a la mano —que no he de abrirlo porque no deseo exhumar cadáveres— está el proceso al régimen del nepotismo imperante en nuestra justicia. Podemos citar casos de parentesco concretos de jueces con secretarios y fiscales; casos de jueces que alternaban la suprema majestad de la justicia con la presidencia de la comisión de carreras del Jockey Club; designaciones de oficio hechas bajo el clásico «ana ana»; juicios contra la Nación o contra la municipalidad en los que las sentencias invariablemente eran desfavorables al Estado nacional o al municipal. Podrá comprobarse el caso de un juez de cámara el que por \$ 10.000 logró cancelar una deuda de \$ 1.150.000 con el Banco Español, entidad li-

tigante ante el tribunal presidido —casualmente— por ese feliz deudor.

Yo no voy a analizar cada uno de los casos incluidos en este expediente. Afirmo que el señor diputado Yadarola ha sido injusto en su afirmación de que nuestra justicia vive intimidada. Ha incurrido en el mismo infundio cuando afirmó que el Poder Ejecutivo no pudo renovar a los jueces por la aplicación del artículo 49 de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional. Tampoco pueden discutirse las facultades de la Convención Constituyente, cuerpo investido de poder absoluto y soberano. Sí, investido de todo poder y soberanía. El señor diputado Vítolo afirmó en este recinto que por la ley votada se entregaba un cheque en blanco a la Convención Constituyente.

La minoría, en aquella histórica sesión en que la Honorable Cámara declaró la necesidad de la reforma constitucional, se asustó del cheque en blanco que iba a ser conferido a la Constituyente. También durante la campaña preelectoral, con referencia a esa convocatoria, se sostuvo que la Convención Constituyente modificaría el sistema republicano de gobierno. ¡Cómo entonces no pudo delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de realizar la remoción de jueces, especialmente de aquellos cuyo proceso tengo a mano, pero cuyos nombres no quiero dar a publicidad, a fin de no exhumar cadáveres!

Sr. Yadarola. — ¡Menciónelos!

Sr. Colom. — Tampoco el señor diputado por Córdoba puede agraviarse porque me refiera al ex juez Barraco Mármol de su provincia, que dejaba sin efecto las multas que aplicaba el Poder Ejecutivo a los agiotistas. El señor diputado defendió no sólo a ese juez, sino también a las casas comerciales a las que se les aplicó dichas multas...

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ruego al señor diputado por la Capital que se dirija a la Presidencia.

Sr. Colom. — He sido y continuo siendo presidente de la Comisión de Juicio Político de esta Honorable Cámara, y a su seno llegaron esos expedientes, que fueron solicitados por el señor diputado Visca, en oportunidad del juicio político al juez a que me he referido. En esos autos consta que el señor diputado Yadarola actuaba como abogado de la casa Tonsa.

Sr. Yadarola. — ¡Efectivamente! ¡Va a tener que aclarar lo que está diciendo!

Sr. Colom. — No quiero agraviar al señor diputado; solamente quiero significar que dicha firma, con o sin razón, fué sancionada; pero la coincidencia es muy sugestiva, ya que el señor

—distinguido profesor y abogado—era su defensor.

Sr. Yadarola. — ¡El juez interviniente se había inhibido de actuar!

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Colom. — El señor diputado por Córdoba no puede molestarse por mis palabras. No existe ninguna incompatibilidad legal en que el señor diputado ejercite su profesión de abogado. No le formulo ningún cargo.

Sr. Yadarola. — ¡No tiene por qué formulármelo!

—Suena la campana.

Sr. Colom. — Nada de particular tiene que su profesión de abogado lo llevara a defender a un presunto agiotista; y conste que no he tenido la intención de ofender al señor diputado.

Sr. Yadarola. — ¡No puede ofenderme!

Sr. Colom. — He narrado un hecho que ha llegado a mi conocimiento en virtud del ejercicio de mi mandato de presidente de la referida comisión.

Sr. Yadarola. — Pero el señor diputado debe decir...

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia ruega al señor diputado por Córdoba que no interrumpa al orador.

Sr. Colom. — Por ello me pregunto si obró mal el Poder Ejecutivo cuando no envió al Senado el pliego relacionado con el acuerdo de ese juez, el doctor Barraco Mármol, el que fuera poco tiempo antes separado por ese alto cuerpo. ¿Qué venganza política puede verse en ese acto del Poder Ejecutivo de la Nación?

Sr. Yadarola. — El señor diputado no se refiere a la forma...

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia ha hecho respetar al señor diputado por Córdoba en el uso de la palabra; y le solicita que respete, a su vez, al orador.

—Suena la campana.

Sr. Colom. — El Poder Ejecutivo usó de facultades constitucionales que no pueden ser válidamente discutidas, y menos en esta oportunidad en que discutimos una ley de organización de tribunales.

Sr. Yadarola. — ¡Aclare la actuación!...

—Suena la campana.

Sr. Colom. — Yo he consignado un hecho: la circunstancia de que el señor juez a que me he referido se haya inhibido, no modifica la cuestión.

Sr. Yadarola. — ¡Cómo no va a modificarla!

—Suena la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para su exposición.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ha vencido el plazo, señor diputado.

Sr. Colom. — Estimo que resulta innecesario que los señores diputados, al discutir esta ley orgánica de los tribunales, realicen incursiones en el terreno político, pues ello a nada nos conduce. En cuanto al cargo de que hemos sancionado leyes que modifican la autoridad de la cosa juzgada, le advierto que la modificaremos cuantas veces sea necesario en defensa del pueblo a quien representamos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba señor Martínez Luque.

Sr. Yadarola. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado por Córdoba?

Sr. Presidente (Cámpora). — El señor diputado por Córdoba no puede consentir la interrupción desde que aun no ha comenzado a hacer uso de la palabra. Por otra parte, las interrupciones deben también ser consentidas por la Presidencia.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez Luque. — Trataré, señor presidente...

Sr. Yadarola. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado por Córdoba?

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia ruega al señor diputado por Córdoba, a quien ha concedido la palabra, que haga uso de ella, por corresponderle en el orden de los señores diputados que se encuentran anotados en la lista de oradores.

Sr. Martínez Luque. — Trataré de abordar una tarea para la cual quizá resulten escasas mis fuerzas y menguada mi capacidad. Me esforzaré por devolver al debate la serenidad con que se venía desarrollando, por tratarse de una iniciativa cuya sola enunciación caracteriza la actividad de este cuerpo en esta materia de trascendencia fundamental.

Se han escuchado exposiciones brillantes alrededor de la iniciativa contenida en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo en el despacho formulado por la comisión especial que ha sido traído a consideración de la Honorable Cámara. Se trata con ella de realizar en forma honesta, elevada y concreta, una inquietud expresada desde el mismo instante de asumir el gobierno

el excelentísimo señor presidente de la República, general Perón, líder orientador de la revolución que viene moldeando el ideal acariciado por esta nueva Argentina.

Compartimos nosotros sus anhelos de hacer cierto el propósito de nuestros constituyentes de afianzar la justicia, salvando deficiencias de la legislación vigente, impidiendo incongruencias inadmisibles y asegurando una administración de justicia independiente, además de eficaz, y cuyos conceptos marchen al compás del sentimiento público. Preocupación esencial del gobierno de la revolución ha sido ésta, expuesta ya con criterio certero en su Plan Quinquenal, donde su afirmación transcrita como encabezamiento en el capítulo de la justicia debe servir de norma interpretativa al considerar la actividad del Poder Ejecutivo en la legislación que promueve en dicha materia, cuando dice: «El respeto al orden jurídico y al Poder Judicial no son incompatibles con la legislación que el gobierno promoverá para agilizar la actuación de los tribunales. Habrá de asegurarse también, mediante principios legales basados en razonables fundamentos objetivos, que los magistrados a quienes se ha encomendado la augusta función de juzgar reúnan la buena idoneidad moral, física e intelectual que exige tal delicada tarea.»

Los conceptos sociales afirmados y reiterados por el excelentísimo señor presidente de la Nación se apoyan, efectivamente, en una realidad indubitable, ya que fluye de la concepción de que el derecho no puede ser individual precisamente porque es cosa de relación, por esencia y por definición. Sólo se tiene derecho frente a otro. El derecho, se ha dicho, es función, es un medio y función de su medio, y la justicia que no sea social, no puede ser justicia ni a medias.

Hacerla social es espiritualizarla y humanizarla; convertirla en cosa esotérica y metafísica es substraerla a lo accesible, es divorciarla de la opinión pública, que debe sustentarla y sancionarla.

Por eso la ley orgánica de la justicia debe garantizar a la Nación jueces que tiendan a realizar el derecho, concebido éste como una moral y una educación permanentes y que sientan la justicia tal cual es, no una máquina dialéctica ni un encastillado silogístico, sino un órgano vivo de propulsión social, una dinámica función de cosas colectivas. De allí que el asunto que nos ocupa tenga una jerarquía de primer orden y sea de urgencia tal que no admita postergación alguna de parte de los poderes del Estado.

Considerada la justicia como virtud suprema de los pueblo cultos, ella no puede ni debe esperar, y por ello debe ser afrontada su reforma por el Congreso de la Nación, de manera imprescindible y urgente, para servir ese anhelo que ya encontramos en las Leyes de Partidas que

la define como fuente de donde emanan todos los derechos: «Raygada virtud es la justicia, según dixerón los sabios antiguos, que dura siempre en las voluntades de los homes justos, e da e comparten a cada uno dellos su derecho igualmente. E porque ella es tan buena en sí, comprende todas las otras virtudes principales, assí como dixerón los sabios.» O como dijera Ossorio y Gallardo: «La justicia no es sólo un poder, sino el más trascendental de los poderes. Actúa sobre los ciudadanos, en su hacienda, en su libertad y hasta en su vida. Está sobre el gobierno, porque enjuicia a sus miembros, y porque revoca y anula sus disposiciones en la vía contencioso-administrativa. Impera sobre el mismo Parlamento, ya que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes.»

Siendo como es, de factura humana, es nuestro deber salvar sus fallas y llenar sus lagunas, originadas en aquella propia naturaleza de por sí endeble y propicia al error y a la imprevisión.

El proyecto que nos disponemos a considerar —lo repito— es de indudable trascendencia e importa seria responsabilidad.

Su importancia reside en primer lugar en que se persigue superar un régimen orgánico de la administración de justicia, adecuándolo a la Constitución Nacional vigente, que surgió a la vida prestando abrigo a las más modernas aspiraciones colectivas de orden filosófico, económico, social y político, alimentadas por un pueblo joven, fuerte, pleno de reservas, que desea construir un presente más venturoso y un porvenir más seguro y brillante para sus futuras generaciones.

Volviendo la vista hacia nuestra historia, podemos observar que en nuestro período constitucional la República se organizó sobre los fundamentos políticos democráticos, y las constituciones de la Nación y de las provincias respondieron plenamente a ese pensamiento. La liberación del espíritu monárquico y autoritario colonial fué una realidad política antes de ser una realidad institucional. Toda nuestra joven historia es el testimonio de esa lucha por una liberación espiritual que debía seguir a nuestra independencia política. El pueblo debía ser educado en la dignidad de pueblo libre, consciente de sus derechos y de los deberes que esa situación comporta.

Nuestras generosas constituciones, hijas de ese espíritu, no son una casualidad, sino el resultado necesario y la razón de las luchas que las precedieron. Nuestros constituyentes no fueron a buscar inspiración en las decadentes monarquías europeas, sino en un nuevo espíritu autóctono y legítimo, movido por actuales conceptos liberales decantados por las experiencias de los últimos noventa años y agitado por las angustias y las reflexiones de estos instantes de excepcional revisión material y espiritual que vivimos en estos momentos con intensa plenitud.

Un nuevo sentido determinante de ese sistema político, histórica y sistemáticamente independiente de la colonia, con las adaptaciones que la realidad nacional imponía, es lo que da contenido a la Constitución Nacional.

Pero la Constitución es antes que nada una carta política y algo más; ella supera la organización interna de las instituciones que crea; ella es la fuente primaria de todo derecho. La más modesta institución jurídica debe estar impregnada por ese espíritu, tiene que ser la realización concreta de aquella voluntad superior.

¿Puede negarse que la actual ley orgánica del Poder Judicial ha quedado, por su espíritu y por su letra, fuera de la vigente Constitución Nacional? Evidentemente, no.

La organización de la justicia de la Capital Federal y de los territorios nacionales está regida por leyes que datan de más de medio siglo de vigencia, como la ley 27, de organización de los tribunales federales, sancionada en octubre de 1862; y sus complementarias: la 48, de septiembre de 1878; la 50, de septiembre de 1883; la 927 y la 935, de septiembre de 1878; la 1.497, de septiembre de 1884; la 1.532, de octubre de 1884, etcétera.

No hace falta abundar en razones para arribar a la consiguiente conclusión de que dichas leyes responden a una concepción jurídica atrasada, en franco retardo con el momento actual de la vida argentina y con el nuevo sentido de la Constitución justicialista.

Los problemas que vinieron a regir aquellas leyes no son tampoco los de ahora; falta en ellas un criterio jurídico uniforme que las defina o afirme dentro de una moderna tendencia del derecho; fueron dictadas para una comunidad social y política, que registran un atraso de setenta a ochenta años respecto a nuestras actuales instituciones y todo ello justifica esta nueva ley orgánica inspirada en el deseo de mejorar y actualizar sus aspectos jurídicos de la materia.

Por eso es acertada la preocupación del Poder Ejecutivo en esta materia, preocupación que ya se hizo presente en el Plan Quinquenal de gobierno, proponiendo para su impostergable reforma una serie de bases sentadas sobre sólidos principios y propugnando especialmente la unificación de los fueros en la Capital Federal. Para ello se recurre a la argumentación casi uniforme en la actualidad, expuesta por el doctor González Calderón; del ex ministro de Justicia doctor Naón al proyectar la unificación de fueros en el año 1910; del ex ministro Magnasco, en 1899, con el mismo objeto y en la «Encuesta realizada por la Comisión de Justicia, 1921», de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; además del acuerdo del 30 de diciembre de 1932 de las cámaras civiles en pleno de la Capital, registrado en «Jurisprudencia Argentina», tomo LV, página 745.

En la memoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del año 1948, se destacaban ya algunos problemas que había que resolver por la vía de la reforma constitucional, solución que se cumplió con la sanción de la Constitución vigente. Así encontraron adecuada solución tres problemas señalados en dicha memoria, a saber: la unificación de fueros de la Capital, el establecimiento de la casación y lo referente a la competencia originaria de la Corte Suprema y a la supresión de la tercera instancia ordinaria.

Dice también la corte en la mencionada memoria: «Falta ahora proyectar y sancionar las normas legales orgánicas y, sobre la base de ellas, dictar las reglamentarias que esta corte juzgue pertinentes para proporcionar al nuevo ordenamiento los instrumentos que le son necesarios para su eficacia.»

Y luego de concretar las reformas, a su juicio necesarias, en materia de procedimientos y organización judicial, dice el más alto tribunal de justicia de la República: «Esta corte expresa, por fin, el anhelo de que se establezca legalmente: 1º, la organización de la carrera judicial a partir del cargo de secretario; 2º, el escalafón del personal de la justicia; y 3º, la colegialización de las profesiones auxiliares. Todo ello es perentoriamente indispensable para el afianzamiento de la justicia e integraría la reorganización de ella que impone el régimen establecido en la nueva Constitución, el cual le hará asumir al Poder Judicial la plena responsabilidad de su función propia.

Vemos luego que el proyecto de ley elevado a esta Honorable Cámara por el Poder Ejecutivo ha merecido también la valiosa atención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en la memoria correspondiente al año 1949 de dicho alto tribunal se formulan observaciones de verdadero interés sobre la materia que hace a la administración y organización de la justicia. Después de aludir al artículo 94 de la Constitución Nacional, que otorga a la corte las facultades de superintendencia sobre jueces y tribunales y la unificación de fueros a los tribunales de la Capital Federal, destaca que con ésta apareció el problema de las transformaciones que, en cuanto a organización y funcionamiento de los que fueron tribunales ordinarios de la Capital, el nuevo texto constitucional impone. «Ello —dice— hace patente la necesidad de resolver con urgencia el problema de la legislación orgánica de los tribunales de la Nación. La que actualmente rige es múltiple, fragmentaria y desconexa, de lo que surgen problemas que van desde la dificultad de información referente a los textos vigentes hasta la insalvable duda sobre su alcance y susceptibilidad de generalización, prescindiendo de lo anticuado de muchas disposiciones y de las lagunas y la falta de criterio uniforme que el texto señala.»

Después de mencionar los dos criterios que caben: uno, sancionando una ley orgánica minuciosa y completa, preparada y madurada con las exigencias de tiempo y las dificultades que plantea, y otro, dictando una legislación transitoria, tendiente a adecuar los organismos existentes a las nuevas cláusulas constitucionales, introduciendo a la vez las reformas más premiosas en la organización judicial, se pronuncia por este segundo criterio adoptado en el proyecto enviado al Honorable Congreso por el Poder Ejecutivo.

El proyecto del Poder Ejecutivo elevado al Honorable Congreso contempla —aun dentro de la transitoriedad que lo caracteriza— la solución de los principales problemas que hacen a la organización y régimen de los tribunales y organismos de la justicia, con la mira puesta en la dignificación de la función judicial para imponerla al respeto y la devoción de sus conciudadanos, como base indispensable para la humana realización de la justicia. Busca para ello los procedimientos más adecuados y efectivamente eficaces, concibiéndolos con un criterio realista, en función del medio y la oportunidad de su vigencia.

Comparte el Poder Ejecutivo, en función de las soluciones propuestas, los principios que han sido enunciados para una buena y adecuada ley orgánica de la justicia, que podemos sintetizar así: a) extender la inamovilidad judicial a toda la magistratura nacional; b) establecimiento de un régimen severo de incompatibilidades; c) inclusión de la justicia de paz de los territorios nacionales en el cuadro de la magistratura; d) establecimiento de un régimen racional para el ingreso y escalafón del personal dependiente de los tribunales y atribución de su designación a las autoridades judiciales en los territorios nacionales; e) organización de la carrera judicial con la consagración de un sistema de ingreso y promociones que atienda a la capacidad, dedicación y honorabilidad; f) distribución de la competencia con arreglo a la materia, con lo que se conecta la estructuración de la jurisdicción contenciosoadministrativa sobre base judicial; g) estructuración del ministerio público, con distinción de sus actuales funciones y la mayor uniformidad posible en la constitución de los tribunales de apelación.

Resta agregar, por último, la dotación adecuada de tipo económico, en la materia de sueldos y en la de gastos.

En el mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso elevando el proyecto de Código de Procedimientos para la Capital y territorios nacionales, islas nacionales y federal en las provincias, encontramos afirmaciones cuya realización procura en esta ley orgánica a sancionar: «El juez, tercer poder del Estado —dice—, debe

constituir la figura central del proceso. Aspira el Poder Ejecutivo a que en el juez se encarne el ideal de justicia.» «Ir al juez —decía ya Aristóteles— es ir a la justicia, porque en él se encarna una especie de justicia viviente.»

Esta fuerte y clara concepción del juez es oscurecida, alambicada y desfigurada a través de los siglos, hasta concebir al juez como un ente deshumanizado, constructor de silogismos, inerte ante la voluntad, omnipotente de los litigantes y que, al decir de Montesquieu, es sólo «la boca que pronuncia las palabras de la ley». La moderna filosofía jurídica, la doctrina de Helsen y la teoría egológica del derecho de Cossio han destruido el mito del juez máquina y del silogismo judicial.

Y agrega: «Pero —aunque se ha afirmado en la doctrina conviene repetirlo— ahora más que nunca el elemento fundamental e insustituible de la buena justicia será el buen juez; el juez de vocación, de espíritu recto, laborioso, probo, responsable; el juez que ame sobre todas las cosas la justicia, que sepa prescindir de intereses y pasiones, que no sean el interés de la sociedad que representa y la pasión de la justicia.»

Considero que estos propósitos han sido logrados en el despacho producido por la comisión especial reformadora del Código de Procedimientos y de la ley orgánica de los Tribunales.

No comparto la opinión de los señores diputados de la oposición, del señor diputado Yadarola ni del señor diputado López Serrot sobre la falta de carácter revolucionario que se atribuye al despacho de la comisión. Entiendo que la revolución de la justicia se ha logrado en la letra y en el espíritu del proyecto, y lamento que situaciones de orden político incidan en la concepción y en las conclusiones a que se arriba en su análisis.

La política tomada en un sentido peyorativo puede significar una mengua para el proyecto en consideración, pero la política concebida como una ciencia del Estado es el Estado mismo en su aspecto dinámico y forzosamente debe incidir y reglar los aspectos fundamentales de toda administración.

Entiendo que con el proyecto que se discute se logrará una buena y correcta administración de la justicia, y que algunos de los elementos que se han alegado para que sean elementos constitutivos de una buena ley procesal escapan a la naturaleza de la ley orgánica para caer, como ya se ha dicho, en aspectos que requieren la sanción de una ley procesal.

Fiel a este criterio, el Poder Ejecutivo ha empezado por incluir en su proyecto, y la comisión lo ha incluido en su despacho, una serie de disposiciones que importan un verdadero estatuto del magistrado, con su sometimiento a las disposiciones constitucionales vigentes y

Sr. Bustos Fierro. — Señor presidente: al comenzar el debate de esta ley el señor diputado por Córdoba, que inició la crítica de la misma desde las bancas opositoras, trasladó el problema que estamos discutiendo desde su cauce estrictamente legalista —puesto que es—

tamos discutiendo la ley orgánica del Poder Judicial— a consideraciones de tipo general, confiriéndole a su exposición un acento de manifiesto tinte filosófico, para sostener como tesis fundamental de su exposición que el problema capital que en estos momentos tiene nuestro país, al respecto, no es un simple problema de ordenamiento legal de la justicia, sino de recuperación moral y espiritual de los hombres que la integran. Efectuó una serie de disquisiciones en torno al problema de la justicia que culminó con la cita y referencia al profesor Jorge del Vecchio, a cuya concepción adhirió especialmente manifestando que el orden jurídico se realiza en plenitud y en integridad cuando él se traduce en la defensa de la libertad. Agregó, asimismo, que no puede haber justicia sin orden jurídico y que en el mundo tenso en que vivimos están por romperse los hilos de seda del orden jurídico, según la imagen de Ferrero, que evocó. Consideraciones preliminares que él efectuaba para desembocar en la conclusión de que quien no participara de esas ideas expuestas, de ese concepto de la libertad y de la justicia que invocaba, contribuía a un planteo de crisis de la libertad y de la justicia, planteo que él encuentra actuante en nuestro medio por cuanto nuestro Parlamento ha dictado leyes que no tienen una exclusiva intención ética que es, a su juicio, lo único que justifica la ley ante la conciencia de los hombres.

Colocadas estas premisas en la exposición del señor diputado por Córdoba, en definitiva han sido repetidas por los otros expositores de la oposición, ya que por boca del señor diputado López Serrot se ha dicho que la ley en discusión no merece objeciones de importancia ni de forma ni de fondo. Los señores diputados han concluido por referirse a la hora histórica que vive nuestro país para afirmar que en ella se asiste al espectáculo de la justicia politizada, lo cual en su juicio constituye un atentado contra la esencia misma del régimen democrático.

El primer comentario que me sugiere la crítica del señor representante por Córdoba, es el de que se ha aferrado cerradamente a una determinada concepción filosófica de la libertad vinculada a una escuela también determinada, para sostener que solamente dentro de los límites de esa concepción el problema de la libertad puede ser legítimamente definido.

Yo comienzo por sostener que el vasto problema de la libertad se debate en los campos de la filosofía, de la teología, de la cosmogonía, de la psicología, de la política, de la moral, etcétera, y que resulta una perspectiva un tanto estrecha, una pretensión un tanto desmesurada, la de intentar definir acabadamente el problema de la libertad, colocándose sólo en el punto de vista del expositor de una corriente filosófica por muy respetable que ella sea.

Para que se aprecie cómo dentro del campo filosófico las concepciones en orden al problema de la libertad son a veces profundamente antagónicas, deseo hacer una rápida referencia al pensamiento de tres eminentes filósofos de la humanidad: Kant, Spinoza y Bergson. Para Kant en la *Crítica de la Razón Pura* sólo existe el acto de libertad cuando el hombre se determina mediante la esencia de su fundamento metafísico, de su «carácter inteligente», si no, no hay libertad. Para Spinoza «lo que existe por necesidad de su esencia lógica y únicamente se determina por ella», es el acto de libertad. Para Bergson, en cambio, el alma de la libertad es la indeterminación. Sólo el acto no determinado por nada, ni por lo extraño ni por lo propio, ni por las influencias ajenas ni por la propia prehistoria, ni siquiera por la *essentia* en el sentido que le dieron los escolásticos a este término, es acto de libertad.

Si en el campo de la filosofía este concepto de la libertad ofrece tan severas contradicciones, ¿qué habremos de decir al remitirnos al campo de la teología donde la disputa, por ejemplo, entre los partidarios del libre arbitrio y del «servo arbitrio» —a la manera de Martín Lutero— ha conmovido durante siglos enteros a la humanidad?

Impugno así en mi réplica toda interpretación dogmática con que se enfoque el problema de la libertad, afirmando, que resulta indiscutiblemente un tanto pretencioso el creer que se pueda admitir una definición dada, acabada, de la libertad, con un fundamento filosófico de escuela y edificar sobre ella y solamente sobre ella, una construcción de pensamiento valedera.

Hecha esta rápida referencia al mundo filosófico, a que he sido llevado por el cariz de la exposición del señor diputado aludido, yo pienso señor presidente, que cuando se habla en un Parlamento, como representante de una fuerza política o como miembro de una rama del poder de Estado, lo criterioso es situar el problema de la libertad en el plano político y no en el plano filosófico, pues el plano político es aquel donde el problema de la libertad se roza con la vinculación del hombre con el Estado, y del hombre con el resto de sus semejantes.

Sr. López Serrot. — Eso es lo que nos interesa en este momento.

Sr. Bustos Fierro. — Y digo, señor presidente, que en ese que es el único plano en el cual el problema de la libertad puede ser debatido criteriosamente dentro de un Parlamento también la idea de libertad muestra, a través de la historia y del pensamiento político teórico, las más formidables contradicciones.

Locke, el apóstol de las ideas liberales, en su famosa *Epístola de la tolerancia*, rechaza como acto libre todo aquel que sea «contrario a la razón.» De ahí pudo decir en su glosa, de

Maistre, que «donde no veo la razón, no veo libertad.» Y Stuart Mill, otro evangelista de las ideas liberales, afirma a su vez que no se puede confundir el concepto de libertad con el de libertad de la voluntad. Ni aun los expositores más insignes del liberalismo ideológico favorecer los individualismos de estos tiempos en sus permanentes intentos de mostrar una contradicción entre el poder legal y la libertad legal, que no son contradicciones sino que son correlaciones indispensables. El más alto ejemplo de que esta es una correlación indispensable lo brindó en el mundo de la historia, Sócrates, que antes de desobedecer a las leyes de su Estado prefirió beber la cicuta para morir en obediencia a las leyes, antes que vivir faltando a ellas.

Si en el campo de la teoría política liberal la idea de la libertad se muestra sujeta a estas tremendas contradicciones que nos impiden aferrarnos a un dogmatismo cualquiera para edificar sobre él la noción de la libertad que ha de ser acogida por el Estado, yo digo también que en los movimientos de la historia la idea de la libertad se muestra, asimismo, y más dramáticamente en medio de tremendas contradicciones.

Los primeros liberales del siglo XVI, partiendo de su fe en la naturaleza angélica del hombre, postularon que el ser humano no puede admitir tutela de ninguna especie, porque la espontaneidad de esa naturaleza angélica, moviéndose por sí sola, habría de promover la solidaridad, y, por consiguiente de ello, el reinado de la justicia. Y sobre esta concepción de los líricos liberales del siglo XVI la realidad histórica trajo el arraigo del absolutismo monárquico, el fastigio del Estado despótico brindó los *lit du roi*, brindó, señor presidente, las Bastillas de todos los pueblos.

Esta concepción de la libertad, así pergeñada por los liberales del siglo XVI, condujo sin embargo a la más aberrante de las tiranías. El símbolo de la libertad para la Revolución Francesa fué la guillotina; un símbolo de la libertad para la Revolución de Mayo es la ejecución de Liniers en el monte de los Papagayos. Los griegos hablaban de libertad y de democracia; el coro de Esquilo clamaba que no tenían amo, y en el suelo inmortal de Platea se celebraban los juegos de la libertad mientras por las calles de Atenas pululaban los sicofantes y los coribantes, mientras Aristóteles justificaba la esclavitud, mientras se condenaba al ostracismo a los hombres eminentes, mientras los ilotas recibían de los éforos espartanos cada año la declaración de guerra de sus propios compatriotas.

Ya ve, señor presidente, qué difícil y qué arrogante pretensión es ésta de querer monopolizar el concepto de la libertad, no ya filosóficamente, sino en el puro plano de la política

y en el aleccionador plano de la actuante idea de la libertad en el cauce histórico.

Nosotros, señor presidente, los hombres del movimiento peronista, tenemos una concepción de la libertad. La hemos sostenido doctrinariamente, la hemos realizado políticamente y hemos logrado, señor presidente, que el pueblo la acogiera como un motivo nacional en la Carta Magna. No tenemos la arrogante pretensión de decir que ésta nuestra idea de la libertad sea la definitiva, ni de que se haya dado con el tope de la idea de libertad, de la que decía Angel Ossorio, a quien el señor diputado por Córdoba doctor Martínez Luque mencionó hace un momento, que era una de las ideas indefinibles por más que por ella los hombres vivan y mueran. Pero tenemos una idea de la libertad con sentido filosófico, con sentido político, con sentido económico, con sentido ético, con sentido telúrico, incluso; tenemos una idea de la libertad que la deseamos ver compartida por todos los argentinos, y creemos que es obligación que esa concepción sea compartida por todos los funcionarios del Estado, por todos los miembros de los poderes del Estado.

Nuestra concepción de la libertad arranca, señor presidente, de la concepción misma del hombre, sintetizada en este pensamiento de Perón en su discurso de Mendoza: «El hombre tiene una misión creadora. Vivir y ser es crear, es producir grandes obras. Existir, conservarse, es andar entre las cosas que ya están hechas por otros.» Este sentido humanista, este sentido de fe en la personalidad del hombre, es el primer rasgo distintivo de nuestra concepción de la libertad.

Por eso ha podido también decir en el discurso citado el señor presidente de la República: «La libertad expropiable por la fuerza antes de saberse el hombre poseedor de un alma libre e inmortal, no será nunca susceptible de completa extinción. Los tiranos podrán reducirla o apagarla momentáneamente, pero nunca más se podrá prescindir de ella. Será en el hombre una conciencia de la relación profunda de su espíritu con lo sobrehumano.»

Pero al par que nuestra idea de la libertad arraiga y arranca del hombre y de la personalidad humana, que lo hace centro de su concepción humanística, nuestra idea de la libertad se ensambla en lo social, respecto de lo cual dice el presidente de la República: «Lo que nuestra filosofía entiende restablecer al emplear el término "armonía" es el sentido de plenitud de la existencia; al principio hegeliano de la realización del yo en nosotros, apuntamos la necesidad de que ese "nosotros" se realice y perfeccione por el "yo".»

El sentido de la reversibilidad y de la relación imprescindible del hombre con el medio en que

actúa lo lleva a decir al presidente de la República: «La idea platónica de que el hombre y la colectividad se hallan en una integración recíproca irresistible, se nos antoja fundamental.»

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, ingeniero Natalio Trebino.

Por esta idea de la integración brota el concepto de la justicia social, parte integrante de nuestro concepto de la libertad; concepto de la justicia social que en su sesgo económico lo define el general Perón al sostener que la libertad ha de comenzar en lo económico, dándose al hombre la posibilidad de su existencia y su desarrollo digno.

En este orden de cosas afirma el pensamiento del señor presidente de la República —quería citar palabras textuales, de las que había tomado nota— que la idea substancial que guía el problema de la libertad económica es el problema de la integración dentro de la justicia social, es el problema según el cual no es posible interpretar la libertad para que el poderoso económicamente la tenga en todos sus aspectos y el desposeído económicamente la tenga solamente para morir de hambre. Concepto que integra con aquella afirmación rotunda de que «no es posible que en nombre de una libertad unilateral se anulen vidas, vocaciones y espíritus».

Un sentido telúrico, incluso, señor presidente, anima nuestra concepción de la libertad. Perón lo ha expresado en palabras magníficas y claras como siempre al sostener que tenemos la fe de América. «Es en América donde los hombres se impregnan de la libertad y donde más eficazmente se siente la independencia; ella es la que nos ha enseñado a comprender su valor, no ya como una mera enunciación formulada por las explicaciones de los hombres, sino como una característica instintiva que comparten los que nacen o se afincan en su suelo.»

«Creemos firmemente que la libertad de América está íntimamente ligada con la nuestra, y, en consecuencia, pueden tener la seguridad los pueblos libres del mundo de que la Argentina, llegado el caso, habrá de repetir sin vacilaciones las epopeyas del pasado.»

Concepto de la libertad, que arranca de la personalidad humana y de los altos atributos que a ella le pertenecen y que han sido rescatados por la acción perseverante y eficaz del conductor de nuestra revolución en el país; concepto de la libertad, ensamblado en la libertad de la gran fraternidad americana, según las palabras que he mencionado; concepto de la libertad que afirma que ella no puede ser una palabra vacía ni una fórmula vacía, sino que ha de ensamblarse en la relación reversible recí-

proca que integra el hombre y la sociedad; concepto de la libertad, señor presidente, que contiene aspectos metafísicos, aspectos políticos, aspectos económicos, que integran esto que yo llamaría la organización del poder espiritual de la libertad para la creación de una sociedad que garantice a cada ser humano las posibilidades de una vida digna de trabajo y de creación.

Este es el concepto de la libertad que el peronismo sostuvo gallardamente cuando nació como movimiento nacional para plantearlo, no como tema de mayorías o de minorías, como lo dijera nuestro conductor en este recinto.

Recordemos que Perón, plebiscitado por su pueblo —y utilizo la expresión que era querida a Yrigoyen—, llegó a este recinto para pedir el concurso de toda la opinión nacional y para decir generosamente en esa oportunidad de su triunfo abrumador, que en el momento de nuestro resurgir no hemos planteado un tema de mayorías ni de minorías, sino que hemos planteado un tema de redención nacional. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Esta concepción de la libertad es la que nuestra fuerza política, moviéndose generosamente y adherida por la inmensa mayoría del pueblo argentino, ha insertado en la Constitución Nacional. De esta concepción de la libertad participarán —porque es un deber constitucional— todos los funcionarios del Estado y todos los miembros de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por eso cuando en el transcurso del debate se mencionó circunstancialmente el artículo 99 del proyecto que se refiere a actividades políticas de los jueces de la Nación, yo no he aceptado la rápida y liviana afirmación de que el juez ha de estar al margen, de espaldas al proceso político que vive el país. Cuando en particular se trate este artículo, he de dar los fundamentos que me llevan a esta convicción y para replicar los argumentos dados por la oposición.

Nosotros sostenemos esta brillante concepción de la libertad plena de matices filosóficos, sociales, políticos, económicos, éticos e incluso telúrico, que corona la concepción de la libertad de la patria, la soberanía del ser nacional, del pabellón argentino, su símbolo augusto, que ha sido también una de las más sustanciales causas de nuestro movimiento revolucionario.

Este concepto de la libertad lo habremos de aplicar todos los hombres que vivimos bajo el amparo de la Constitución Nacional, que hemos jurado respetar; todos los hombres, cualquiera sea la posición en que nos encontremos divididos por criterios partidistas o por funciones de trabajo. Porque ella ya es un motivo nacional; ésta ya es una concepción de la libertad que responde al ser de la República y la recoge su Carta Magna.

Con estas palabras dejo expresado el criterio de nuestro bloque en lo que atañe al problema de la libertad, que por las razones que he dado deberá ser sustentado y declarado en toda oportunidad por los integrantes del Poder Judicial de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Trebinio). — Se va a votar en general el despacho de la Comisión Especial Redactora de los Códigos de Procedimientos en lo Civil, Comercial y Criminal y de Organización de los Tribunales, sobre organización de la justicia nacional.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Trebinio). — En consideración en primer término el artículo 19.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Decker. — Este artículo se refiere a los distintos tribunales que constituyen la justicia en el orden nacional. En primer término se menciona a la Corte Suprema de Justicia, y al mencionarla se han hecho referencias al juicio político que contra algunos de sus miembros tuve el honor de presentar oportunamente en esta Honorable Cámara.

Se ha hablado de la institución, por lo que quiero señalar la dualidad de criterio existente al respecto. ¿Cómo es posible que se pueda defender la institución y amparar, al mismo tiempo, a los funcionarios que en la misma ejercitan sus facultades? Esta lamentable confusión es necesario que de una vez por todas quede aclarada.

Sr. Mercader. — Nosotros defendemos al Parlamento, sin perjuicio de los malos diputados que en él puedan actuar.

Sr. Decker. — Sin embargo, el señor diputado por Buenos Aires, en lugar de hacer esas manifestaciones, debió comenzar por hacer su autodefensa.

Sr. Dellepiane. — Obsérvese que está hablando un diputado precipuo.

Sr. Decker. — No es posible pasar por alto semejantes manifestaciones.

Las instituciones podrán ser objeto de valoración técnicojurídica, pero no pueden ser objeto de valoración moral.

En esa valoración moral de los hombres que están al frente de las instituciones se basó mi pedido de juicio político a la Corte Suprema. El pedido estaba dirigido contra esos hombres que no habían sabido cumplir con su obligación ni con la alta investidura que representaban.

¿Cómo no vamos a apoyar este proyecto de ley que en cuanto a la inamovilidad de los jueces no hace sino ratificar las inteligentes y bien estudiadas cláusulas de la Constitución de 1949?

Recuerdo el fracaso de la institución del juicio político para los jueces y los camaristas. El haber dejado el juicio político para la Suprema Corte es el hecho categórico que demuestra el sentido de responsabilidad con que legisló la Constituyente.

Tengo sobre mi banca una serie de antecedentes que demuestran cómo funcionó la institución del juicio político. Se aplicó por primera vez en el caso del juez Palma, en 1867, quien se desempeñaba como juez de sección en la provincia de Mendoza. El juicio no prosperó. El segundo caso se refirió a un juez al cual se le formulaban siete cargos concretos, pero la Cámara de Diputados se negó a integrar la comisión acusadora por lo cual el Senado entendió que ello importaba un desistimiento y sobreseyó al imputado.

Sr. Monjardin. — Señor presidente: ¿de qué artículo está hablando el señor diputado por la Capital?

— Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Trebinio). — Varios señores diputados observan que el señor diputado por la Capital no se está refiriendo al artículo 19.

Sr. Uranga. — Siempre es un regalo para el oído escuchar al señor diputado.

Sr. Decker. — Comprendo que resulta molesto a los señores diputados de la minoría la refutación que estoy haciendo. Ellos son muy quisquillosos del sentido de la democracia cuando ésta se les debe aplicar a ellos y no cuando se debe aplicar a otro sector de la Honorable Cámara.

Posteriormente se produjeron siete u ocho casos que demostraron la inoperancia del juicio político. Muchos jueces habían incurrido en delitos de carácter penal y sin embargo ningún juicio prosperó contra ellos. Y esos malos funcionarios continuaron administrando justicia, a pesar de que todo el pueblo sabía cuáles eran los defectos tremendos de dichos magistrados, en cuyas manos estaba su honor.

Con respecto a los cargos realizados contra la justicia de la revolución, contra los dignos magistrados que están interpretando sabía y honradamente los preceptos legales, quiero manifestar que ellos son infundados.

— Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Trebinio). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital, a quien le ruego que no acepte interrupciones.

Sr. Decker. — Esos magistrados humildes y sencillos a quienes reverencio por la forma honrada y el sentido ético con que cumplen las disposiciones legales y la interpretación de

la Constitución. Esos magistrados que son el anverso de aquel reverso tremendo de una justicia de casta que conocimos al servicio de los intereses foráneos y de la antipatria. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*) De esa justicia, señor presidente, que fué sumisa para los intereses que estaban en contra de los humildes y de los necesitados de nuestra patria; de esa justicia que esperaba jueces que provenían de familias privilegiadas, a quienes ya se les guardaba la vacante desde que eran estudiantes...

Sr. Uranga. — Como Gache Pirán.

Sr. Decker. — ...mientras otros humildes, con iguales derechos y capacidad que aquellos que ocupaban esos puestos de privilegio, no tenían ninguna esperanza de llegar.

En cambio, hoy se han abierto las puertas...

Sr. Mercader. — A cualquiera que adule al presidente.

Sr. Decker. — Si el señor diputado quiere hacerme una interrupción, se la concedo amablemente.

Sr. Mercader. — Con mucho gusto.

A propósito de la defensa que el señor diputado por la Capital...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Mercader. — A propósito de la defensa que el señor diputado por la Capital...

Sr. Seeber. — No se oye.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Mercader. — Decía que a propósito de la defensa que ensayó el señor diputado por la Capital...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Mercader. — ...y recuerdo un episodio del debate de hace un instante, al que el señor diputado Benítez le puso un carácter...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Mercader. — ...al que el señor diputado Benítez le puso un carácter testimonial...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Mercader. — (*Pronuncia palabras testadas por la Presidencia.*)

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Hector J. Cámpora.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ruego a los señores diputados se sirvan ocupar sus bancas.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por Buenos Aires: la Presidencia testará la demasia de lenguaje en que ha incurrido y sobre la cual debe explicaciones a la Honorable Cámara.

Sr. Mercader. — Comprendo, sin ningún esfuerzo; que debo a la Cámara el más terminante de los pedidos de excusa. Por lo que este episodio parlamentario ha constituido, pido excusas a la Cámara, sin perjuicio de hacerme responsable personalmente de todas las consecuencias del hecho en sí.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Decker. — Ese es precisamente el sentido que tienen los hombres de esta justicia. No se puede prohibir que los señores integrantes de la Corte Suprema de Justicia piensen y sientan, como todos los integrantes del movimiento de la revolución nacional peronista, pues la Constitución democrática que nos rige ha querido dar ese sentido.

Si esta Constitución —como la del 53— dispone que los ministros de la Corte Suprema sean propuestos en ternas al Senado de la Nación por el Poder Ejecutivo, es porque quiere que los que desempeñan tan altas magistraturas sean hombres que interpreten el sentir y el pensar de quien, en libérrimos comicios, eligió el pueblo para que presida los destinos de la Nación.

¿Quién ignora que, en tanto todas las demás magistraturas de la Nación son electivas y transcurren en tiempo finito, las de la Corte Suprema de la Nación son permanentes? ¿Qué tremendo sería que todas las conquistas sociales que se realizan en períodos determinados por la voluntad soberana del pueblo, se viesen trinchadas por magistrados que, permaneciendo en las altas magistraturas, esperan en el transcurso de ciertos períodos el momento propicio para aniquilar una legislación que está al servicio del pueblo que la quiso! Tal es el profundo sentido de la Constitución de 1949 al haber dispuesto, en una cláusula transitoria, que todos los jueces quedaran en comisión.

Por eso la reverenciamos y damos nuestro voto, convencidos de que cumplimos con los altos designios que nos ha encomendado el pueblo, de modo indiscutible en urnas inobjectables. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Cuando el señor diputado Colom hacía su exposición sobre el proyecto de ley que estamos considerando, pretendiendo rectificar al diputado que habla hizo referencia...

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia, señor diputado, le ha concedido la palabra para referirse al artículo 1º. Si el señor diputado aprovecha la circunstancia para un asunto personal, la Presidencia no va a consentirlo, porque es antirreglamentario.

Con el respeto que le merece, la Presidencia ruega al señor diputado que atienda su observación.

Sr. Yadarola. — Creo, señor presidente, que por mucha que sea la estrictez con que se aplique el reglamento, no se puede negar a un diputado, cuando ha sido aludido malintencionadamente, pretendiéndose echar sombras sobre una actuación, que aclare la verdad de los hechos.

Sr. Presidente (Cámpora). — Pero no es ésta la oportunidad, señor diputado.

Sr. Yadarola. — Quiero entonces dejar constancia de que ante la estrictez con que el señor presidente me aplica el reglamento no puedo rectificar ahora las afirmaciones falsas que ha hecho el señor diputado; lo haré en otra ocasión.

Sr. Colom. — Está equivocado el señor diputado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 1º.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a pasar lista, señores diputados.

—Se pasa lista.

—Diputados presentes: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Argaña, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Benítez, Beretta, Bernárdez, Bidegain, Bonino, Bustos Fierro, Buterfield, Cané, Carreras, Casas Noblega, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Delepiane, de Prisco, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Erro, Estrada, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Frondizi, Garaguso, Garay, García, Guardo, Haramboure, Ibarguren, Illia, Lagragna, Lareo, Lavia, Leloir, Lema, Letamendi, López Serrot, Lucini, Machargo, Mariategui, Marini, Martínez Luque, Mercader, Miel Asquía, Monjardin, Montes (A.), Montes (J. M.), Montes de Oca, Montiel, Novellino, Osinalde, Palacio, Pasquali, Pastor, Pereyra, Pérez Martín, Pirani, Reynés, Ricagno, Rodrí-

guez, Rojas, Rossi, Rouggier, Rudi, Rumbo, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Trebino, Uranga, Urutiaga Bilbao, Vanasco, Visca, Vischi, Vitolo, Yadarola y Zamudio.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 1º.

—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 2º.

Sr. Miel Asquía. — Hago indicación, señor presidente, de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora). — Como hay asentimiento, se hará como indica el señor diputado por la Capital.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital

Sr. López Serrot. — No voy a proponer ninguna modificación a este artículo, pero deseo dejar perfectamente fijada mi posición al respecto.

Hay en el artículo 2º un error técnico, pues en él se establece que los jueces «recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuída de manera alguna mientras permanezcan en sus funciones». Este párrafo es una transcripción textual de lo que dispone el artículo 91 de la Constitución vigente, y constituye, repito, un error técnico en materia de legislación reproducir o repetir lo que ya está establecido en forma definitiva en la Constitución Nacional.

Dice luego: «La compensación será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, cualquiera fuera el lugar donde desempeñen sus funciones.» Aplaudimos calurosa y entusiastamente esta parte del artículo. Los señores diputados recordarán precisamente que este principio estaba sentado en iniciativas emanadas de este grupo parlamentario a partir del año 1946, que propiciaron la equiparación de sueldos en todas las jurisdicciones y fueros de la justicia, conquista alcanzada hasta ahora en forma parcial y que se concretará, totalmente, por esta ley después de bregar durante un par de años.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si no se formulan observaciones al artículo 2º se dará por aprobado.

—Se da por aprobado el artículo 2º.

—Sin observación se da por aprobado el artículo 3º.

Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 49.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Deseo solicitar a la comisión acepte dos agregados que perfeccionan el artículo 49.

Empieza el artículo diciendo: «Para ser juez de la Corte Suprema...»; debe agregársele «de Justicia». Hay que utilizar la denominación exacta.

En cuanto a la parte final, creo que debemos terminar, en lo que de nosotros dependa, con un error de redacción que figura incluso en las constituciones de 1853 y de 1949. Habla el artículo en consideración entre los requisitos para ser juez el ser argentino, abogado, etcétera, con treinta años de edad. Me parece que debiera decir con treinta años «como mínimo».

Sobre este aspecto del artículo, en cuanto a los requisitos para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, me permito formular una pregunta que entiendo será aclaratoria porque no alcanzo a comprender el porqué de los distinguos en cuanto a la antigüedad en el ejercicio profesional que se exige, ya sea para ser designado miembro de la Corte, integrante de una cámara o juez nacional. En el artículo 49 se exigen 10 años de antigüedad para ser miembro de la Corte; en el artículo 2º, seis años para ser camarista, y en el artículo 6º se exige para ser juez solamente cuatro.

Entiendo que estamos en presencia de una corruptela. Se ha seguido en esto una práctica en que se han venido exigiendo más años de antigüedad en el ejercicio profesional de acuerdo con la función que se desempeña, pero en realidad sin que ninguna razón sólida justifique este distingo.

Por otra parte, como sobre estos aspectos también me hago eco de interesantes preocupaciones sobre esta materia, deseo manifestar, por razones de probidad intelectual, que en algunas partes de mi exposición, al hacer uso de la palabra en general, me he referido a determinados aspectos de esta ley, teniendo en cuenta un magnífico proyecto de organización de la justicia que conocerán seguramente los señores diputados, que obra sobre mi banca, y que fué preparado en el seminario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en la época en que dirigían esa casa de estudio dos eminentes ex diputados que han honrado estas bancas que ocuparon en nombre de la Unión Cívica Radical: los doctores José Peco y Eduardo F. Giuffra. También gran parte de esos trabajos se deben a la robusta mentalidad del doctor Eduardo Augusto García en materia jurídica.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿La comisión acepta los agregados que propone el señor diputado por la Capital?

Sr. Benítez. — La comisión acepta el primer agregado enunciado por el señor diputado por la Capital para que se diga «Corte Suprema de Justicia», no así el otro agregado de las palabras «como mínimo», pues está contemplado en la propia Constitución Nacional.

Sr. López Serrot. — Retiro el último agregado propuesto ya que no ha sido aceptado por la comisión.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 49 con el agregado aceptado por la comisión: incluir las palabras «de Justicia» después de Corte Suprema.

—Resulta afirmativa de 80 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 59.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — He solicitado recién de la comisión que aclare el porqué de estos distinguos que se relacionan con la antigüedad en el ejercicio profesional.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — La explicación es muy sencilla, señor presidente. Se entiende que para ser miembro de la Corte Suprema se requiere una mayor experiencia que para ser miembro de una Cámara o para ser juez de primera instancia.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si no se formulan otras observaciones al artículo 59, se dará por aprobado.

—Se da por aprobado el artículo 59.

—Sin observación se da por aprobado el artículo 6º.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 79.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Voy a pedir reconsideración del artículo 6º en cuanto establece la exigencia de ser abogado graduado en universidad nacional. Entiendo que puede haber argentinos que se hayan graduado en universidades extranjeras y que revaliden su título en alguna universidad nacional, los cuales podrían perfectamente ser jueces.

Sr. Bustos Fierro. — Al revalidar ya tiene grado de universidad nacional.

Sr. Mercader. — ¿Y en los casos de tratados internacionales como el de Montevideo?

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Señor presidente: hemos aprobado una ley del servicio exterior que prevé el caso de que hijos de funcionarios argentinos

en el servicio exterior, puedan graduarse en universidades extranjeras. El caso, pues, de un graduado en la Universidad de París, por ejemplo, por la ley del servicio exterior, sin necesidad de revalidar su título puede ejercer su profesión de abogado, y no creo que necesite revalidar su título para ejercer un cargo en la justicia.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia advierte al señor diputado por Entre Ríos que para seguir discutiendo respecto del artículo 6º, que ya se dió por aprobado, debe concretar la moción de reconsideración.

Sr. Uranga. — Solicito la reconsideración del artículo por las razones que he formulado y por los argumentos que ha expresado el señor diputado por Corrientes, que abonan mi pedido.

Un argentino, por el tratado de Montevideo, puede graduarse en la universidad de dicha ciudad, por ejemplo, y actuar como abogado en la Argentina sin necesidad de revalidar su título, pero no podría ser nunca juez argentino de acuerdo con la disposición del artículo cuya reconsideración solicito.

Sr. Guardo. — La reválida importa concederle el título en la universidad nacional.

Sr. Uranga. — No se trata de reválida, sino de la aplicación del tratado de Montevideo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de reconsideración del artículo 6º formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

— Resulta negativa de 47 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 7º.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 8º.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — Se advierte en este artículo alguna imprecisión y un omisión. La primera parte establece que es incompatible la magistratura judicial con toda actividad de proselitismo político, con el ejercicio del comercio y la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge y los hijos y con el desempeño de empleos...

Hay aquí dos aspectos que señalar. Cuando se establece la incompatibilidad de la magistratura judicial con toda actividad de proselitismo político no se dice todo lo que es necesario, por lo que propondré el agregado de algunas palabras que salven la omisión.

La palabra proselitismo según el diccionario de la Academia significa el acto de ganar prosélitos o partidarios para una facción, parcialidad o doctrina. En este sentido me parece lógico que a un juez se lo inhabilite para el ejercicio del proselitismo político. Pero hay actos que implican una definición política, una militancia política y que al ser realizados por un juez importan coacción, intimidación, que afectan al prestigio de su investidura y de la justicia que debe administrar.

Hay en este artículo, además, un error de expresión cuando dice que la magistratura judicial es incompatible con el ejercicio del comercio y la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de intereses personales, etcétera. Para que quede aclarado este concepto propongo que se diga después de actividad profesional: «salvo cuando ésta (la actividad profesional) se ejerza en defensa de los intereses personales»; pues de lo contrario en la forma amplia en que aparece redactado el artículo, podría también entenderse que se refiere al ejercicio del comercio.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿Acepta la comisión la proposición del señor diputado por Buenos Aires?

Sr. Bustos Fierro. — Voy a referirme, con motivo de este artículo, en primer lugar al alcance de la locución empleada en él. La actividad de «proselitismo» ha sido establecida por el diccionario de la Academia, y la comisión no ha hecho sino recoger ese sentido que en idioma castellano tiene la palabra proselitismo, que es precisamente la única actividad vedada.

En lo que atañe a la segunda observación, que se refiere a la utilización del pronombre «ésta», creo que la comisión puede aceptar, ya que aclara aún más el pensamiento del artículo.

Pero quiero poner especial interés en aclarar que la primera parte del artículo 9º se refiere, precisamente, a la incompatibilidad, porque entiendo que este esclarecimiento es fundamental a los fines de la interpretación de la ley, y de las leyes que concordantemente a éste existen en el país. Así, el artículo 14 de la ley 13.644, que se refiere al enjuiciamiento de los magistrados, dice que constituye desorden de conducta, y por tanto causal de remoción, el ejercicio de toda actividad vedada a los jueces por las leyes de la Nación. Entiendo que se hace necesario por ello especificar en este debate el alcance de la interpretación que le da la comisión redactora al haber utilizado la locución que registra el texto.

La comisión redactora entiende que con la locución empleada se deja debidamente esclarecido cuál es el alcance de la actividad legítima y cuál el alcance de la actividad vedada, de conformidad a los preceptos legales que acabo de mencionar, y se remite para ello a las normas

constitucionales existentes, a la cultura cívica actual del país, y, en tercer lugar, a lo que nosotros sostenemos, que es el espíritu mismo del régimen republicano de gobierno.

En cuanto atañe a las disposiciones constitucionales, hago notar que ellas se refieren al Poder Judicial en los artículos 89 a 96, en los cuales se establece la naturaleza, las funciones y las atribuciones de los miembros del Poder Judicial. Ni en el texto actual de la Constitución, ni en su antecedente, la de 1853, ni en ninguno de los textos constitucionales anteriores, encontramos algo que se refiera concretamente al ejercicio de derechos políticos por parte de los miembros del Poder Judicial. Me he tomado la tarea de revisar los debates de la Convención Constituyente del 53 y no he encontrado conceptos de ninguna especie sobre ese particular, como tampoco los he encontrado en los antecedentes referentes a los distintos documentos constitucionales patrios, que arrancan, como es sabido, del Reglamento Provisorio de 1811 y los estatutos posteriores de 1815 y 1817, y siguen en las constituciones de 1819 y de 1826, etcétera, que cuando se refieren al Poder Judicial consagran principios más o menos similares a los que recogió después la Constitución del 53. En ninguno de ellos, ni en los debates en que han sido fundamentados, hay ninguna clase de alusión respecto a cuál es la actividad legítima y cuál es la vedada a los jueces en el orden político.

La conclusión más lógica, frente a esta situación, sería, entonces, la siguiente: frente al silencio de la ley los miembros del Poder Judicial pueden ejercitar los derechos políticos que consagra el texto de la ley constitucional con la misma amplitud que todo otro ciudadano.

Los derechos políticos —está de más decirlo— están dispersos en una serie de disposiciones de nuestra Carta Magna, pero especialmente están contenidos en los conceptos de los artículos 19, 59, 69, 89, 14, 15, 26, 28, 30, 35 y 36.

De otra parte la Constitución Nacional, en el artículo 30, ha recogido un principio jurídico universal, que dice que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Por la aplicación de este principio universal, que alcanza la categoría de norma constitucional en el artículo 30, por el silencio del resto del texto constitucional, como de sus antecedentes, respecto de las actividades políticas legítimas, o de las actividades políticas vedadas para el Poder Judicial, la lógica afirmación es la de que los miembros del Poder Judicial están colocados en absoluta situación de paridad jurídica constitucional, a los efectos del ejercicio de los derechos políticos, con cualquier otro ciudadano o habitante de la Nación, salvo las incompatibilidades expresas que fije la ley.

Sr. Monjardin. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Bustos Fierro. — Sí, señor diputado.

Sr. Monjardin. — Entendí que el señor diputado se iba a referir nada más que a la modificación que señalé y supuse que se trataría de una breve interrupción, porque yo iba a continuar.

Sr. Bustos Fierro. — Creí que había concluido su exposición el señor diputado.

Sr. Monjardin. — Si el señor diputado lo consiente, termino con mi exposición, y entonces quedará en libertad para explayarse.

Iba a terminar con lo que dije al principio, es decir, a completar el concepto de proselitismo político, que ningún juez debe realizar.

Repito que un juez puede realizar actos que, sin implicar propósitos proselitistas, impliquen, no obstante, una definición personal de militancia política, una coacción moral o una intimidación para el litigante o para el hombre que está sometido a su decisión judicial.

Hace algunos días tuve oportunidad de señalar acá, incidentalmente, el caso de un señor juez letrado, al que entrevisté en su despacho y que me recibió, en horas de audiencia, ostentando en su solapa una escarapela de un partido político. Dije en esa oportunidad que no creo que un juez pueda, ni deba, sobre todo, ser ajeno en conciencia al fenómeno político de su país, porque si alguien está obligado, por su cultura y por su función, a tener aguda y fina sensibilidad para todos los aspectos políticos, ése es el hombre de la cultura jurídica que supone el ejercicio de la magistratura.

Es necesario que así sea. Es más, es necesario —está previsto en este artículo— que en lo posible esa sensibilidad para el fenómeno político la refleje en la docencia universitaria. Me señalaba hace un momento el señor diputado Frondizi que por lo general los mejores profesores de derecho han sido aquellos que simultáneamente eran jueces. De manera que no está en mi ánimo, ni puede estarlo, creo, en el de ninguno de los señores diputados, la pretensión de que un juez viva indiferente a la contienda política en lo que ella tiene de esencial, pero sí importa a la serenidad que todos deseamos advertir en el juez respecto al problema que tiene que resolver, el que sea personalmente ajeno a la contienda, que no sea un militante activo.

¿Cuál es la situación de un hombre acusado por un delito político en el que ha incurrido en el ejercicio de su propia militancia personal política y se encuentra ante un magistrado que ha de juzgarle y que está ostentando la militancia de un partido político contrario? Señalo el caso de un acusado por desacato a un funcionario público, a un jefe de policía, a un ministro o al presidente de la República, que ha incurrido en ese delito al pronunciar un discurs-

so político o al publicar un escrito en un diario. Esa persona que milita en un partido político, que ha puesto en su palabra o en su escrito la pasión que todos los hombres solemos poner en estas cosas, ha usado un término que lo ha llevado, involuntariamente, desde luego, a la comisión de ese delito. Ese acusado será juzgado por un juez que ostenta la militancia política de un partido al que pertenece el funcionario que ha sido atacado y que ha promovido el proceso.

Hay evidentemente un acto intimidatorio que disminuye la función del juez, que afecta la dignidad de la magistratura y de la justicia.

Para salvar en cuanto sea humanamente posible esta situación, propongo un agregado: que a los jueces de la Nación les está prohibido toda actividad de proselitismo político, así como participar en actos, o realizarlos, de cualquier naturaleza, que impliquen, directa o indirectamente, una definición política personal.

Está muy bien la parte del artículo 99, que prohíbe a los jueces practicar juegos de azar o concurrir a lugares destinados a ellos. Un presidente de la Corte Suprema, el doctor Bermejo, se jactaba de no haber entrado nunca en una sala de juego, porque entendía que eso disminuía su condición de juez.

Sr. Visca. — Recuerde el señor diputado que hay un decreto que permite a los funcionarios afiliarse a cualquier partido político.

Sr. Illia. — Eso dice el decreto.

Sr. Monjardin. — Pero no es aplicable a los jueces.

Lo importante es que los jueces no intimiden con su militancia política. El proselitismo político es una cosa y la militancia es tan importante como el proselitismo. El juez debe tener su conciencia en materia política y esa definición la ha de reservar para el momento de votar. Insisto, pues, en el agregado que propuse, porque se asegurarán así la integridad y la dignidad de los magistrados judiciales. Por otra parte, éste parece haber sido el pensamiento del Poder Ejecutivo, según el texto por él proyectado.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿Acepta la comisión el agregado que propone el señor diputado por Buenos Aires?

Sr. Benítez. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — En mi exposición anterior me referí a los antecedentes que tuvo en cuenta la comisión redactora para emplear la locución que figura en el texto que estamos discutiendo y que fija concretamente los alcances de esta incompatibilidad del juez.

Yo celebro los conceptos del señor diputado que acaba de expresar su convicción de que los jueces no pueden ni deben estar ajenos al proceso político que vive una nación democrática,

en el cual ellos son representantes de uno de sus poderes. Celebro esos conceptos porque no es muy frecuente encontrarlos en hombres que militan en las filas opositoras a nuestro partido. Pero discrepo con el juicio del señor diputado en cuanto él cree necesario señalar, por vía de corrección, una definición que avanzaría sobre lo que ya es legítima actividad política de los magistrados. Para justificar la modificación que propone, el señor diputado se coloca en la hipótesis del abuso. Es indudable que por vía casuística podemos imaginar una serie de supuestos en los que el magistrado intimide al litigante que actúa delante de su tribunal, no sólo por pertenecer a partidos políticos distintos, sino también por formar parte de organismos sociales, culturales, religiosos o deportivos diferentes, en lo que, también hipotéticamente, podría haber motivos que induzcan a la animosidad o a la parcialidad de los jueces.

Sr. Monjardin. — Le ruego que no exagere. Me he referido a la situación de militancia política.

Sr. Bustos Fierro. — Creo haber aclarado suficientemente el pensamiento de la comisión. Nos oponemos a toda modificación del texto, porque el artículo precisa con claridad lo que resulta actividad legítima y lo que es actividad vedada.

Sr. Presidente (Cámpora). — La comisión no acepta el agregado propuesto.

Sr. Bagnasco. — Hago moción de orden de cierre del debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta afirmativa de 58 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 99.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — El artículo 10 contempla las posibilidades de que los jueces no residan en la ciudad en que ejercen sus funciones, y trae dos hipótesis: en la primera se fija un radio hasta de 60 kilómetros del lugar donde desempeñan sus tareas, y en la segunda se dice que para que el juez pueda vivir a mayor distancia deberá obtener la autorización previa de la Corte Suprema.

Alguien puede pensar que esta disposición que fija un radio hasta de 60 kilómetros pudo haberse tomado previendo el caso de jueces que

ejercen sus funciones en la Capital Federal y residen en localidades del llamado Gran Buenos Aires, es decir, San Isidro, Vicente López, San Martín, etcétera. Sin embargo, creo que es al revés y que no por casualidad se ha puesto ese radio de 60 kilómetros. Se ha establecido para los funcionarios o magistrados que ejercen sus funciones en la ciudad de La Plata y que viven en la Capital Federal. Yo creo que esto debe terminar. No es posible que magistrados, profesores universitarios y secundarios, funcionarios administrativos que desempeñan tareas en la ciudad de La Plata, residan en la Capital Federal y que estén sometidos siempre, en el desempeño de sus empleos o magistraturas, a la urgencia de la partida del tren o del ómnibus. Alguien ha dicho que la ciudad de La Plata tiene una universidad y una administración con abono de tren.

Es preciso que los funcionarios, y en el caso concreto los magistrados judiciales, residan en el lugar donde ejercen sus funciones, especialmente los jueces, que si bien es cierto que tienen horas fijadas para la atención del despacho y para las audiencias, no es menos cierto que deben estar cerca del juzgado para atender la aplicación de otras medidas de urgencia, como ser la habilitación de horas, la adopción de medidas de prueba urgentes, la atención de la necesidad de resguardar la libertad y los derechos individuales consagrados en la Constitución, como en el supuesto caso de que un pariente o amigo de una persona restringida en su libertad u otros derechos plantee el correspondiente recurso. Si estos funcionarios residen a 60 kilómetros de distancia siempre habrá dificultades, demoras y conflictos en la resolución de sus peticiones.

Estimo que tampoco no debemos considerar el otro caso extremo de que residan especialmente en la ciudad o ejido donde se encuentra radicado el juzgado, pero sí una distancia menor. Sin necesidad de ser suspicaces, es preciso convenir que esta disposición ha sido redactada para comodidad de ciertos funcionarios que quieren vivir y divertirse en Buenos Aires para ir a ejercer sus funciones en La Plata.

Sr. Bustos Fierro. — Advierto al señor diputado que estamos discutiendo la ley orgánica de los tribunales de la Nación, y no la de los de la provincia de Buenos Aires, cuyas autoridades precisarán este concepto.

Sr. Uranga. — Como en la ciudad de La Plata existe una cámara federal de apelación y un juzgado federal —un famoso juzgado federal—, el señor diputado por Córdoba debe comprender que debemos cuidar la administración de justicia rápida con funcionarios radicados cerca del asiento del juzgado.

El diputado por la Capital doctor Frondizi me informa que el proyecto del Poder Ejecutivo fijaba un radio no mayor de cuarenta kilóme-

tros. No me explico por qué razón se ha ampliado a sesenta kilómetros la facilidad para que los magistrados huyan de la ciudad donde los espera la atención de los trámites que interesan al público que concurre a someterse a su jurisdicción.

Estimo que mi pedido es muy razonable, ya que persigue la finalidad de disminuir la distancia mencionada en este artículo, teniendo especialmente en cuenta el caso de la capital de la gran provincia de Buenos Aires, que merece que todos los funcionarios provinciales y nacionales residan en esa hermosa y culta ciudad, ubicada casualmente a uno o dos kilómetros menos de los sesenta fijados en esta disposición.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿Qué distancia propone que se fije el señor diputado por Entre Ríos?

Sr. Uranga. — La misma distancia que aconseja el Poder Ejecutivo, es decir, 40 kilómetros.

Sr. Presidente (Cámpora). — Para referirse a la modificación que propone el señor diputado por Entre Ríos, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Como representante de la provincia de Buenos Aires pensaba formular una observación al respecto, aunque no con el sentido de la expresada por el señor diputado por Entre Ríos. Propongo que sea la Corte quien autorice en cada caso las distancias a que pueden residir los funcionarios y magistrados.

Es evidente que el concepto del Gran Buenos Aires ha definido la norma de establecer la distancia de sesenta kilómetros dentro de la cual pueden residir los jueces. Pero como hombre de la provincia de Buenos Aires considero que no puede admitirse que la capital de la misma esté incluida en el concepto genérico del Gran Buenos Aires.

Sr. Uranga. — Es lo que yo he dicho.

Sr. Visca. — En mi provincia es tradición que los funcionarios de toda categoría que actúen en la ciudad de La Plata vivan dentro de los límites o dentro del ejido de la misma que se ha dado en llamar «alrededores» de la ciudad. Por eso estimo que sería adecuado que la Corte sea quien autorice, dentro de los lineamientos de la ley, las distancias en que los funcionarios puedan fijar su residencia con respecto al asiento del juzgado donde deban ejercer sus funciones. Además, estimo que para hacerlo deberán obtener el permiso correspondiente de la Corte Suprema.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Rojas. — Coincido con el señor diputado por Buenos Aires, y estimo que no debe establecerse el derecho de residir fuera del lugar donde deban ejercer sus funciones los magistrados a que se refiere este proyecto de ley. Considero que debe ser la Corte quien, por ex-

cepción, conceda las autorizaciones correspondientes.

Como esta ley establece que para residir a mayor distancia de los sesenta kilómetros indicados en el artículo que estamos discutiendo se deberá recabar autorización de la Corte Suprema, parecería ser suficiente el trámite puramente mecánico de la solicitud del respectivo permiso. Parecería que con llenar la formalidad de solicitar la autorización, el requisito legal está cumplido. Por eso estimo que debiera expresarse que «deberán recabar autorización de la Corte Suprema por motivos fundados», como pueden ser los de familia, los derivados de enfermedades temporarias, los producidos con motivo de las dificultades existentes para la obtención de vivienda, etcétera.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿Acepta la comisión la modificación que proponen el señor diputado por Buenos Aires y el señor diputado por Santiago del Estero?

Sr. Benítez. — La comisión acepta solamente la substitución de las palabras «sesenta kilómetros» por «cuarenta kilómetros».

Sr. Visca. — Dejo constancia de mi opinión en contra, porque entiendo que, al establecerse que la Corte dará la autorización, quedan en este concepto involucrados tanto los sesenta kilómetros como los ochenta o los cien kilómetros; pero soy respetuoso de la decisión de la comisión.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 10 del despacho, con la modificación propuesta por el señor diputado por Entre Ríos y aceptada por la comisión, que consiste en establecer que la distancia sea de cuarenta kilómetros en lugar de sesenta.

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 11.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Ruego a la Honorable Cámara que me escuche, porque solicito una modificación de fundamental importancia en la hora justicialista en que vivimos.

Al referirse este artículo a las calidades requeridas para ser secretario de juzgado, establece el requisito de ser argentino, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional.

Hasta el día de hoy, señores diputados, los escribanos universitarios son y pueden ser secretarios de juzgados. Las leyes orgánicas en vigencia siempre han exigido el requisito de

ser abogado o escribano, con la sola excepción de los secretarios de la justicia de paz letrada.

La reforma que propicio consiste en agregar, después de la palabra «abogado», la frase «o escribano».

Voy a permitirme exponer brevemente los fundamentos de este pedido, y aclaro que no lo hago por mi calidad de escribano sino porque considero que esa omisión constituye una injusticia para cerca de 14.000 escribanos a quienes por esta ley se subestima en su capacidad.

Desde 1910, por imperio de la ley 7.048, la profesión de escribano es universitaria. Las universidades argentinas tienen planes de estudio extensos para la carrera del notariado. En las universidades de Córdoba, Santa Fe, La Plata, Tucumán y Buenos Aires, los programas de estudio son extensos y abarcan la totalidad de las materias codificadas; ya pasó la época de los escribanos hechos a dedo en los superiores tribunales de justicia. Ahora vivimos la época de los escribanos universitarios.

Por otra parte, el secretario judicial es un funcionario investido por la ley de las facultades necesarias para ser fedatario. Prueba concluyente de ello es que, dentro de la ley procesal y de la técnica jurídica, las certificaciones y testimonios de actuaciones judiciales son suscritos por el secretario judicial, que actúa en su carácter de notario especialmente designado para ello.

El secretario es el técnico en derecho que ha de realizar la función notarial dentro del expediente y no un personaje entendido en derecho que actúa por esa razón con mayor o menor información jurídica. Quitar al escribano su función notarial dentro de la administración de justicia es dejar traducir que con el devenir del tiempo también podríamos considerar indispensable la calidad de abogado para ser escribano de registro.

Es un grave error creer que la mayor información jurídica, que las escuelas de derecho de nuestras universidades presuntivamente han dado a los abogados, les otorga mayor capacitación para el ejercicio del notariado, y digo esto sin pretender ofender a los abogados, sino porque quiero con justicia y compenetrado de la situación, dejar plenamente sentado que el derecho notarial es de caracteres propios que exige ser notario o especializarse en esa rama para poder desempeñar el ministerio que ejerce quien es investido por el Estado del carácter de depositario de la fe pública. Quien no sepa sentir el halago de esta honrosa distinción, no sabrá comprender por qué la función notarial debe ser ejercida por notarios.

No discuto que los abogados pueden ejercer con éxito ese ministerio, pero sí discuto que se pretenda desconocer capacidad técnica a nuestros escribanos para desempeñar en la escuela de un juicio su función específica de dar fe

y refrendar los instrumentos públicos. No se olvide que el secretario certifica en cuanto a lugar por derecho que en la secretaría del autorizante existen tales autos y que en fe de ellos expide el testimonio respectivo. Esta es una función notarial.

No necesito abundar en mayores y enjundiosos argumentos para demostrar que el secretario judicial es un notariado en funciones; que no interesa que ese notario sea escribano o abogado, pero sí que se ampare a este último únicamente y en forma exclusiva para el desempeño de esa función.

No sé la suerte que ha de correr la modificación que propongo, pero reclamo contra la injusticia que significará eliminar a los escribanos de la función de secretario judicial.

Bien saben los señores diputados que millares de escribanos sin registro, no podrán esperar el desempeño de esta función específica en la justicia si no prospera la modificación que propongo. Por eso solicito a los colegas de mi sector y a los de la minoría que me apoyen en este justo pedido.

Si la intención del Poder Ejecutivo es designar para dicha función exclusivamente a los abogados, serán ellos designados, pero no hay por qué cerrar la posibilidad de que los escribanos puedan ser secretarios judiciales. El hecho de agregar las palabras «o escribano» no modifica el espíritu de la ley.

Si sancionamos la ley tal como lo propone la comisión, cometeremos una irreparable injusticia, y no admitimos injusticias en esta época de justicialismo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — El señor diputado por la Capital pretende que la solución de la comisión no es justicialista. Yo me permito, en primer término, decirle que esta solución la ha dado el señor presidente de la Nación cuando envió el mensaje, y para nosotros el juicio del señor presidente de la Nación es siempre justicialista.

Sr. Colom. — ¿En qué oportunidad dió la solución, señor diputado?

Sr. Benítez. — Cuando mandó el mensaje con el proyecto de ley.

Sr. Colom. — Pero no puede el señor diputado sostener que la opinión del Poder Ejecutivo es irreductible, cuando la comisión ha modificado substancialmente el primitivo proyecto.

Sr. Dellepiane. — ¿Cuál de los dos es el más justicialista?

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Benítez. — En segundo término, me permito significar que la tarea del secretario no es exclusivamente una tarea notarial. Es más delicada y con otros alcances que los de la mera tarea notarial.

En tercer término, si existe la posibilidad de dar estas funciones a hombres con mayor preparación técnica, es acertado recurrir a ellos para cubrir los cargos de secretario y prosecretario.

En cuarto lugar, exigiendo que los secretarios sean abogados, se los estimula para seguir la carrera judicial.

Por los motivos expuestos, la comisión no acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Yo voy a apoyar la indicación del señor diputado Colom desde un punto de vista estrictamente personal, porque ignora la opinión de mis colegas de sector, especialmente de los abogados.

Sr. López Serrot. — Yo también adhiero.

Sr. Uranga. — En los tribunales nacionales y en los provinciales, hasta el presente se han desempeñado los escribanos en los cargos de secretarios de juzgados y de las cámaras de apelaciones en forma que creo no ha sido en modo alguno deficiente.

Sr. López Serrot. — Al contrario: eficiente y honrosamente.

Sr. Uranga. — Entiendo que los escribanos están dotados de la capacidad doctrinaria y científica necesaria para el desempeño prolijo y satisfactorio de esas funciones.

Quiero advertir que el Poder Ejecutivo, en el decreto ley que creó la justicia del trabajo, justicia nueva, creciente, que presenta problemas realmente novedosos y singulares, la regulación de los reclamos, de los juicios acelerados que se tramitan en esos tribunales, en los que ha sido preciso improvisar una jurisprudencia que, en muchos casos, es interesante, y que necesita versación jurídica especializada, establece que los escribanos pueden ser fiscales.

Sr. López Serrot. — Habría que agregar que los escribanos no sólo pueden ser secretarios y fiscales en la justicia del trabajo, sino que por la ley 11.924 los procuradores pueden ser secretarios de los juzgados de paz letrada.

Sr. Uranga. — Esto en cuanto a la aptitud técnica para el desempeño del cargo: por la jerarquía y la seriedad de los estudios de los escribanos argentinos que han debido cursar estudios en el colegio nacional y luego en facultades.

El argumento del señor diputado Benítez, de que esta disposición permite a jóvenes abogados iniciarse en esta carrera empezando, diríamos, por el primer escalón, que sería el cargo de secretario de juzgado, no es fundamental. Lo ideal es que los secretarios adquieran una gran experiencia, desde que todo el mundo sabe que los secretarios son los que realizan todos los trámites de rutina. Es de desear que esos funcionarios estén mucho tiempo en el desempeño de esas tareas.

En cuanto a los abogados, pueden iniciar su carrera judicial como asesores de menores, defensores de menores, fiscales, etcétera, y, también, naturalmente, como secretarios.

Como dijo acertadamente el señor diputado por la Capital, hay numerosos escribanos en nuestra ciudad que no pueden ejercer su profesión porque es limitado el número de registros que se concede. Tienen que orientarse hacia funciones comerciales o administrativas, que no son las que tuvieron en vista al ingresar a la facultad para obtener el título de escribanos.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Es evidente que el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital de las palabras «o escribano» viene a ratificar la segunda parte del artículo 77, cuando dice: «Las disposiciones del artículo 12, en cuanto al título habilitante, no se aplicarán para cubrir las vacantes existentes o las que se produzcan dentro de los tres años de entrar en vigor esta ley, pudiendo proveerse las mismas con quienes, poseyendo título de escribano nacional o de procurador universitario, pertenezcan a la administración de justicia y siempre que en las respectivas leyes de organización vigentes a la fecha de la sanción de esta ley, tales títulos habilitaran para ocupar los cargos vacantes.»

Nuestro sector interpreta el sentido de la proposición del señor diputado, y personalmente la comparto con amplitud. Pero como la conducción del debate de esta ley está a cargo de la comisión respectiva, al no aceptar el agregado no hacemos más que cumplir con lo que nos impone nuestra disciplina.

Tal vez en el Senado se incorpore la modificación que ha propuesto el señor diputado, que está dentro del concepto de la ley, tanto más que en algunas provincias y en lugares apartados de la República tal vez sea indispensable recurrir a los profesionales que ha mencionado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Quiero referirme a una situación de hecho.

Al discutirse el artículo 49 el señor diputado López Serrot propuso que se agregara las palabras «de justicia». La comisión aceptó esa modificación, por lo que ahora no me explico por qué no ha de aceptarse la que yo propongo. El agregado no modifica el espíritu de la disposición proyectada por el Poder Ejecutivo, pues se mantiene la calidad de abogado y se le agrega la calidad de escribano. Como es la Corte Suprema la que ha de hacer las designaciones, si entiende que esos cargos deben ser desempeñados por abogados, lo hará.

Este proyecto originario del Poder Ejecutivo ha sufrido por parte de la comisión sensibles modificaciones, por lo que no me explico la acti-

tud impermeable del señor diputado presidente de la comisión.

Pido, pues, que se vote el artículo hasta la palabra «abogado», y posteriormente, el agregado propuesto.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se votará primeramente el artículo 12 tal cual figura en el despacho. Después se votará el agregado de las palabras «o escribano».

Se va a votar el artículo 12 del despacho.

—Resulta afirmativa de 72 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se votarán ahora las palabras «o escribano», después de «abogado».

—Resulta afirmativa de 49 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Visca. — Pido que la votación sea rectificatoria nominalmente.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a rectificar nominalmente la votación.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (González). — Sobre un quórum de 95 señores diputados votan por la negativa 74 señores diputados y por la afirmativa 21.

—Votan por la negativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Argaña, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Benítez, Beretta, Bernárdez, Bidgain, Bonino, Bustos Fierro, Butterfield, Cané, Carreras, Casas Noblega, Conte Grand, Cooke, Cursack, Degreef, de la Torre, de Prisco, Díaz (C. A.), Erro, Estrada, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, Haramboure, Ibaguren, Lagragna, Lareo, Lavia, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Machargo, Mariategui, Marini, Martínez Luque, Miel Asquía, Montes (A.), Montes de Oca, Montiel, Novellino, Osinalde, Pasquali, Pereyra, Ricagno, Roche, Rodríguez (N. M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Trebino, Urriaga Bilbao, Villafañe, Visca y Zamudio.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Colom, Dellepiane, Díaz (M. M.), García, Illia, López Serrot, Mercader, Monjardin, Montes (J. M.), Palacio, Pastor, Pérez Martín, Pirani, Rabanal, Reynés, Rojas, Rudi, Uranga, Vanasco, Vischi y Vitolo.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 13.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 14.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 15.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 16.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 17.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 18.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 19.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 20.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 21.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 22.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 23.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 24.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — Advierto que en este artículo se incurre, a mi juicio, en una impropiedad. Aunque pueda parecer prurito del buen decir, entiendo que la palabra «vecinos» que figura en el inciso 1º debe ser substituída por la palabra «habitantes».

Sr. Conte Grand. — Es el término usado por la Constitución.

Sr. Monjardin. — La palabra vecino tiene sentido restringido a pueblo, barrio, localidad, y la palabra habitante tiene sentido más amplio: comprende la provincia o la Nación.

He sostenido en otras oportunidades que es importante que las cosas que se quieran decir

en la ley se expresen exactamente con las palabras que las definen. Tengo aquí el diccionario de la Academia, que es el que tenemos que respetar. Dice que «vecino es el que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en habitación independiente». En cambio, «habitante es cada una de las personas que constituyen la población de un barrio, ciudad, provincia o Nación». Por otra parte, hay el viejo distinguo de la época española entre habitante y vecino, que tenía entonces razón de ser —no era vecino todo habitante—, pero ahora no.

Propongo entonces esa substitución.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia entiende que el artículo usa un término estrictamente constitucional.

Sr. Conte Grand. — Exactamente, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si no se formula otra observación, se dará por aprobado el artículo 24, con reserva de la palabra «vecinos».

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la substitución de la palabra «vecinos» por «habitantes», propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

—Resultado, negativa de 47 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 25.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 26.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 27.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 28.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 29.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 30.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 31.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 32.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 33.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 34.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 35.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 36.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 37.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 38.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 39.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 40.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 41.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 42.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 43.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 44.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 45.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 46.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 47.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 48.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 49.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 50.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 51.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 52.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 53.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Beretta. — Deseo proponer modificaciones a los artículos 53 y 54 y espero que la comisión tomará en cuenta la proposición que formulo, pues será de influencia benéfica para el territorio de Misiones.

Por el artículo 53 la Cámara de Apelaciones de Paraná está constituida en tribunal de alzada para los asuntos que se tramiten ante los juzgados del territorio de Misiones.

Como hombre vinculado a los territorios, me he dado cuenta de la enorme influencia que ejerce el juzgado, y más que éste la Cámara de Apelaciones, en los territorios por simple acción de presencia, y en este sentido si subordináramos los juzgados de Misiones en cuanto a su competencia a la Cámara de Apelaciones de Paraná no habría suficiente conexión para el buen juzgamiento de las cuestiones que se susciten en ese lejano territorio. Considero que los jueces deben estar cerca del lugar, sino en el mismo lugar donde deben administrar justicia. Con este criterio puedo asegurar a los señores diputados que aunque reconozco que la Cámara de Apelaciones de Paraná está integrada por magistrados probos y capaces, se hallan éstos un tanto desconectados de los hechos que se producen en Misiones, que, como ocurre con los otros territorios, tiene problemas que le son muy particulares, como los de los yerbatales, y cuestiones fronterizas con Paraguay y Brasil.

Para obviar todos estos inconvenientes propongo que se excluya al territorio de Misiones de la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Paraná y que, en cambio, pase a depender de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, con la que existen medios más fáciles de comunicación y que por tratarse de una cámara de otros territorios nacionales está en mejores condiciones para entender en sus causas y ejercer su función de superintendencia.

Es posible que la Cámara de Paraná con esto disminuya sensiblemente su trabajo y que re-

carguemos a la de Resistencia, pero habremos contribuido a resolver la situación de los habitantes de Misiones que tendrán más cerca la Cámara de Apelaciones y podrá con ello realizarse un más estrecho contralor de los jueces de primera instancia, de la justicia de paz y de la misma función policial, cuya actividad es vital para la vida de los territorios.

En concreto, propongo suprimir del inciso c) del artículo 53, el territorio de Misiones; y pasarlo al inciso a) del artículo 54, quedando en esta forma Misiones supeditado a la Cámara de Apelaciones de Resistencia como tribunal de alzada, junto con los territorios de Chaco y Formosa.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Vanasco. — Por las mismas razones que acaba de expresar el señor diputado Beretta, me voy a oponer a la modificación que proyecta, pues tengo entendido que el ideal de la justicia es que los tribunales de alzada estén cerca de los tribunales inferiores, a fin de facilitar y abaratar la justicia.

En segundo término, los tribunales de alzada constituyen una verdadera garantía en cuanto a la distribución del trabajo, y no conviene recargar a unas cámaras en beneficio de otras. Con la modificación proyectada se crearía una Cámara de Apelaciones monstruosa en Resistencia y, en cambio, la de Paraná tendría muy pocos asuntos.

No olvide el señor diputado por la Capital que los juzgados de primera instancia que hay en los territorios atienden todos los fueros. En cambio, los juzgados federales como los de Corrientes, Paraná y Paso de los Libres no atienden más que una jurisdicción, por lo cual la Cámara de Apelaciones de Paraná no tendría sino muy pocos asuntos. Tanto es así que, por ejemplo, el juzgado de Corrientes no ha llegado a enviar ni cincuenta asuntos por año.

Sr. Beretta. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Vanasco. — Con mucho gusto.

Sr. Beretta. — La razón fundamental que enuncia el señor diputado Vanasco consiste en que sin Misiones la cámara de Paraná tendría muy pocas causas y, en consecuencia, por esta ley se le adjudica las causas originarias de los juzgados de Misiones. Este es un principio malo, porque so pretexto de atribuir mayor trabajo, so pretexto de justificar la ubicación de una Cámara, no debe sacrificarse, si se quiere, los intereses bien entendidos de la población de todo un territorio nacional.

Sr. Vanasco. — Permítame, señor diputado: no me ha dejado terminar.

A la argumentación del señor diputado de que había que facilitar al litigante la posibilidad de mandar sus asuntos a la Cámara Federal de Resistencia, respondo que el señor diputado parece

desconocer que es más difícil mandar los expedientes a Resistencia que a Paraná. Es mucho más largo el trámite de los expedientes para ir a Resistencia que a Paraná. Le digo esto con conocimiento de causa.

Sr. Beretta. — Le puedo asegurar al señor diputado, que fué gobernador del territorio de Misiones, que salen de Posadas dos, tres y hasta cuatro ómnibus diarios para Resistencia, existiendo muy buenos caminos. Le pediría me dijera cuál es el medio para ir a Paraná.

Sr. Vanasco. — El señor diputado ha sido abogado en Resistencia y sabe que al litigante que tiene que mandar sus asuntos a segunda instancia, lo que le interesa es el hecho de sacarlos de su jurisdicción: no le interesa mandarlo a una distancia menor o mayor; lo que le interesa es que tiene que buscar nuevos abogados para que atiendan sus asuntos en segunda instancia. Le es completamente indiferente que esto sea en Resistencia o en Paraná.

Sr. Beretta. — No se trata de ver la cuestión desde el punto de vista del interés del profesional como abogado. Estoy hablando de la influencia que ejercen las cámaras por el ejercicio del control; por la superintendencia sobre los jueces de primera instancia. Y lo que por su acción de presencia o cercanía gana la buena administración de justicia en el territorio.

Sr. Vanasco. — Creo que es una injusticia que establece esta ley —por las mismas razones que ha aportado el señor diputado, de abaratar la justicia y de la benéfica influencia que ejerce la Cámara por la acción de presencia— el que los asuntos de primera instancia de Corrientes tengan que ir a Paraná y no a Resistencia.

El señor diputado sabe perfectamente bien que el foro de Corrientes es casi el mismo de Resistencia. Si algún cambio habría que hacerle a este proyecto de ley es, precisamente, el de establecer que el juzgado de Corrientes pase los asuntos a Resistencia, pero no el juzgado de Misiones.

Creo que eso es lo más correcto y lo más justo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Voy a apoyar el despacho de la comisión en la forma como ha sido presentado a la consideración de la Cámara.

Anteriormente, la Cámara de Apelaciones de Paraná tenía una vasta jurisdicción, que comprendía los juzgados federales de Corrientes y Entre Ríos, y los juzgados letrados de Posadas, Formosa, Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia. Era tal el cúmulo de trabajo en esa cámara de apelaciones, que con muy buen criterio, y como resultado de gestiones existentes en los colegios de abogados del Chaco y Formosa, se resolvió la creación de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, iniciativa que nos-

otros expresamente apoyamos en esta Cámara por dos motivos: para crear un tribunal de alzada especializado en los problemas de esos territorios, y para aligerar la extraordinaria concentración de trabajo que tenía la Cámara de Apelaciones de Paraná.

Como muy bien lo ha dicho el señor diputado Vanasco, la Cámara de Apelaciones de Paraná debe hoy considerar en segunda instancia exclusivamente los asuntos federales que tramitan en el juzgado federal de la ciudad de Paraná, en el juzgado de Paso de los Libres, en el de Concepción del Uruguay, en el de la ciudad de Corrientes y los que vienen del juzgado letrado de Posadas, que tiene una jurisdicción completa: federal, ordinaria en lo criminal, en lo civil, en lo correccional, en lo fiscal, etcétera.

Sr. Vanasco. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Uranga. — Sí, señor diputado.

Sr. Vanasco. — Quería preguntar al señor diputado Beretta si conoce la estadística de los asuntos que van de los juzgados del Chaco a la Cámara de Apelaciones.

El Chaco tiene actualmente tres juzgados, y con el que va a crearse serán cuatro los juzgados federales. Hay dos juzgados en la gobernación de Formosa, cuyos asuntos también van a la Cámara de Apelaciones, y otro proyectado. Serán, pues, siete juzgados federales, de los cuales el que tiene menos tiene 4.000 expedientes, que envían sus asuntos a apelación, además de los de regulación de honorarios de los que tratan los juzgados de paz.

Es casi imposible que la cámara realice la tarea que significa atender todos los expedientes de esos siete juzgados. Y a eso se le va a agregar, todavía, los dos juzgados letrados de Misiones, con lo que llegarían a nueve los juzgados letrados que atienden todos los asuntos y de todos los fueros.

Sr. Beretta. — ¿Me permite el señor diputado por Entre Ríos?

Sr. Uranga. — Sí, señor diputado.

Sr. Beretta. — No he podido obtener, señor presidente, los datos estadísticos, a pesar de que los he recabado, con respecto al movimiento judicial. Pero no los desconozco.

Lo que hay, en realidad, es una cámara, la de Paraná, que tendría muy pocos asuntos, tan pocos que casi no se justificaría su ubicación. Esa es la verdad. Pero para mantener esa cámara en Paraná o para no recargar de trabajo a la cámara de Resistencia tenemos que sacrificar, hasta cierto punto, a la población de todo el territorio de Misiones, creándosele a este territorio la misma situación que antes de crearse la cámara de Resistencia tenían los territorios del Chaco y Formosa.

Los habitantes del territorio de Misiones están completamente desconectados de la cámara de Paraná. Le puedo asegurar al señor diputado Vanasco, que ha sido gobernador del territorio de Misiones, que los señores miem-

bro del tribunal de la cámara de Paraná nunca han ido a ver cómo se vive en los yerbales de Misiones, ni han ido tampoco a las barbacocas y a otros establecimientos a conocer los problemas propios de la vida de las fronteras.

No puede una cámara, cuyos magistrados están desconectados del medio, ejercer la verdadera y real superintendencia sobre la administración de justicia de un territorio. Este gobierno ha hecho mucho en ese sentido. Y por esta ley debemos propender a que pueda hacer más.

Sr. Vanasco. — Los magistrados de Resistencia han ido a ver las barbacocas y los yerbales.

Sr. Beretta. — Considero que sería sumamente beneficioso para los habitantes del territorio de Misiones que la jurisdicción de éste pasara a la cámara ubicada en Resistencia.

Tal vez la comisión no acepte el temperamento que propongo; pero creo de mi deber, como hombre que conoce la vida de los territorios, exponer este criterio sobre problemas en los que siempre privan los de las provincias.

La Cámara de Apelaciones de Resistencia, desde su creación, viene ejerciendo en los territorios del Chaco y Formosa una influencia saludable en la administración de justicia, por la superintendencia que ejerce sobre los jueces de primera instancia y de paz y sobre la policía en general. Conozco cuál era la situación del territorio del Chaco cuando sus juicios debían ir a la cámara de Paraná, y no quiero esa situación para el territorio de Misiones. Los magistrados de Paraná nunca iban al territorio a investigar cómo iba la administración de justicia del mismo, ni tenían ninguna vinculación con el Chaco. Actualmente la Cámara de Apelaciones está en Resistencia; y los miembros de la cámara, no sólo ejercen fiscalización y superintendencia sobre los magistrados, sino que también están en contacto con la población, y por simple acción de presencia ejercen una influencia saludabilísima, que tal vez no tienen en cuenta los diputados que viven la vida de provincia.

Sr. Uranga. — Ha pasado una cosa curiosa, señor presidente: mi discurso lo han casi dicho los dos señores diputados que han estado dialogando.

En homenaje a la necesidad de acelerar la sanción de este proyecto, voy a decir simplemente que la moción del señor diputado Beretta sería mucho más atendible si hubiera solicitado que los juzgados federales de Corrientes dependieran de la Cámara del Norte, que funciona en Resistencia. No me parece lo mismo en lo referente al de Misiones, el que, si bien es cierto que del punto de vista geográfico está más cerca, no lo está, sin embargo, en cuanto a las comunicaciones, a pesar del servicio de los ómnibus a que se ha referido el señor diputado, en los cuales no son enviados los expedientes, ya

que se los envía por agua, y, en cambio, a Paraná van por tren.

Entiendo, señor presidente, que la distribución del trabajo ha recargado indudablemente a la Cámara de Apelaciones del Norte. Si se decide mantener la Cámara de Apelaciones de Paraná será necesario que ésta tenga un volumen de trabajo más o menos interesante. Esa Cámara de Apelaciones y la actuación de los magistrados que la integran ha merecido desde hace muchos años y hasta el presente nuestra crítica constante por las hazañas judiciales realizadas por esos señores.

Sin embargo, debo rectificar al señor diputado por la Capital, doctor Beretta, porque me consta que los vocales de la Cámara de Apelaciones de Paraná realizan las inspecciones periódicas encomendadas por la Corte Suprema, revisan el cúmulo de expedientes, el estado de los trámites, el cumplimiento de los términos y las estadísticas en cada una de las jurisdicciones.

Sr. Visca. — El señor diputado reconoce la diligencia de esa justicia.

Sr. Uranga. — Es exacto.

No es como acaba de manifestar el señor diputado Beretta, que decía que ese trabajo no se hace.

Sr. Beretta. — Recién ahora se está realizando.

Sr. Uranga. — No, señor diputado; le puedo asegurar que desde hace mucho tiempo se destacaba al presidente o a uno de los vocales de la Cámara para que se trasladaran a los juzgados letrados de los territorios o al juzgado federal de la provincia.

Sr. Beretta. — ¿Cada cuánto tiempo?

Sr. Uranga. — Permanentemente. Lo puedo asegurar porque a cada momento había que designar conjueces para integrar el tribunal, en razón de que alguno de los vocales estaba de inspección en los juzgados de los territorios del Norte o en los juzgados del interior de la provincia de Entre Ríos.

Sr. Beretta. — Yo he estado en los territorios, y puedo decir que esas inspecciones no se hacían más de una vez por año cuando se hacían.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tommasi. — Con las exposiciones de los señores diputados por Corrientes y por Entre Ríos este asunto ha quedado suficientemente abonado y poco puedo agregar; pero debo hacer presente que fué estudiado en todos sus detalles por la comisión y que no quedaba ni queda otra solución que la que se ha dado, es decir, mantener la Cámara de Apelaciones del Norte con jurisdicción sobre los territorios de Chaco y Formosa.

Las estadísticas demuestran que los juzgados de esos territorios, que atienden todos los fueros de la zona, despachan anualmente unos 15.000 expedientes. De modo que la Cámara de Ape-

laciones del Norte tiene una tarea que en estos momentos le va a ser difícil cumplir.

A la Cámara de Apelaciones de Paraná, que antes tenía jurisdicción sobre todos los territorios nacionales del Norte juntamente con las provincias de Corrientes y de Entre Ríos, se le adjudica el territorio de Misiones, porque las comunicaciones entre esta ciudad y Paraná son más fáciles que entre Resistencia y Misiones. Si existiera alguna dificultad en cuanto a posición geográfica, la solución no sería tal vez ninguna de las que se han señalado.

Como criterio personal he de decir que lo más justo sería que la Cámara de Paraná tuviera su sede en la provincia de Corrientes, colocándose así equidistante de Paraná y del territorio de Misiones. Pero no ha sido posible llegar a esa solución. Por eso es que la comisión sostuvo la tesis que ya había propiciado el Poder Ejecutivo en cuanto a la jurisdicción de ambas cámaras.

La comisión no encuentra razón valedera para aceptar la proposición del señor diputado por la Capital, doctor Beretta, y mantiene su despacho.

Sr. Conte Grand. — Que se vote.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 53.

Sr. Vanasco. — Yo hice una proposición, señor presidente, que no ha sido votada.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se votará en primer término el artículo 53 del despacho de la comisión; si fuera rechazado, se votará la proposición del señor diputado por Corrientes.

Se va a votar el artículo 53.

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 54.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 55.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 56.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 57.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 58.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 59.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Solicito que la comisión considere la posibilidad de incluir en el artículo 59, como inciso c), a los martilleros, porque entiendo que el martillero es también un auxiliar de la justicia.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — Los artículos 59 y siguientes del despacho organizan los cuerpos técnicos periciales y peritos auxiliares de la justicia nacional. Cuando los martilleros realizan un remate no desempeñan una función de peritos, no dan una opinión, no dan un juicio; realizan un acto jurídico para el cual han sido designados por los jueces.

Sr. Visca. — ¿Y los tasadores?

Sr. Benítez. — Los tasadores fijan un valor. Los martilleros harán de peritos cuando ejerzan la función de tasadores; pero el martillero que lleva a cabo un remate no asesora al juez ni hace de perito.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿Insiste el señor diputado por Buenos Aires en su indicación?

Sr. Visca. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 59.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 60.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mercader. — El capítulo que estamos tratando, que se refiere a los cuerpos técnicos periciales y peritos auxiliares de la justicia nacional, se inicia con el artículo 59 y se extiende hasta el artículo 72 del proyecto.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Juan de la Torre.

Respecto al artículo 60 tengo que hacer dos observaciones: una primera que encara el fondo de la cuestión, y otra que se refiere formalmente a su redacción.

Yo no entiendo cómo, si de acuerdo con el artículo 59 los auxiliares de la justicia van a actuar bajo la superintendencia de la Corte Suprema, puede aceptarse que su designación y la facultad de ser removidos correspondan al Poder Ejecutivo. Parece que no sería de buena lógica hacer promiscuar diferentes orígenes en los nombramientos —unos del Poder Ejecutivo, y otros de la Corte Suprema— con respecto a elementos que van a estar sujetos a la misma superintendencia. Esta incompatibilidad se configura de manera completa si nosotros la referimos al párrafo final del artículo 72, que dice: «Para todos los peritos regirá lo dispuesto en el

artículo 16 de esta ley.» El artículo 16, a su vez, establece que «la Corte Suprema acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados debidamente calificada y a su antigüedad».

No parece posible que puedan ser protegidos los miembros de los cuerpos técnicos periciales y los peritos auxiliares por las garantías del artículo 72, si van a ser nombrados por el Poder Ejecutivo nacional. Esta es la observación de fondo que hago a este artículo.

El artículo 60 se refiere a «los integrantes de los cuerpos técnicos, los peritos y sus respectivos empleados»... Esta redacción hace suponer que se contemple a los empleados de los peritos, y creo que no es ése el criterio que ha querido fijarse. Estimo que podría modificarse el artículo para que diga «los integrantes de los cuerpos técnicos, los peritos, y los empleados auxiliares de las respectivas funciones».

Dejo hecha la cuestión de fondo respecto a la posibilidad de que se concilien las garantías que fija la ley para los empleados que van a estar bajo la superintendencia de la Corte, con la situación que se les creará porque van a ser nombrados y removidos por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (de la Torre). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?

Sr. Benítez. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (de la Torre). — Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 60.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 61.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 62.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mercader. — Solicito una aclaración respecto de este artículo.

Para ser miembro de los cuerpos técnicos se requiere ser ciudadano argentino, con 25 años de edad y tres años de ejercicio en la respectiva profesión o docencia universitaria. Parecería que el artículo no exige título universitario. El ejercicio profesional no siempre supone la exigencia de título, ya que en nuestro país existe mucha gente que ha ejercido profesionalmente la medicina, en lugares donde no hay personas con títulos, mediante una autorización precaria. Si en todas partes se exige título, me parece que el artículo debería incluir la exigencia del título universitario.

Propongo que se vote como agregado, después de «veinticinco años de edad», y antes de «tres años de ejercicio en la respectiva profesión o docencia universitaria» las palabras «título universitario argentino».

Sr. Presidente (de la Torre). — El agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires podrá votarse después de la aprobación del artículo despachado por la comisión.

Si no se observa el artículo 62 del despacho de la comisión, se dará por aprobado.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a votar la proposición del señor diputado por Buenos Aires, que consiste en agregar las palabras «título universitario argentino».

—Resulta afirmativa de 42 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Bagnasco. — Solicito que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a rectificar la votación.

—Resulta negativa de 49 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 63.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 64.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 65.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 66.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 67.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 68.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 69.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Guardo. — Señor presidente: propongo que en este artículo, después de la palabra «químicos», se agregue «y odontólogos».

Es de pública notoriedad que hoy en día la odontología ha servido para realizar una serie

de peritajes. En un hecho criminal reciente, muy conocido, fué con el auxilio de la odontología que se llegó a ciertos conocimientos respecto de una persona que había sido asesinada.

La resistencia de los dientes a la calcinación y la presencia de obturaciones que tampoco se calcinan, las prótesis, y muchos elementos de la odontología, sirven hoy para realizar interesantes peritajes.

Por lo tanto, pido a la comisión se sirva aceptar el agregado de las palabras «y odontólogos».

Sr. Presidente (de la Torre). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Benítez. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (de la Torre). — Después de aprobado el artículo 69 del despacho de la comisión, se votará el agregado propuesto.

Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 69 del despacho.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a votar la proposición del señor diputado por la Capital, consistente en el agregado de las palabras «y odontólogos».

—Resulta negativa de 51 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 70.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 71.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mercader. — Me parece que hay una omisión en este artículo que determina la facultad de los magistrados judiciales para disponer de los cuerpos técnicos sin agregar que puede disponer de los peritos. En mi opinión habría que decir: «Sin perjuicio de la distribución de tareas a que se refieren los artículos 63 y 64 de esta ley» —que distribuyen las tareas de los cuerpos técnicos y de los peritos—, y agregar al final del artículo «y de los peritos».

Se completa el pensamiento de la comisión en cuanto se agrega a las facultades de los magistrados la de disponer, no sólo de los integrantes de los cuerpos técnicos, sino también de los peritos.

Sr. Presidente (de la Torre). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Benítez. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (de la Torre). — Podrá votarse el agregado una vez aprobado el artículo despachado por la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 71 del despacho.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a votar el agregado de las palabras «y 64» —después de los términos «...se refiere el artículo 63»—, y —al final del artículo— de las palabras «y de los peritos», como lo propone el señor diputado por Buenos Aires.

—Resultado negativa de 51 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (de la Torre). — En consideración el artículo 72.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Como recién lo anuncié a la Cámara, interpretando la opinión de diputados de nuestro sector voy a proponer un artículo nuevo —que llevaría el número 73— en el que se dirá que los remates judiciales serán realizados por rematadores oficiales designados por el Poder Ejecutivo, los que estarán sometidos a la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los fundamentos son obvios, y están en la inteligencia de todos los señores diputados.

Sr. Benítez. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (de la Torre). — Será puesto en consideración el nuevo artículo una vez aprobado el artículo 72 del despacho de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 72.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (de la Torre). — Está en consideración el nuevo artículo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires y que, de ser aprobado, llevará el número 73.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Al considerar en general esta ley hice referencia a los martilleros, lamentando que no se hubieran incorporado disposiciones relativas a ellos y a otros aspectos vinculados con la actividad judicial.

Hace unos momentos el señor diputado Visca propuso un agregado que no fué aceptado por la comisión, en razón de que los martilleros no invisten el carácter que se les atribuía. Ahora se propone a la Cámara una medida de extraordinaria importancia porque viene, no sólo a modificar la forma de designación que hasta hoy rige para los martilleros, sino a introducir una innovación que es —permitaseme la expresión— poco meditada.

Hoy hablamos de la separación de los poderes, de la necesidad de que el Poder Judicial se maneje con absoluta independencia frente a los otros poderes; y creo que el criterio expuesto es compartido por todos los diputados que integramos los distintos sectores. Ahora el señor diputado Visca propone un artículo que, indudablemente, dará por tierra con la independencia del Poder Judicial.

Yo no entro a ahondar en los propósitos que puede perseguir el señor diputado Visca y no me doy por enterado, como él ha supuesto con tanta rapidez, de los motivos que le asisten para proponer un artículo de tal naturaleza.

Declaro que, si muchos habríamos anhelado la incorporación de un capítulo destinado a legislar sobre la actividad desarrollada por los martilleros en el aspecto judicial, y si —en ausencia de una legislación adecuada— esperamos con ansiedad que se cumpla el propósito —anunciado por el presidente de la comisión— de que en fecha próxima habremos de considerar el estatuto de los martilleros públicos que viene reclamándose insistentemente desde hace tres años en asambleas, congresos y petitorios presentados a la Honorable Cámara, no obstante ello, he de oponerme en nombre del sector de la Unión Cívica Radical al artículo propuesto, en razón de que los argumentos dados no son suficientemente convincentes y porque la disposición proyectada altera fundamentalmente el espíritu de esta ley orgánica, dando por tierra con el propósito, compartido por todos los señores diputados, de afianzar por vía de legislación, en cuanto de nosotros depende, la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes, que este artículo hace que se destruya al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de los martilleros que deberán cumplir los propósitos de las resoluciones judiciales.

No puedo poner término a mis palabras sin llamar la atención de los señores diputados en el sentido de que esta legislación —que algún colega ha calificado con acierto como de las que pueden ser comprendidas dentro del campo de la técnica— no podemos propiciarla, para no posibilitar la suposición de que el pronunciamiento a favor de determinado artículo no tuviera otro propósito que el de dar al Poder Ejecutivo una nueva arma política, al encomendarle la designación de los martilleros en los distintos juicios que reclaman la intervención de éstos.

Sr. Presidente (de la Torre). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Creía innecesario, a esta altura del debate, hablar sobre el artículo propuesto.

Es evidente que nuestra posición debe estar muy lejos de la de los señores diputados. Se ha venido sosteniendo —por eso había propuesto el agregado en el artículo que habla de los peritos auxiliares de justicia— que el martillero es también un auxiliar de la justicia, cuya intervención es necesaria en muchos expedientes.

Quizá esté equivocado; pero pienso que nuestra posición debe ser sostenida con espíritu de franca lucha revolucionaria —en la que estamos empeñados desde la semana de octubre—, contra las fuerzas de ese conjunto de intereses internos y externos que ha pretendido y pretende dirigir la conciencia nacional, con uso

y abuso de recursos extraños al servicio de esos mismos intereses.

Nosotros queremos una justicia honrada que esté dentro —se ha dicho en distintas oportunidades y en elocuentísimas palabras del conductor de la revolución, el señor presidente de la Nación— de la recuperación económica que soñaron quienes le dieron formación espiritual y política a nuestra patria.

Hay un concepto en la publicación de avisos judiciales que es la negación de la doctrina justicialista. Deben desaparecer los últimos reductos de los baluartes de la justicia que existían antes de la revolución. A él obedece el agregado que he propuesto, como también otro que voy a propiciar oportunamente, de evidentes conceptos revolucionarios. No es posible aceptar que puede eludirse. El país debe inspirar sus leyes en la Constitución de la República, que contiene la doctrina justicialista creada por el general Perón. Ese es el concepto de este artículo. Es necesario terminar con los viejos intereses creados, en la publicación de edictos y en el otorgamiento de remates, como igualmente en todo lo relacionado con otros peritos, como los tasadores y los agrimensores. Hay que terminar con lo que era habitual: no se salía de determinadas personas, que en muchos casos actuaban en mutua conveniencia y en contra de intereses fundamentales del pleito en que actuaban. Es necesario dar a la justicia la suficiente libertad para que no haya ninguna duda entre los intereses en los pleitos.

Sr. Mercader. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Visca. — No, señor diputado. Voy a terminar.

No hay ninguna razón, según mi opinión, que modifique el criterio que vengo sustentando públicamente desde hace mucho tiempo. Son comunes las tarifas abusivas de diarios que pretenden tener el control de la opinión nacional, que no la han conformado nunca y que han estado y están inspirados en cuestiones totalmente ajenas a los intereses del país, es decir, hallándose por lo general vinculados a intereses foráneos, a los enemigos del país. Naturalmente que no es éste el momento de documentarlo. Podría hacerlo con telegramas y publicaciones de ayer no más, cuyo contenido está en contra de la orientación económica del país, porque se ha pretendido disminuir dentro y fuera de la Nación la capacidad económica de la misma, su responsabilidad sin límites para contraer compromisos en cualquier terreno, en lo que se refiere al ejercicio libre de su comercio, interfiriendo toda acción del gobierno.

Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar?, ¿para qué vamos a pretender, a esta altura de los acontecimientos, erigirnos —como lo hacen los señores diputados— en defensores de un concepto de libertad de pensamiento y

del afianzamiento de una libertad de prensa que en este caso no se discute, porque lo propuesto hace a una cuestión eminentemente comercial? No se puede hablar de tribuna de doctrina, ni de entidades civiles, ni de pensamientos rectores de la opinión pública argentina cuando el ruido de las monedas o el amontonamiento de pesos es asunto fundamental para esos órganos de publicidad, y los remates les sirven para conjugar oligarquía y prensa oligárquica.

Esa es la posición revolucionaria que entiendo e interpreto al proponer este artículo y el que someteré a la consideración de la Cámara dentro de un instante. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (de la Torre). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tilli. — Formulo moción de orden de cierre del debate.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a votar la moción del señor diputado por Buenos Aires, de que se cierre el debate.

— Resulta afirmativa de 59 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (de la Torre). — Por Secretaría se dará lectura de la redacción dada por el señor diputado por Buenos Aires al nuevo artículo que propone incorporar al despacho.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Dice así:

Los remates judiciales serán realizados por intermedio de rematadores oficiales que se sortearán de una lista confeccionada por el Poder Ejecutivo y cuyos componentes estarán sometidos a la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

Sr. Uranga. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (de la Torre). — Está cerrado el debate, señor diputado.

Sr. Uranga. — ¡Cómo va a estar cerrado el debate, si se trata de un artículo nuevo! Ha sido cerrado sobre otra cosa.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a votar el texto propuesto por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta afirmativa de 64 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Uranga. — Pido la palabra para una reconsideración.

Sr. Presidente (de la Torre). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — La jurisprudencia de la Cámara se ha visto enriquecida con un nuevo caso: se ha cerrado el debate sobre una proposición del señor diputado por Buenos Aires, y se ha votado una cosa distinta de lo propuesto. De manera que se sigue enriqueciendo la jurisprudencia del cuerpo.

Sr. Visca. — Es bueno que avancemos.

Sr. Uranga. — Voy a solicitar reconsideración de la votación que acaba de hacer la Cámara. El señor diputado por Buenos Aires ha propuesto la oficialización de la profesión de martillero y su sometimiento al ámbito oficial, lo que significa la intromisión del Poder Ejecutivo en actividades que tradicionalmente estaban reservadas a la libre disposición de los jueces, en algunos casos, y de las partes en otros. Es un paso más en la campaña para aniquilar las profesiones liberales en la República Argentina: tendrán que ser peronistas los martilleros para poder trabajar, así como deben convertirse en peronistas otros densos y nutridos sectores del país para ganarse honradamente el pan.

El señor diputado por Buenos Aires debió haber fundado alguna crítica al sistema actual de designación de martilleros y a la actuación de estos profesionales: no lo ha hecho; ha hablado de la manera como se otorgan los edictos judiciales, de la manera como orientan su campaña determinados diarios, del modo como se han publicado recientemente algunos comentarios acerca de noticias. Pero no ha dado ningún fundamento que critique el régimen actual de designación de los martilleros y que prestigie el sistema que él aconseja. Es realmente extraordinario, señor presidente, que se proponga un agregado que restrinja el libre ejercicio de una actividad o profesión honesta, y no se dé ningún argumento directamente vinculado con la proposición formulada.

En el régimen actual, cuando en un expediente hay acuerdo de partes y existe necesidad de rematar algo, el juez designa al profesional que de común acuerdo las partes eligen. ¿Qué interés social está dañado con eso? Si las partes están de acuerdo en la designación de un martillero que ejecute ese acto del remate público, sea juicio universal, sea pleito contencioso, ¿qué interés se lesiona? ¿Es necesario hablar de la revolución, del general San Martín, de la independencia económica y del 17 de octubre?

En caso de que las partes no estén de acuerdo en la designación del martillero, lo designa de oficio el juez que interviene en el asunto, eligiendo entre una lista de los martilleros inscritos en la respectiva matrícula. ¿Qué interés social está en pugna con ese procedimiento? No se ha dicho.

De ninguna manera aparece, pues, justificada la proposición del señor diputado por Buenos Aires, que, si hubiera dado razones para criticar este sistema, seguramente pudo y debió obtener el voto de la Cámara; pero observen los señores diputados que no ha dado absolutamente ninguna.

Es inexplicable que algo tan sencillo, tan aceptado generalmente, como es la designación de martilleros, haya merecido un encendido

discurso sobre temas que nada tienen que ver con la proposición del señor diputado.

Por el contrario, nosotros podríamos, a propósito del correr de la moneda y del enriquecimiento de empresas periodísticas, decir que los anuncios oficiales se dan exclusivamente a diarios adictos al gobierno; que los edictos y los anuncios de licitación se otorgan exclusivamente a esos diarios, que no tienen, por cierto, tarifas muy módicas. Tengo entendido, según se me informa en este momento, que en algunos diarios adictos a la situación imperante las tarifas son extraordinariamente onerosas.

Sr. López Serrot. — Son cuatro veces más caras.

Sr. Uranga. — Por lo tanto, a pesar de lo prolongado de esta sesión, apelo al buen sentido de los señores diputados para que se considere este artículo ya votado, en virtud de que no se han dado razones por parte de su autor para restringir la actividad honesta de una profesión que se manejaba en forma que no ha motivado críticas, por lo menos conocidas.

Por otra parte, no podemos imaginar que entre los propósitos revolucionarios esté precisamente el de que los martilleros deban depender del Poder Ejecutivo, en cuanto se refiere a su actividad, para ejercerla dentro de los trámites judiciales.

Sr. Presidente (de la Torre). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Beretta. — Me voy a oponer a la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Entre Ríos, en cuanto dice que el autor de la modificación no ha suministrado ninguna información al respecto.

Me parece que el asunto es claro. El señor diputado por Buenos Aires ha presentado una modificación en el sentido de que los remates judiciales serán efectuados por martilleros sorteados de entre una lista suministrada por el Poder Ejecutivo.

Sr. López Serrot. — Serán designaciones de oficio.

Sr. Beretta. — Observe la Honorable Cámara que no se trata de afectar la actividad de los martilleros en los remates particulares. En los remates judiciales, el Poder Ejecutivo interviene y tiene derecho a hacerlo, sin que se afecte el principio de la división de los poderes. No interviene para designar el rematador, sino que confecciona una lista de rematadores de la cual el Poder Judicial insaculará el que ha de proceder al remate. ¿Hay en esto, acaso, una invasión de poderes?

¿Tiene alguna responsabilidad la justicia en la buena realización del remate? Sí, señor presidente. Yo puedo asegurar que muchas veces se hacen juicios ejecutivos, se designa rematador de común acuerdo de las partes, y en más de una ocasión el dinero no aparece. Es necesario, entonces, que haya una responsabilidad.

Eso es lo que ha querido proponer el señor diputado por Buenos Aires, para que estén amparados los intereses de las partes: que el Poder Ejecutivo confeccione una lista de rematadores que estarán bajo la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Para que se confeccione una lista de rematadores no sólo capaces, sino también moral y materialmente responsables.

Por esas razones, considero que no debe hacerse lugar a la moción de reconsideración.

Sr. Casas Noblega. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Beretta. — ¿Cómo no!

Sr. Casas Noblega. — La situación de los martilleros en el país es bastante irregular. Justamente he presentado un proyecto sobre estatuto del martillero, vale decir, la ley nacional reglamentaria que se necesita en esta materia.

En la actualidad la actividad de los martilleros se rige, en la Capital Federal y en las provincias, por las normas que dan las respectivas matrículas donde se inscriben. Existen casos de martilleros que ejercen su profesión en una provincia y no pueden desempeñarse en otra, y otros casos muy comunes de profesionales que hacen remates en idioma extranjero.

Yo creo que el artículo propuesto por el señor diputado Visca reglamenta en parte esas situaciones, porque establece solamente una oficialización de una lista de todos los martilleros del país, que después serán designados por los jueces.

Sr. Uranga. — ¿Me permite el señor diputado Beretta?

Sr. Beretta. — Sí, señor diputado.

Sr. Uranga. — Creo que la rectificación va a ser útil, porque por esta vía se podrá aclarar lo que hasta hace un momento era bastante confuso.

Sr. Visca. — No era confuso. Ya se le aclaró al señor diputado sin haber modificado nada.

Sr. Uranga. — El señor diputado Beretta ha dicho que se refiere a los remates judiciales, y debe haber aludido a los remates ordenados por los jueces cuando no hay acuerdo de partes, cosa que no distingue el artículo presentado por el señor diputado Visca.

El señor diputado Casas Noblega, por su parte, afirma que la lista de rematadores que confeccionará el Poder Ejecutivo no se hará en base a designaciones libremente hechas por el mismo, según resulta del artículo presentado, sino que estará integrada por todos los rematadores del país.

Como se ve, el asunto no es tan claro, y por eso es justificada nuestra alarma, que nos mueve a solicitar esta rectificación.

Yo creo que podría redactarse un texto que dijera que en las designaciones de oficio los rematadores deberán ser de una lista que se

confeccionará con todos los martilleros que se inscriban y que llenen las condiciones que reglamentará, por tratarse de cuestiones judiciales, la Corte Suprema.

Una redacción de este tipo tendría algún color; pero con la manera como se ha presentado y aprobado podrán surgir estas distintas interpretaciones que han aparecido.

Sr. Presidente (de la Torre). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Beretta. — Quiero dejar perfectamente aclarado el concepto de la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

Se entiende que todos los remates judiciales serán realizados por intermedio de rematadores oficiales: los remates que se hagan por los martilleros designados de oficio por los jueces, y aun los realizados por rematadores que pongan las partes, todos los remates; por rematadores que deberán ser designados de acuerdo con la lista que confeccione el Poder Ejecutivo bajo la superintendencia de la Corte Suprema.

Sr. López Serrot. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Beretta. — Sí, señor diputado.

Sr. López Serrot. — Quiero llamar la atención sobre la importancia que reviste la modificación que estamos considerando.

Recuerde el señor diputado la cantidad de cláusulas en escrituras hipotecarias y de otro orden en que las partes convienen en el momento de su celebración que una de ellas, la acreedora, tendrá a su cargo la designación del martillero. Es una forma de garantizar la defensa de sus intereses en el momento del remate.

Sr. Beretta. — Continúo, señor presidente.

En las ejecuciones hipotecarias las partes deberán sujetarse también a la ley que sancione el Congreso...

Sr. López Serrot. — Pero atenta contra el Código Civil, que dice que es ley entre las partes lo convenido por ellas.

Sr. Beretta. — Una sanción del Congreso no atenta ni contra un código de procedimientos ni contra el Código Civil, porque el uno como el otro tienen la misma fuerza legal de estas disposiciones.

Por las consideraciones expuestas, me opongo a la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Entre Ríos, ya que la modificación propuesta y aprobada es clara y categórica.

Sr. Presidente (de la Torre). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bagnasco. — Quiero agregar algo más a lo ya expresado, porque, pese a que el asunto se ha tomado bajo todos sus aspectos, parece que no se ha insistido sobre el núcleo central que motiva y justifica esta iniciativa.

La verdad es que con esta nueva disposición que agregamos a la ley vamos a terminar con situaciones a veces un tanto vergonzosas en

las designaciones de oficio. Sabemos que en la Capital Federal hay diez rematadores que absorben casi todos los remates judiciales y cuyos anuncios hasta hace poco ocupaban páginas enteras de los grandes diarios del país, y que había también entendimiento con jueces, pues iban al tanto por ciento.

Esos rematadores no asistían a los remates que realizaban.

Sr. Uranga. — Eso es de la época de Perón.

Sr. Bagnasco. — Hablamos de épocas anteriores.

Sr. Uranga. — Y ahora ¿por qué siguen con la misma práctica?

Sr. Bagnasco. — Traigan las denuncias, que los echaremos en seguida.

Con esto practicaremos el criterio justicialista: todos los martilleros tienen derecho a que se reconozcan sus aptitudes y sus condiciones de honradez. Si el Poder Ejecutivo considera que los profesionales reúnen esos requisitos, éstos integrarán la lista, y, al ser sorteados, podrán tener a su cargo remates chicos o grandes. Ese es el sentido con que votamos el artículo.

Sr. Astorgano. — Hago moción de orden de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a votar la moción de orden, formulada por el señor diputado por la Capital, de que se cierre el debate.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (de la Torre). — Se va a votar la moción de reconsideración del artículo 73, formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

— Resulta negativa de 49 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. López Serrot. — Pido la palabra para una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (de la Torre). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Cuando se dieron por aprobados, con suma rapidez, los primeros artículos de esta ley, no fué posible formular observaciones a un artículo que me parece debe ser destacado en su importancia y gravedad. Por eso, antes de entrar a considerar el capítulo de disposiciones especiales transitorias, voy a solicitar de la Cámara se sirva reconsiderar el artículo 14.

Dice esa disposición: «La Corte Suprema de Justicia nombra, remueve y decide sobre toda cuestión vinculada al personal de la justicia de la Nación cuya designación no dependa del Poder Ejecutivo, conforme a las normas de esta ley y a las que aquélla establezca en sus reglamentos.»

Me llama poderosamente la atención que la comisión que ha producido este despacho haya

modificado tan fundamentalmente la propuesta originaria del Poder Ejecutivo. En los artículos 14 y 15 de esta última se determina que la Corte Suprema de Justicia y las cámaras nacionales de apelación nombran sus funcionarios y empleados y deciden respecto de las licencias que solicitaren, y que los funcionarios y empleados dependientes de los jueces de primera instancia serán nombrados, a propuesta de éstos, por las cámaras de apelaciones. Los jueces podrán conceder a su personal licencias, etcétera. Y el artículo 15 dice: «Los funcionarios y empleados de la justicia nacional no podrán ser removidos sino por el mismo tribunal de su nombramiento y sólo por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado.»

En la ley orgánica en vigencia, las facultades de designación de los empleados se encuentran a cargo de los jueces y cámaras, es decir, de los tribunales donde dichos empleados van a desempeñarse. El juez, el camarista, el ministro de la Corte, el fiscal, el asesor, etcétera, son los primeros responsables de la rapidez y de la honestidad con que se substancian las causas que tramiten los despachos judiciales a su cargo; de ahí que, con interesante y sano criterio que nada aconseja honestamente abandonar, la ley vigente entregase la facultad de designar sus empleados a los jueces, camaristas, etcétera.

En el mes de marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó una acordada colocando al personal de justicia del orden nacional en comisión y fijó un plazo para el estudio de los antecedentes de cada uno de los empleados a fin de considerar cuáles se mantendrían en sus funciones. Indudablemente, había adoptado la Corte Suprema un procedimiento contrario a la ley, y después de dicha acordada debió abandonar el trámite de esa especie de investigación sobre la vida privada y la actividad de los empleados de las distintas ramas de la actividad judicial.

El Poder Ejecutivo ya había enviado en agosto del año pasado, antes de la referida acordada, el proyecto que motivó el despacho que se considera. En ese proyecto se mantenía la facultad de ser designados los empleados por los jefes principales de cada uno de los despachos judiciales. Pero cuando la Corte abandonó, por imposibilidad de cumplirlo, en razón de la ley orgánica en vigencia, el propósito de eliminar a empleados meritorios de la justicia nacional, la comisión aconseja y la Cámara, sin mayor determinimiento sobre la importancia que reviste el punto, vota el artículo 14, que con justificado motivo sembrará la alarma en el meritorio contingente de empleados y funcionarios de la justicia nacional.

Me atrevo a solicitar la reconsideración del artículo 14, apelando al patriótico sentimiento de los señores diputados de todos los sectores y

poniendo como aval a favor del enorme contingente de meritorios empleados de la justicia un antecedente que con toda honestidad me veo en la necesidad de referir ante la Cámara. En mis ya largos años de actuación intensa en la vida judicial de la Capital Federal, no he tenido noticia de un solo acto de falta de probidad o de incorrección de un solo empleado de pequeña o de gran categoría de la justicia nacional.

Ese contingente de meritorios empleados, sufridos por los bajos sueldos que perciben probos, honestos y abnegados por las largas jornadas que deben afrontar para despachar la innumerable cantidad de expedientes que en los distintos despachos tramitan, desde el instante mismo en que quede firme el artículo 14 pasa a estar en peligro frente a la posibilidad asignada a la Corte Suprema cuyo lineamiento político he denunciado al hablar en general, de removerlos de sus cargos por la única condición adversa de no encontrarse enrolados en la política oficialista. Puede ocurrir, como en muchas otras reparticiones oficiales en estos instantes, que se establezca como condición sine qua non para conservar los puestos la afiliación al partido oficialista. El incumplimiento de esa condición podría colocar a esos meritorios empleados en el peligro de perder los puestos en que sirven honestamente al desenvolvimiento de la vida judicial, y que les permiten subvenir al sostenimiento de familias honorables que se han desarrollado alrededor de esos abnegados servidores de la administración pública.

Por las razones expuestas, pido que se reconsidere el artículo 14 y se rechace.

Sr. Presidente (de la Torre). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bagnasco. — Nuestro bloque se opone a la reconsideración. En la comisión se discutió ampliamente el artículo. Se emitieron todas las opiniones y después de largo y detenido análisis se adoptó la redacción aprobada.

La innovación que introduce el despacho resultará benéfica. En primer lugar, se reúnen en una sola autoridad las facultades de efectuar los nombramientos. El argumento más sólido que se hace contra esa disposición reside en que el juez —o la Cámara, en su caso— debe nombrar personal de su confianza, conocimiento y relación. Ocurre a veces que se llenan vacantes de titulares de juzgados donde todos los puestos están ocupados por personal con muchos años de servicio, al que resulta totalmente desconocido el nuevo funcionario judicial nombrado. Sin embargo, las funciones del juzgado no se resienten en lo más mínimo.

Entre los distintos integrantes del cuerpo judicial no debe existir necesariamente una íntima confianza; lo que debe existir es un sentido amplio de cumplimiento del deber, de la necesidad de llenar la función con un criterio de gran contenido moral. Si eso existe, la jus-

ticia cumplirá su fin; si eso no existe, la confianza y la intimidación entre el titular del juzgado y los empleados, en vez de servir a la justicia, servirán a sus propios intereses.

Es por eso que consideramos equivocados el concepto y el procedimiento que hasta ahora aplicaba la ley vigente.

Sr. Mercader. — El proyecto del Poder Ejecutivo establecía el mismo procedimiento.

Sr. Bagnasco. — Así es. Y nosotros después de amplia discusión, hemos considerado que debe modificarse. Con eso se contestan algunas afirmaciones del sector minoritario, cuando nos imputa una excesiva identificación con los proyectos del Poder Ejecutivo.

Sr. López Serrot. — Recibieron la contraorden.

Sr. Bagnasco. — Nosotros no recibimos orden ni contraorden.

Sr. López Serrot. — ¿Que no?

Sr. Bagnasco. — Con el criterio avieso con que el señor diputado califica nuestra actitud, podría responderle que él, a través de sus palabras, ha hecho un poco de politiquería —como acostumbra hacerlo— con los hombres que normalmente lo sirven cuando él ejerce la profesión de abogado.

Creo que si aceptamos este criterio que expongo sobre el nombramiento en la Corte debemos como consecuencia autorizar a este tribunal para remover y decidir en las cuestiones del personal, vale decir, que si aceptamos definitivamente el primer principio del nombramiento, la remoción y la decisión respecto del personal son lógicas consecuencias del mismo, para mantener la disciplina.

Creo que con estas razones queda perfectamente aclarado el concepto y el criterio de nuestro bloque para mantener su decisión, sosteniendo el artículo 14 y oponiéndose a la reconsideración solicitada.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de reconsideración del artículo 14, formulada por el señor diputado por la Capital.

—Resulta negativa de 70 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 73, ahora 74.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — El artículo que consideramos establece que el archivo general de los tribunales dependerá del Poder Ejecutivo.

A mi elemental entender, parece que el archivo es un instrumento de los tribunales. ¿Cómo

es posible, entonces, que no dependa de ellos, sino del Poder Ejecutivo?

Esta diferente jurisdicción que se establece en algo que entiendo debe depender directamente del tribunal, puede producir alguna interferencia que trabase en alguna oportunidad la acción de la justicia.

Me limito a formular la observación.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 73 del despacho, ahora 74 del proyecto de ley.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 74, ahora 75.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 75, ahora 76.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 76, ahora 77.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 77, ahora 78.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 78, ahora 79.

—Se aprueba.

Sr. Bustos Fierro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — En nombre de la comisión, voy a proponer un artículo nuevo, que llevaría el número 80, cuya redacción es la siguiente: «Los actuales oficiales primeros de paz actuarán como prosecretarios y reemplazarán al secretario en caso de recusación, licencia, ausencia u otro impedimento.»

El artículo que propone la comisión considera una situación de estricta justicia, contemplada, por otra parte, en el artículo 61 de la ley 11.924, de creación de los tribunales de justicia de paz letrada. En virtud de la disposición citada, los actuales oficiales primeros de la justicia de paz están desempeñando las funciones de prosecretarios, reemplazando a los secretarios en los casos que he mencionado, lo que a través de dieciséis años de experiencia y eficiencia forma un patrimonio moral y técnico que debe ser amparado.

Por otra parte, esta cláusula no crea problemas fiscales de ninguna especie, toda vez que por esta norma se crea la función y no el cargo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el señor diputado por Córdoba, que llevaría el número 80.

—Resulta afirmativa de 47 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 79, ahora 81.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 81, ahora 83.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 82, ahora 84.

—Se aprueba.

Sr. Visca. — Pido la palabra para proponer un nuevo artículo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Quizá tenga que excederme en el término prudencial para fundamentar este nuevo artículo, cuya redacción es la siguiente:

«Dentro del término indicado en el artículo 84, por esta vez y sin sujeción a lo establecido en el artículo 15 de esta ley, la Corte Suprema de Justicia, por vía de superintendencia, procederá a la reorganización de todo el personal de la justicia de la Nación.»

Durante este debate se ha hablado de la Corte Suprema que fué barrida —para mí ése es el concepto— por la revolución en el memorable juicio político. Se ha pretendido señalar ante la opinión pública la intromisión de la política para la selección y designación de empleados. Pero no se ha dicho —sino por parte de algunos representantes de este sector— cuál ha sido el panorama que ofrecía el ejercicio del poder público por algunos partidos que actuaban en la vida política del país.

El triunfo de la Unión Cívica Radical en el año 1916 no fué precisamente la resultante de la emisión de votos. Hubo cuestiones que hicieron que en determinado momento se dudara de que iría al gobierno el partido que había ganado la elección. Pero, llegado al poder, intervino la casi totalidad de las provincias y reorganizó todo aquello que iba en contra de la nueva sensibilidad política que gobernaba la República. A nuestro entender, esto último fué realizado con amplio derecho.

En lo que respecta al personal de la justicia, hay que reconocer que la revolución del 4 de junio y la revolución nacional del 17 de octu-

bre, con el triunfo magnífico del 24 de febrero, están en deuda con quienes le dieron el mandato para ejercer el gobierno del país.

Negar que en la justicia hay muchos empleados que no sirven a los intereses de la Nación, sería cerrar los ojos a la evidencia; negar que en la justicia ha habido resortes flojos, a pesar de habérselos querido reajustar, sería desconocer que el viejo reducto de la oligarquía está entronizado en todos los tribunales de la República por la acción de los viejos empleados en el expedienteo y en el secreto de la tramitación de juicios.

Se ha terminado con aquella Corte caduca, se ha reemplazado a los titulares de muchos juzgados, pero permanecen muchos hombres que no han sabido responder a los altos intereses de la Nación —que están por encima de las banderías políticas—, ni han sabido comprender la hora que vive el país. Es ésta la hora de la justicia social, la hora de que los hombres se definan; pero no la hora de continuar al servicio del Estado atentando contra el Estado. Porque socavar o retardar la justicia, hacer que se vayan formando gruesos y voluminosos expedientes por largos trámites, es violar la obligación que tiene el funcionario en el desempeño correcto de su cargo.

En este artículo no estarán incluidos aquellos que han cumplido con su deber, pero sí aquellos que no comprenden la nueva sensibilidad en el desempeño de la función pública, y ya el conductor de la revolución nacional ha definido magníficamente qué es la Nación, el Estado y el pueblo.

Un funcionario no puede estar sino al servicio de la Nación, sirviendo lealmente al Estado, respondiendo al gobierno, cumpliendo sus directivas y sirviendo al pueblo. Eso es lo que creemos que acusa una falla. Según tengo entendido, está todo el personal en comisión y con esta ley, en razón de la autoridad y austeridad de quienes van a ser encargados de la reorganización, tenemos la absoluta seguridad de que se va a proceder con alto espíritu de justicia.

Es evidente que no solamente en la justicia sino en otros órdenes de la administración pública la revolución va avanzando como corresponde. Los diarios de esta noche registran declaraciones precisas del excelentísimo señor presidente de la República ante un grupo de ganaderos que lo visitaron en la casa de gobierno: no se puede ser amigo y enemigo a la vez; no se puede pretender que se defiendan intereses que no se comprenden en los altos propósitos y finalidades de gran sentido argentino que tienen las directivas y las inspiraciones del gobierno.

Vale decir, que nosotros, diputados del sector peronista, somos consecuentes con una doctrina, con una posición claramente fijada y

con una actitud que ya tomamos con motivo del juicio político a la Corte Suprema y al ex juez Barraco Mármol. Es evidente que habrá quienes en nombre de pretendidos derechos, olvidando todo un pasado, contando en estos instantes con la complicidad de esos malos funcionarios, levantarán la bandera de los derechos adquiridos. Pero permítaseme decir que frente a una cuestión de orden público no hay derechos adquiridos, pues no hay nada más grande que la Nación. Eso es evidente, como también que la responsabilidad del gobierno está en el Partido Peronista, está en el conductor de su doctrina que inspira y crea este movimiento de la revolución nacional. Y como el gobierno es del pueblo y de la mayoría, la responsabilidad la asumimos nosotros. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Con estas breves palabras dejo fundado este artículo, que es para nosotros la higienización definitiva de la justicia en la República Argentina.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Yo faltaría a la verdad si dijera que me sorprende el agregado que ha propuesto el señor diputado Visca. Lo descontaba. Lo conoce, por otra parte, todo el mundo tribalístico en la Capital Federal. Se sabía que el abandono de la Corte Suprema de Justicia de su propósito de cumplir, contra la ley, con la finalidad tenida en cuenta al declarar, hace algunos meses, al personal de justicia en comisión, debería tener un final e iba a ser obtenido, precisamente, por la sanción que esta noche daría la Honorable Cámara a propuesta de algún diputado del sector oficialista.

Debo declarar ante todo que si asumo la defensa del personal de la administración de justicia alcanzado por la proposición que acaba de formular el señor diputado José Emilio Visca...

Sr. Illia. — Todo un símbolo de la revolución nacional.

Sr. Visca. — ¿Y usted qué es?

Sr. López Serrot. — ...lo hago sin que me ate vínculo de ninguna naturaleza a los empleados o funcionarios que puedan verse alcanzados por esta disposición y afirmo también que para que una cuestión o proposición revista el carácter de orden público no basta con que el autor o el proponente de la misma le atribuya tal naturaleza. Y éste es el caso que nos ocupa.

No me alcanza ninguna relación con los que puedan verse implicados en la situación que vagamente denuncia el señor diputado José Emilio Visca, ni considero que esta disposición que se va a incorporar a la ley revista el carácter de orden público.

Pero, antes de referirme concretamente a este problema, los señores diputados me permitirán que exprese mi formal y patriótica protesta, en nombre de todo el sector de la Unión Cívica

Radical, por esa imputación preñada de ligereza y absolutamente desprovista de verdad, al atribuir a la Unión Cívica Radical el hecho de haber llegado al gobierno, en el año 1916, por cualquier procedimiento menos por el de los comicios y el de las urnas.

Sr. Visca. — Entonces, el señor diputado ignora lo que pasó en el año 1916 con los convencionales de Santa Fe.

Sr. López Serrot. — Si la Unión Cívica Radical intervino provincias, cosa que es absolutamente exacta, lo hizo en defensa de la soberanía de los pueblos, pero nunca por disensiones políticas internas dentro de nuestro partido. La Unión Cívica Radical debió intervenir provincias argentinas como consecuencia de los conflictos que planteaba la oligarquía conservadora, nuestra tradicional enemiga de siempre...

Sr. Carreras. — Y aliados ahora.

Sr. López Serrot. — ...y en la que en aquel momento actuaba el señor diputado José Emilio Visca.

Sr. Visca. — Si quiere personalizar el señor diputado, lo vamos a hacer de inmediato.

Sr. Presidente (Cámpora). — El reglamento prohíbe personalizar, señor diputado.

Sr. López Serrot. — Si hay empleados que no sirven o que supone alguien que no pueden servir a los propósitos de la ley cuya consideración ya terminamos, la misma ley da los recursos para proceder a su eliminación por las causales que taxativamente se enumeran y con intervención del propio interesado. Si hay resortes flojos, como dijo el señor diputado proponente del artículo en discusión, no se han de ajustar por este medio sino que la propia ley le da el camino y el propio oficialismo lo tiene en sus manos desde que, como ya se ha dicho varias veces durante esta larga sesión, con motivo del nuevo acuerdo que debió prestar el Senado a los señores jueces integrantes del Poder Judicial de la Nación, todos, absolutamente todos los que quedaron y los que vinieron para substituir a aquellos que no merecieron el nuevo acuerdo, son de la absoluta confianza del oficialismo actual. Vale decir, que el gobierno tiene en sus manos el resorte de sus amigos puestos al frente de la Corte y de las cámaras y de los juzgados para poder ajustar los resortes que el señor diputado José Emilio Visca dice que se encuentran flojos. Los resortes no están tan flojos como él denuncia, o bien los hombres que el oficialismo coloca al frente de la administración de justicia no son lo suficientemente capaces como para ajustar tales resortes.

Esta proposición, que nos trae un diputado del sector mayoritario, declara prácticamente en comisión a todo el personal de la justicia de la Nación para que en el término de 90 días haya que decidir sobre su suerte. No tiene por objeto llevar a todos los sectores de la justicia nacional el propósito de modificación de normas que se consideran equivocadas, de rectificación de prác-

ticas estimadas inconvenientes, o de supresión de actividades que se consideran al margen de lo correcto. Se lleva al campo de la actividad judicial la intimidación que en los distintos aspectos de la vida nacional ejerce, en todas las formas que le es posible, el oficialismo actual.

¿Qué pasa en el país en estos instantes?, se preguntan todos los hombres. ¿Qué le pasa a este oficialismo, que tiene la unanimidad de un Senado, que tiene más de cien legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación...

Sr. Visca. — No está en discusión el oficialismo, señor presidente.

Sr. López Serrot. — ...que tiene el Poder Ejecutivo de la Nación, que dice contar con el ejército, con la unanimidad de los obreros y que, además, se ve precisado a apelar a estos procedimientos intimidatorios, a pesar —repito— de que la falta de prensa libre y de radio libre ya le está entregando a él los instrumentos necesarios para analizar los acontecimientos de la vida nacional en la forma que le conviene...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Decker. — Está fuera de la cuestión el señor diputado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Los señores diputados de la mayoría hacen cuestión de que el señor diputado por la Capital no se refiere al asunto en debate.

Sr. López Serrot. — El señor diputado por Buenos Aires propone este agregado en base a cargos formulados en forma generalizada contra los empleados y funcionarios de la actividad judicial, pero vertidos en este recinto con vaguedad tan extraordinaria, que me permite a mí, un modesto diputado que integra en estos momentos la Honorable Cámara, reclamarle que por lo menos concrete un caso de los que tenga presentes en estos instantes, de incorrecciones de empleados de la administración de justicia que no sea posible subsanar y sancionar mediante el procedimiento que determina esta ley orgánica de la justicia, que con su voto acaba de sancionar la Honorable Cámara.

El señor presidente de la Nación ha dicho ayer a los ganaderos que se es amigo y enemigo...

Sr. Visca. — No dijo eso: expresó que no se podía ser amigo y enemigo a la vez.

Sr. López Serrot. — Es parecido.

Sr. Visca. — Es bien distinto.

Sr. López Serrot. — Lo cierto es que la mayoría considera que en la administración de justicia tiene que entrar a gravitar la misma orientación política del jefe del Estado. Valga esta afirmación del señor diputado que ha propuesto el artículo que se discute, para dar valor a lo de que hace un instante se jactaba el propio señor diputado Visca, durante el transcurso de esta misma sesión, con relación al último de-

creto del Poder Ejecutivo nacional, facultando a los empleados de justicia para que con toda libertad se orienten políticamente, inscribiéndose en el partido político de sus predilecciones ciudadanas.

Hay que respetar, señores diputados, como lo hemos dicho en el debate de hoy, a la justicia como integrante del poder que defenderá nuestra libertad y la de los señores diputados. La justicia no la constituye exclusivamente el aparato de los ministros de la corte, camaristas y jueces. La justicia la constituye en nuestro país toda esa legión de empleados que tiene una experiencia extraordinaria de la vida judicial, adquirida desde hace muchos años, y que sólo podrán ser eliminados de los puestos —que ocupan con dignidad— en el caso de comprobárseles concretamente la comisión de alguna irregularidad que hiciera indeseable o inconveniente su presencia, pero nunca se ha de prestigiar la actividad de la justicia poniendo en duda la corrección y la honestidad del desempeño de todos los pequeños o altos empleados y funcionarios que integran el Poder Judicial de la Nación.

Es un nuevo procedimiento intimidatorio, que seguramente lo aprobará la mayoría con su voto; pero puede tener la seguridad esa mayoría, y todo el país, como ha ocurrido tantas veces, que no habrá de amilanar ni intimidar a las fuerzas auténticamente democráticas, que esperan tranquilas y confiadas el resurgimiento de la Nación.

Nosotros no intervenimos en la defensa de tal o cual empleado o funcionario, sino en la defensa de las buenas normas, en la defensa del empleado público y del Poder Judicial de la Nación.

La justicia tenía que recibir esta bofetada y este latigazo. Pero todo ello debía tener un sello distintivo y caracterizador.

Sepa el personal de la justicia, sepa el Poder Ejecutivo de la Nación, sepa el pueblo todo, que quien propone este artículo, que la mayoría seguramente aprobará, es el diputado José Emilio Visca, representante por la provincia de Buenos Aires, el mismo diputado que tiene en su poder todavía los expedientes que indebidamente ha arrebatado...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — No debe personalizar al señor diputado. Lo prohíbe el reglamento.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Astorgano. — Formulo moción de orden de cierre de debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de orden de que se cierre el debate, formulada por el señor diputado por la Capital.

—Resulta afirmativa de 50 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires, cuya lectura se va a dar por Secretaría.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Como artículo 85 del proyecto:

Dentro del término indicado en el artículo anterior, por esta vez y sin sujeción a lo establecido en el artículo 15 de esta ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de superintendencia, procederá a la reorganización de todo el personal de la justicia de la Nación.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el nuevo artículo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires, de que se ha dado lectura por Secretaría.

—Resulta afirmativa de 65 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Uranga. — Pido la palabra para una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Yo voy a hablar muy breve y serenamente sobre este asunto. Los señores diputados de la mayoría, y especialmente los de origen obrero, a pesar de que no soy yo quien debe arrogarse la pretensión de dar consejos o directivas, comprenderán seguramente la sinceridad de la opinión que voy a verter acerca del gravísimo principio que acaba de votar la Honorable Cámara.

Muchísimos, centenares, miles tal vez de modestos trabajadores, de modestos empleados de los tribunales, se encontrarán desde este momento ante la posibilidad de perder su trabajo. Gente que ha consagrado muchos años —la mayoría, casi toda su vida— a este empleo, pierde el derecho al trabajo que consagra la famosa Constitución de 1949. Algunos de ellos no podrán iniciar ninguna otra actividad y serán llevados a la miseria por esta forma inicua de persecución del hombre por sus opiniones, dando por sentado que puedan tener una opinión distinta.

Sr. Visca. — Lo inicuo es pensar que va a ocurrir eso. Si de nada tiene que arrepentirse el funcionario, seguirá siéndolo. Se están curando en salud los señores diputados.

Sr. Uranga. — Cuando un militar hace una revolución, una sublevación, un complot, se lo separa del ejército; pero se paga el retiro hasta el último día de su vida y luego a sus deudos. Cuando un militar comete un horrible delito, incluso el de traición, se lo considera muerto; pero la familia cobra la pensión. En cambio, de estos empleados civiles de la Nación, modestos y útiles servidores de la Nación, muchos de ellos serán enviados a la miseria sin tener siquiera

derecho a la indemnización por despido que perciben los empleados mercantiles.

¿Hasta cuándo se va a seguir con las purgas? ¿Hasta cuándo esta política de odio y de persecución? Hace siete años que se está echando gente del país: jueces, empleados, obreros.

Sr. Visca. — ¿El señor diputado ha olvidado lo que ocurría en tiempos de Yrigoyen?

Sr. Uranga. — No me he olvidado; ya le voy a contestar.

¿Esta es la política de cordialidad de que se habla? ¿Es posible que se continúe en esta ofensiva constante? ¿No se ha hecho suficiente? ¿Se va a seguir castigando aun más el cuerpo social de la República —fíjense cómo se ríe el diputado obrero señor Argaña ante este planteo que hago— para intimidar y perseguir a la gente, incluso a los más humildes?

En una organización administrativa de tipo civilizado, es elemental el derecho a la inamovilidad, a la estabilidad en el empleo, a la seguridad de poder ir a trabajar todos los días y a cobrar a fin de mes el sueldo o el salario, para atender los reclamos indispensables de la familia.

Sr. Visca. — Está defendiendo a los cesantes, y aquí no hay cesantes.

Sr. Uranga. — ¿A qué quedan reducidos el «derecho al trabajo» y las demás «conquistas sociales»? Uno comprende que se pueda privar a la gente de su empleo cuando se desempeña mal. La manera de terminar con los malos empleados que traicionan a la Nación, como dijo el señor diputado Visca hace un momento, es formular la denuncia concreta, no con acusaciones vagas basadas en simples sospechas. En ese sentido votaremos cualquier iniciativa que permita echar de la administración a los empleados que traicionan al país o que sean ineptos y viciosos, porque se trata de una medida de índole general.

En este caso entra a jugar el chisme, la malevolencia, las intrigas más felonas y subalternas. La gente, de un día para otro, sin saber por qué, se encontrará en la vereda, sin derecho al trabajo y a la vida honrada.

¿Qué es lo que se pretende? ¿Aplanar a todo el mundo bajo la única bandera, bajo el partido único, bajo el jefe único? Eso es totalitarismo. Me duele tener que emplear esa palabra, pero es totalitarismo puro.

Sr. Reynés. — Es administración, es orden.

Sr. Uranga. — ¿Es administración y orden, señor diputado obrero Reynés, quitarle el trabajo a la gente por motivos que no tienen relación con su empleo?

Sr. Reynés. — ¿Habrá que recordar las medidas tomadas por gobiernos radicales? Se decretaban cesantías en masa, como no se han tomado en este gobierno.

Sr. Uranga. — Aun aceptando que fuera cierto lo que afirma el señor diputado, ¡qué pobre

situación la de este movimiento que, para justificar sus abusos y sus errores, tiene que volver la mirada al pasado buscando abusos y errores anteriores! ¿Para eso se sometió al país a las vicisitudes de una revolución? ¿Para tener que buscar constantemente en el pasado el apoyo para las cosas malas que hoy se hacen? Debe decirse: nosotros no hacemos todo lo malo que se hacía antes; estamos instaurando un régimen jurídico de respeto, de cordialidad.

Sr. Vischi. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Uranga. — Sí, señor diputado.

Sr. Vischi. — Escucho con sumo interés al señor diputado Uranga en esa calurosa defensa que hace de los empleados de la justicia. Desde luego que, cuando se trata de defender modestos empleados y obreros, y aun cuando no fueran obreros y empleados modestos pero sí útiles a la sociedad y a la administración, puede estar seguro el señor diputado Uranga que ha de contar con la colaboración, no sólo de los diputados obreros, sino con la de todos los integrantes de este sector.

El señor diputado supone que, de ser sancionado el agregado propuesto por el señor diputado Visca, todos los empleados de la administración de justicia, en cuanto se ponga en vigencia esta ley, van a ser barridos de sus puestos. Quiero señalar que si el propósito de este gobierno fuese ése, si el Poder Ejecutivo de la Nación hubiera tenido la intención de barrer con todos los empleados y obreros que había en la administración pública cuando el peronismo conquistó el gobierno, no tenía necesidad de esperar cuatro años. Podía haberlo hecho mucho tiempo atrás ejercitando las atribuciones que las leyes acuerdan al Poder Ejecutivo para nombrar y remover al personal de la administración pública.

De modo que el señor diputado Uranga está exagerando un poco.

Sr. Uranga. — El señor diputado Vischi contesta a una cosa que no he dicho. Yo no he afirmado que todos los empleados y obreros van a ser dejados cesantes; pero sí he dicho que sobre todos ellos pende la amenaza de la cesantía, y ésta es un arma de intimidación que utiliza el Estado para aplanar a ese gremio y a todos los otros, que han sido objeto del mismo tratamiento...

—Suenan la campanilla que indica que ha vencido el término de que dispone el orador para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ha vencido el término, señor diputado.

Sr. Uranga. — ... en su propósito totalitario de someter al país a una sola jefatura. ¿Para qué se sancionaron los derechos del trabajador, el derecho al trabajo...?

—Suenan la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Como lo ha sostenido el señor diputado por Tucumán, no es tan grave el peligro como lo denuncia el señor diputado por Entre Ríos. Se faculta, por el agregado proyectado, a la Corte Suprema de Justicia para que proceda a la reorganización de todo el personal dentro de un plazo señalado, es decir noventa días. En realidad, no se producirá la cesantía en masa de los millares de empleados que componen la administración judicial. La Corte Suprema está integrada por magistrados dignos, probos y capaces, y —sobre todo— argentinos, que han de proceder con ese espíritu de justicia y de equidad que hasta hoy informa todos sus actos. Deseo, con mis palabras, llevar la tranquilidad a los empleados judiciales honestos y competentes, quienes deben confiar en la serenidad de los jueces de la Corte Suprema.

Yo afirmo que no habrá cesantías en masa. Claro está que los empleados que no cumplen con su deber o que estén saboteando la revolución desde su cargo, no estarán tranquilos, máxime si esos empleados saboteadores están viviendo bajo la esperanza de una contrarrevolución, contrarrevolución anunciada hasta por los propios señores diputados de la oposición, quienes leen sobre la Casa Rosada desde el día 4 de junio la frase de Baltasar, *Mane, Thecel, Phares*, en su esperanza de recuperar el gobierno perdido.

Afirmo que la Corte Suprema ha de hacer uso de esta facultad con equidad y justicia. No teman los empleados honestos, no teman los funcionarios que saben cumplir con su deber.

Por estos fundamentos me opongo a la reconsideración solicitada.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Los argumentos que ha escuchado la Cámara expuestos por el señor diputado Uranga han estado evidentemente cargados de una serie de personales conjeturas que, no obstante el tono tranquilo y sereno que prometió al comienzo de sus palabras, no han condecido con esa promesa y que quitan toda serenidad y justicia a las apreciaciones y juicios emitidos por el señor diputado por Entre Ríos.

Hace pocos días el Poder Ejecutivo de la Nación ha dictado un decreto que consagra el derecho de todo funcionario de la administración pública, cualquiera sea su jerarquía, para afiliarse a cualquier partido político argentino. Ese decreto, que ha merecido un proyecto de declaración del diputado que habla, junto con otros colegas de sector, como decimos en los considerandos del mismo, señala una verdadera etapa ascendente en la vida de la cultura cívica nacional y habla bien claro de cuáles son los propósitos y principios que alberga el gobierno en lo que respecta a orientación política de los componentes de la administración.

El sistema de invasión y de desalojo de las administraciones por parte de los partidos políticos turnantes en el poder, saben bien todos los señores diputados que ha sido una tradición clásica, no solamente en este país, sino también en los Estados Unidos de Norte América, citados tantas veces como ejemplo de democracia. El *spoils system*, así se lo denominó, se utilizó en los Estados Unidos y en virtud de él se desalojaba de todas las posiciones públicas y funciones administrativas a los adversarios políticos.

Yrigoyen, por su parte, defendió el concepto que denominó de las «intervenciones reparadoras». Cuando Yrigoyen expresó el concepto con el cual el radicalismo que llegó al gobierno en el año 1916 habría de intervenir en las provincias, se apartó de los principios expresamente consagrados por la Constitución Nacional, para poner en función aquel otro principio que llamó de la «intervención reparadora» y por consecuencia de cuya aplicación fueron allanadas indiscriminadamente las autonomías de casi todas las provincias argentinas, sin entrar a juzgarse sobre la legitimidad de los títulos de los diversos miembros, empleados o funcionarios que componían la administración de los estados provinciales, en cualquiera de sus ramas.

Hago estas referencias para cotejar tales principios y conductas políticas, frente a las palabras cargadas de conjeturas del señor diputado por Entre Ríos, que ha llegado a formular un dramático interrogante ¿hasta cuándo seguirá esta política de la persecución? como la ha denominado, para que lo compare con un estado de cosas en el que yo me atrevo a afirmar, con la autoridad de diputado de la Nación y de hombre que conoce las más diversas actividades de la administración pública, que en esa administración pública, en todas sus ramas, hay un elevadísimo porcentaje, acaso más del cincuenta por ciento, de funcionarios y empleados del Estado que pertenecen a partidos políticos opositores al nuestro.

El peronismo no ha aplicado el *spoils system* al llegar al gobierno; tampoco ha aplicado el concepto yrigoyenista de las intervenciones reparadoras. El peronismo ha aplicado únicamente el concepto de la reivindicación del mejor servicio en la función del Estado que el Estado debe ejercer como un deber. Esta es la única depuración. Cuando hablamos de resortes flojos, sea dentro del Poder Judicial o dentro de la administración, no estamos aludiendo así al rótulo o a la convicción política que cualquier empleado y cualquier funcionario, cualquiera sea su categoría, tiene el derecho de mantener por ese criterio y ahora por ese decreto del Poder Ejecutivo que nosotros aplaudimos.

Yo lo invitaré al señor diputado que ha hecho estas profecías cargadas de presagios, cargadas

de tintes sentimentales y románticos incluso, a que algún día cotejemos, con la depuración que se hará entre los miembros del Poder Judicial, si es verdad que han regido conceptos persecutorios políticos o el concepto de depuración que acabo de expresar. Verá el señor diputado que dentro de la administración del Poder Judicial, como dentro de todas las ramas de la administración general, continuará el concepto seguido hasta ahora: cuando los funcionarios son competentes, cuando son honestos, cuando cumplen debidamente su misión específica dentro de la rama del Estado a que pertenecen, son y serán absolutamente respetados en su posición política, cualquiera que ella sea, la nuestra o la de cualquier otro partido político argentino legalmente reconocido.

Esta etapa que señala el decreto del Poder Ejecutivo, para el cual hemos pedido la adhesión de la Cámara y su aplauso, respecto de los conceptos en que se funda, fija una verdadera jornada de superación de la cultura cívica argentina. En nombre de ella y de los argumentos que acabamos de dar, rechazamos de plano las palabras del señor diputado por Entre Ríos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Astorgano.— Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Cámpora).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Astorgano.— Hago moción de que se cierre el debate sobre la moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Cámpora).— Se va a votar la moción de orden, formulada por el señor diputado por la Capital, de que se cierre el debate sobre la moción de reconsideración propuesta por el señor diputado por Entre Ríos.

—Resulta afirmativa de 65 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora).— Se va a votar la moción presentada por el señor diputado por Entre Ríos de reconsideración del artículo nuevo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta negativa de 67 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Decker.— Pido la palabra para una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Cámpora).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Decker.— Pido la reconsideración del artículo 77, ahora 78, a fin de introducir un pequeño agregado que cuenta con el apoyo del señor presidente de la comisión.

El texto aprobado dice: «Las disposiciones de la presente ley referentes a los requisitos

para la designación de funcionarios y empleados judiciales no se aplicarán a los que estén desempeñando sus cargos en el momento de entrar en vigor.»

Propongo la reconsideración del artículo a fin de agregar la palabra «magistrados» antes de la palabra «funcionarios», de manera que el artículo diría: «Las disposiciones de la presente ley referentes a los requisitos para la designación de magistrados, funcionarios y empleados judiciales no se aplicarán a los que estén desempeñando sus cargos en el momento de entrar en vigor.»

Con el agregado propuesto queda concretamente aclarado que la disposición alcanza a los jueces y camaristas actualmente en funciones que no sean argentinos nativos.

Sr. Presidente (Cámpora).— Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital de que se reconsidere el artículo 77 del despacho, ahora 78.

—Resulta afirmativa de 57 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora).— Está en reconsideración el artículo 77, ahora 78.

¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital?

Sr. Benítez.— Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora).— Se va a votar el artículo 77, ahora 78, con la intercalación de la palabra «magistrados» antes de la palabra «funcionarios».

—Resulta afirmativa de 65 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora).— En consideración el artículo 83 del despacho, que pasa a ser artículo 86 del proyecto de ley.

—Se aprueba.

—El artículo 84, ahora 87, es de forma.

Sr. Presidente (Cámpora).— Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía.— Hago indicación de que se levante la presente sesión y de que no se llame a sesión en el día de hoy.

—Asentimiento general.

Sr. Presidente (Cámpora).— Como hay asentimiento, no se llamará para la sesión de la fecha y se levanta la sesión.

—Eran las 5 y 45 del día 15 de septiembre.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 2494.